



EL ESTADO DE SINALOA

ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

Tomo CIX 3ra. Época

Culiacán, Sin., Lunes 26 de Marzo de 2018.

No. 038 BIS

Esta Edición Vespertina Bis consta de Tres Secciones

SEGUNDA SECCIÓN

ÍNDICE

PODER EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Programa Sectorial 2017-2021. Gobernabilidad Democrática y Estado de Derecho.

2 - 144

**PODER EJECUTIVO ESTATAL
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**



**PROGRAMA
SECTORIAL**

**2017
2021**

**GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
Y ESTADO DE DERECHO**



**PROGRAMA SECTORIAL DE LA
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y ESTADO DE
DERECHO**

2017-2021

CONTENIDO

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

INTRODUCCIÓN

MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES

CAPÍTULO 1. Diagnóstico

CAPÍTULO 2. Estrategia General

CAPÍTULO 3. Políticas Públicas e Instrumentos

CAPÍTULO 4. Matriz Estratégica

4.1. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción

4.2. Alineación de las Políticas Públicas del Programa Sectorial con los Objetivos Estatales, Nacionales e Internacionales

CAPÍTULO 5. Programas Presupuestarios

Capítulo 6. Indicadores para el Seguimiento y Evaluación del Programa.

6.1. Indicadores Estratégicos

6.2. Indicadores de Gestión

6.3. Mecanismos de Seguimiento y Evaluación

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Mensaje

Lograr que Sinaloa viva en paz, en tranquilidad social y libre de violencia criminal es una meta estatal suprema que exige planeación estratégica, corresponsabilidad y coordinación entre los poderes estatales y órdenes de gobierno, así como la participación proactiva de la sociedad para proponer acciones y dar seguimiento a las políticas públicas.

Los programas sectoriales son instrumentos útiles para la planeación. En ellos se establecen los objetivos, estrategias y líneas de acción de un determinado sector de la economía o de alguna dependencia o secretaría de gobierno, como es el caso. Aquí se describen y detallan con mayor precisión las políticas públicas consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sinaloa.

El Programa Sectorial de la Secretaría General de Gobierno 2017-2021 se deriva del Plan Estatal de Desarrollo publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el viernes 30 de junio de 2017. En este documento se plantean las vías idóneas y específicas, así como acciones, que permitirán mejorar las condiciones de certeza jurídica, seguridad y justicia que merecen los habitantes de Sinaloa, elevando la calidad de los servicios que proporciona esta Secretaría.

A partir de un diagnóstico, el Programa define las políticas públicas, las estrategias y acciones que se emprenden hacia una nueva forma de gobernar dando énfasis a la cualidad de gobierno abierto, eficiente y transparente. Se privilegia la recopilación de información valiosa y el uso de inteligencia para resolver los problemas, dando cauce, además, a la coordinación estrecha entre autoridades.

El Programa establece los sustentos básicos y las estrategias para una gobernabilidad democrática mediante el fortalecimiento de los vínculos y mecanismos de diálogo y acuerdo entre los distintos sectores de la sociedad y autoridades.

La consolidación de un Estado democrático de Derecho requiere que toda la población goce a plenitud sus derechos, sin violencia o discriminación de cualquier tipo.

A través del Programa se fortalece el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos. Además, se establecen estrategias y acciones para erradicar prácticas que los violan.

La realidad de Sinaloa exige poner en ejecución políticas públicas con mayores niveles de participación ciudadana, que permitan a los ciudadanos no sólo exponer sus criterios sobre cuáles deben ser las prioridades, sino poder conseguir que esos ciudadanos empoderados evalúen las políticas públicas, sus estrategias y acciones, las cuales están formuladas a partir del conocimiento detallado de la estructura y dinamismo de la población del estado que ya rebasa los tres millones de habitantes.

El Programa enfatiza el objetivo de salvaguardar y proteger los derechos de las personas, sus bienes y su entorno, aportando los elementos necesarios para darles certeza jurídica y generar confianza hacia las instituciones públicas.

En la Secretaría creemos que con la introducción de nuevas tecnologías de la información se transparentará el proceso de toma de decisiones. Mediante indicadores de desempeño, el Programa establece de manera clara, realista y medible, los objetivos y estrategias que conforman las políticas públicas del Gobierno del Estado en materia de gobernabilidad democrática, participación ciudadana, derechos humanos, certeza jurídica, normatividad y actos registrales, transporte público y seguridad vial, entre otros rubros.

De esta forma, el Programa Sectorial de la Secretaría General de Gobierno 2017-2021, establece por primera vez en la historia de Sinaloa de manera específica las políticas, los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas que permitirán contribuir a hacer de Sinaloa una sociedad que ejerce a plenitud sus derechos.

Invito a los ciudadanos a hacer suyos estos planteamientos y propuestas, pues sólo con la participación proactiva de la sociedad civil organizada, ejerciendo la gobernanza que todos deseamos, será posible alcanzar las metas que nos hemos trazado para desarrollar nuestro mayor potencial como estado integrante de la Federación Mexicana.

Gonzalo Gómez Flores
Secretario General de Gobierno

INTRODUCCIÓN

Introducción

La realidad económica, política y social de Sinaloa reclama la formación de gobiernos visionarios, altamente eficientes, transparentes y capaces para dirigir los esfuerzos encaminados a lograr los anhelos y aspiraciones de la sociedad.

El propósito de la administración pública estatal es implementar un modelo de gobierno que promueva una nueva relación con la sociedad, que sea proactiva, transparente, multidireccional, de real colaboración y orientada a fomentar la participación ciudadana en el seguimiento, evaluación y toma de decisiones de las políticas públicas, brindando con ello claridad y eficacia a la solución rápida de los problemas políticos, económicos y sociales, en el marco de la ética pública y la rendición de cuentas.

En la Secretaría General de Gobierno estamos convencidos que un sistema democrático debe ofrecer soluciones a las demandas más sentidas de la población y mejorar su calidad de vida. Para lograrlo, se requiere de la participación proactiva de la sociedad, y generar, junto con el gobierno, un círculo virtuoso para el desarrollo equitativo de la entidad, construyendo espacios más justos y solidarios con los que menos tienen. El paso importante en este sentido es asumir el compromiso de empoderar a los ciudadanos. Sólo así se podrá avanzar en la gobernanza.

La buena política se debe ejercer en un entorno de mutuo respeto, con apertura e intercambio de experiencias de éxito, asumiendo compromisos firmes más allá de las diferencias personales o de grupo, e implementando acciones coordinadas para garantizar el ejercicio de la gobernabilidad democrática.

Vivir en un Estado de Derecho significa que todos ciñamos nuestros actos al imperio de la ley, condición esencial para que prevalezca la armonía, tranquilidad y paz social. Un efectivo Estado de Derecho contribuye sustancialmente a reducir la corrupción e impunidad, combatir la pobreza, la inseguridad y proteger a las personas de las injusticias.

Es obligación nuestra promover el Estado de Derecho y coadyuvar en garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, objetivo de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Es necesario fortalecer el Estado de Derecho para alcanzar mayores tasas de crecimiento económico, disminuir los índices de pobreza y aumentar los niveles de bienestar de las familias sinaloenses. Asimismo, es fundamental y necesario abatir o disminuir la corrupción y la impunidad ya que son dos de los grandes lastres para el crecimiento de Sinaloa.

Es tarea fundamental de esta Secretaría avanzar en el fortalecimiento de una sociedad incluyente, regida por el respeto irrestricto a los derechos humanos, a la diversidad y los principios del pluralismo, la multiculturalidad, interculturalidad y la educación en la igualdad.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada por el Congreso de la Unión en junio de 2011, obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.

Mediante un sistema de justicia óptimo y accesible se puede sustentar de mejor manera el desarrollo, un gobierno responsable, abrir más oportunidades a la gente y alcanzar la equidad y respeto a los derechos fundamentales.

La Secretaría General de Gobierno se rige por la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, por el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa (publicado en el P.O. "El Estado de Sinaloa", Núm. 001, de 1 de enero de 2017, ref. mediante decreto publicado en el P.O. Núm. 055, de 3 de mayo de 2017) y por su Reglamento Interior (publicado en el P.O. Núm. 065, de 24 de mayo de 2017).

En total son 60 fracciones del artículo 17 del Reglamento Orgánico, donde se describen los asuntos que le corresponde atender y despachar a la Secretaría, lo cual la convierte en la dependencia que aglutina más entidades administrativas y que coordina a más organismos de la Administración Pública.

De conformidad al Reglamento Interior, la Secretaría cuenta con numerosos servidores públicos y varias unidades administrativas y se distribuyen de la siguiente manera: directamente de la oficina de la Secretaría, dependen la Secretaría Particular, la Secretaría Técnica (lo que era antes el Secretario Privado), la Coordinación Administrativa y la Unidad de Estudios Constitucionales y Legislativos. Cuenta además con 3 Subsecretarías: Subsecretaría de Gobierno, Subsecretaría de Normatividad e Información Registral y Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. De la Subsecretaría de Gobierno dependen: la Dirección de Vialidad y Transportes; la Dirección de Gobierno, y la Dirección de Evaluación y Seguimiento. De la Subsecretaría de Normatividad e Información Registral dependen: la Dirección General del Registro Civil; la Dirección de Inspección y Normatividad; la Dirección del Trabajo y Previsión Social, y la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. De la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos dependen: la Dirección de Asuntos Jurídicos; la Dirección de Derechos Humanos; la Dirección de Asuntos Agrarios, la Dirección del Archivo General de Notarías, y el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

La Secretaría tiene la encomienda de coordinar a los organismos y entidades siguientes: Instituto de la Defensoría Pública del Estado; la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; el Consejo Estatal de Población; el Instituto de Protección Civil; el Instituto Sinaloense de las Mujeres; el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (CEPAVIF); la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); el Archivo Histórico General del Estado, y los demás consejos, comisiones u organismos que mediante decretos o acuerdos de creación dependan de esta Secretaría (como la Comisión de Coordinación

Intersecretaral Estatal para el Seguimiento, Operación, Consolidación y Evaluación del Proyecto Baluarte-Presidio, creado mediante Acuerdo del Ejecutivo, publicado en el P. O. Núm. 031, de 8 de marzo de 2017).

En cuanto a la movilidad, el gobierno la reconoce como un derecho de los ciudadanos, al igual que el libre tránsito por el territorio de Sinaloa. Es para nosotros una prioridad mejorar el servicio de traslado, ampliar la cobertura de rutas urbanas y foráneas para satisfacer la demanda creciente en el transporte público. Consideramos que el transporte público que tienen las principales ciudades del estado debe evolucionar para convertirse en un real sistema de movilidad para brindar a la población un medio de transporte seguro, confiable, económico y comprometido con los ambientes naturales. Además, urge modernizar el parque vehicular con nuevas unidades automotrices dotadas de tecnología de punta, que respondan a tres ejes: a) movilidad de carácter social, b) movilidad con responsabilidad ambiental y c) movilidad accesible. Es necesario sustituir las viejas unidades por otras que emitan una baja emisión de contaminantes, igualmente, debe haber en cada ciudad suficientes autobuses equipados para facilitar el acceso a personas con incapacidades físicas. Los autobuses deben contar con rampas semiautomáticas para personas con problemas de motricidad, espacio para un perro guía y un timbre para personas sordas o invidentes. La apuesta de cualquier ciudad del mundo es garantizar su viabilidad para el futuro, y se basa en tener un mejor sistema de transporte colectivo, un sistema suficiente y económico, capaz de llevar a la gente de un lugar a otro con recursos tecnológicos avanzados, utilizando ya no combustibles fósiles sino energías limpias.

Urge la gestión y atención eficaz a los problemas asociados a la movilidad urbana, como es hacer más eficiente el servicio del transporte colectivo en las ciudades y entre las poblaciones del medio rural, así como en diversas materias.

Quizá desde la Secretaría podamos incidir o influir poco o mucho en lograr el cambio. O quizá acelerar la velocidad del cambio. O tal vez podremos ajustarnos y adaptarnos al cambio mucho mejor, siempre y cuando tengamos una idea clara sobre lo que pretendemos hacer, conforme a las acciones y metas fijadas en el Programa. Las metas proveen de energía, vitalidad, propósito y dirección a las políticas públicas. Establecer metas es más que un compromiso, requiere de un pensamiento visionario, a largo y a mediano plazo.

Cada uno de los problemas que enfrentamos en el gobierno tiene una razón de ser, pero poseen un denominador común: el económico. La desigualdad económica y social en Sinaloa, aunado al problema de la baja calidad educativa e impunidad, así como otros factores, genera el germen de la delincuencia. En efecto, de una u otra forma debemos reconocer que, en parte, la ausencia de una excelente educación masiva y la desigual distribución de la riqueza son causa de la violencia que nos aflige.

Estamos convencidos que los compromisos para resolver los problemas de Sinaloa deben ser contruidos, consensuados, compartidos, explicados y difundidos a través de programas sectoriales, así como por estrategias y acciones con el fin de lograr más oportunidades de desarrollo y reducir la desigualdad económica de la población. Y esas estrategias, acciones y metas deben evaluarse, porque lo que no se mide... no existe y lo que no se evalúa no se puede mejorar.

Misión

Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo Estatal con los otros Poderes del Estado; llevar y atender los asuntos de política interna y gobernabilidad; proporcionar la asesoría jurídica que requieran las dependencias y órganos de la Administración Pública del Estado, así como servir de enlace y coordinar esfuerzos con los delegados federales y con los gobiernos municipales, con sujeción a los objetivos y prioridades establecidos por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel en el Plan Estatal de Desarrollo, políticas, programas y proyectos.

Visión

La Secretaría General es la instancia gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado que establece y opera los mecanismos jurídicos e institucionales para impulsar el modelo de gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas y promueva la participación ciudadana. De manera eficaz, establece políticas públicas y cumple con sus responsabilidades institucionales.

Principios

Legalidad. Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas jurídicas expresamente les confieren. En todo momento se rigen por las facultades y obligaciones que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo, o comisión, por lo que conocen y cumplen al pie de la letra las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones y atribuciones.

Respeto a los derechos humanos. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los derechos contenidos en la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Certeza jurídica. La Secretaría colabora en la construcción y mantenimiento de un sistema jurídico moderno y eficaz, eliminando la discrecionalidad de funcionarios en la toma de decisiones. Nuestra prioridad es aumentar la certidumbre de los ciudadanos de que las leyes, reglamentos y demás disposiciones se cumplen en Sinaloa.

Promoción de la cultura de la legalidad. Concientizar a los servidores públicos y a los usuarios de los diversos servicios que proporciona esta Secretaría sobre la relevancia de construir y mantener una cultura de respeto a las normas jurídicas

Actualización del orden jurídico de Sinaloa. Evaluar periódicamente si las leyes, reglamentos y demás disposiciones resultan adecuadas a la realidad económica y social, y remediar eventuales carencias, armonizándolas -mediante proyectos de iniciativas- con los tratados internacionales y con el orden jurídico nacional y general.

Honradez. Los servidores públicos se conducen con rectitud y verticalidad sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, prebenda, provecho o ventaja personal o a favor de terceros. No buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

Lealtad. Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado, concretamente el gobierno del Estado encabezado por Quirino Ordaz Coppel, les ha conferido.

Vocación y calidad de servicio. Los servidores públicos tienen una vocación de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

Imparcialidad. Los servidores públicos dan a la población en general el mismo trato a todos, no conceden privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva y rápida.

Eficiencia en el trabajo. Los servidores públicos trabajan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y, mediante el uso responsable y transparente de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.

Transparencia. Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales que estén bajo su custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso a la información pública, proporcionando copia de la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan. En el ámbito de su competencia, difunden información gubernamental, como un elemento que promueve un gobierno abierto.

Rendición de cuentas. Los servidores públicos asumen plenamente su responsabilidad de rendir cuentas claras de su ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones.

Valores

Asertividad. Los servidores públicos procuran adquirir la habilidad personal que les permita expresarse y defender sus opiniones y pensamientos de forma adecuada y positiva en el momento oportuno, sin excluir o negar los derechos de las otras personas.

Empatía. Los servidores públicos procuran establecer vínculos más sólidos y positivos con la población en situación difícil o en desventaja con el fin de reconocer y comprender los sentimientos, ideas, conductas y actitudes que manifiestan, y entender las circunstancias que les pueden afectar en situaciones concretas.

Interés Público. Los servidores públicos laboran buscando en todo momento la máxima atención a las diversas necesidades y demandas de la sociedad, siempre por encima de intereses individuales o de grupos.

Integridad y ética gubernamental. Los servidores públicos laboran de manera congruente con los principios y valores que deben regir en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función pública. Se comprometen en ajustar su conducta a una ética que responda al interés público, generen certeza y confianza en los ciudadanos.

CAPÍTULO I.

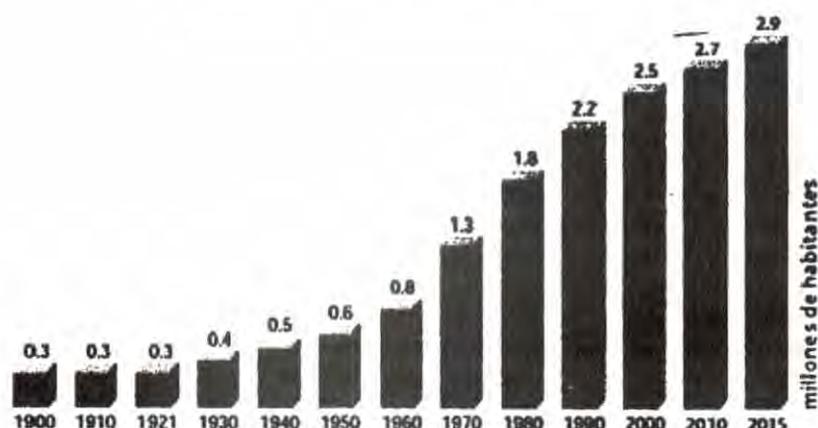
Diagnóstico

Diagnóstico

1.1 Población Sinaloense

En el primer trimestre del año 2017, la población en Sinaloa superó los 3 millones de habitantes. La evolución demográfica observada el pasado siglo XX en Sinaloa puede dividirse en cuatro etapas: la primera de 1900 a 1921, que se caracterizó por un lento crecimiento (menor al 1% anual); la segunda, de 1921 a 1940, cuando se recupera el crecimiento, pasando su tasa del 0.67% al 1.03% en el periodo; la tercera, de 1940 a 1970, que registra un rápido crecimiento demográfico, al pasar de 492 mil 821 habitantes a 1 millón 344 mil 130, y la más reciente, de 1970 a la fecha, cuando se inicia el descenso del crecimiento demográfico, pasando de una tasa de 4.3% a 0.8 en la actualidad.

Población Total del Estado de Sinaloa (1900 - 2015)



Fuente: CONAPO

Este incremento en el número de habitantes fue objeto de preocupación, por ello, se plantearon nuevas estrategias para tratar de regular los fenómenos que afectan a la población sinaloense con relación a su volumen, estructura, dinámica y distribución a fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social.

1.2 Gobernabilidad Democrática

En los tiempos actuales, el gobierno se ejerce en un ambiente social donde predomina la libertad de expresión y la pluralidad de las ideas. Y es que cualquier democracia tiene una responsabilidad fundamental: servir como un instrumento útil para impulsar el desarrollo colectivo y el progreso de todos por igual.

La Gobernabilidad que necesita y merece Sinaloa no significa únicamente liberar a la sociedad y al gobierno de la corrupción, sino también otorgar al pueblo los derechos, los medios y la capacidad para participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas y para hacer que los gobiernos sean responsables de sus actos. Significa que la gobernabilidad ha de ser justa y equitativa, y, ante todo, democrática.

En Sinaloa, la diversidad política y social es amplia y se manifiesta con vigor en el seno de una sociedad cada vez más conocedora y crítica acerca de los problemas que padece y de las posibles soluciones. En contraste, los partidos políticos tradicionales pierden credibilidad y se evidencian sus problemas internos, en virtud de que se encuentran sumidos en una crisis desde hace varios años.

No hay partido o agrupación política que se salve de la crítica, ya sea por sus gastos, por sus prácticas, por su falta de transparencia y rendición de cuentas, por la ausencia de democracia interna o por el protagonismo excesivo de algunos de sus líderes. Es un hecho comprobado que ciertos partidos están lejos de los intereses de los ciudadanos y cerca de las ambiciones personales o de grupos. En Sinaloa, hay partidos de un solo hombre o de una camarilla o de un grupo reducido o de múltiples organizaciones; todos ellos están en tela de juicio de la sociedad.

Es palpable que en México se percibe un descontento de millones de ciudadanos con los partidos políticos tradicionales, incluso es mayor que en otros países, pero no hay indicios de que en el año 2018 haya una crisis terminal que derive en la aparición de personajes surgidos de fuera del sistema, como se ha visto en los países de Ecuador o Bolivia. Esta crisis de los partidos en México se ha venido desarrollando de manera lenta y ha generado cambios parciales en el sistema político electoral. Uno de ellos fue la apertura a las candidaturas independientes, tema surgido como una suerte de respuesta de los mismos partidos a la situación de inconformidad que se vive y como resultado de las presiones de los sectores de la sociedad civil, pero salvo casos marginales, no ha puesto en duda el rol central que siguen teniendo los partidos políticos tradicionales.

Lo cierto es que la democracia se ve amenazada por los continuos enconos de protagonistas que interactúan en el escenario político y por el justificado y creciente desencanto de grupos sociales.

Por otro lado, la corrupción, fractura la confianza de los ciudadanos en sus representantes y gobernantes. Es el segundo problema que más nos preocupa. Incluso, está por encima

del desempleo y de la pobreza; el primero es la inseguridad, de acuerdo con datos proporcionados por el INEGI. El índice de Percepción de la Corrupción 2016, que realiza Transparencia Internacional, colocó a México en el sitio 123, luego de que un año antes lo había situado antes en la posición 95, tras evaluar a más de 170 países. Cabe resaltar, que entre los estados que conforman la OCDE, el último puesto es para México. Por fortuna, organizaciones de la Sociedad Civil han denunciado estas prácticas mediante campañas permanentes en los medios de comunicación social, lo que propició se creara el Sistema Nacional Anticorrupción, y luego el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en Sinaloa, mediante reformas constitucionales y legales que ya están vigentes, aun cuando la operación de estos sistemas se encuentra en su fase inicial y su conformación aún no se completa. Esta es nuestra mayor oportunidad para incidir en el cambio de mentalidad de los sinaloenses y nuestra fortaleza radica en los niños, adolescentes, jóvenes ciudadanos y servidores públicos, que influenciados por una nueva cultura cívica y de servicio a la comunidad, denunciarán cualquier delito, falta, omisión o conducta que vaya en contra del gobierno, de las instituciones públicas o del interés colectivo de los sinaloenses.

La modernidad ha permitido la formación de estructuras de gobierno plurales en donde algunos grupos políticos se ven representados, compartiendo el ejercicio del poder. La sociedad y sus diversos grupos organizados conviven cotidianamente, se hacen escuchar y promueven sus intereses colectivos logrando, cada vez más, incidir en la toma de decisiones públicas.

El reto principal que tenemos es consolidar la Gobernabilidad Democrática en Sinaloa, y sólo será posible avanzar mediante la concurrencia de voluntades, el diálogo constructivo y respetuoso, la tolerancia hacia las ideas, la corresponsabilidad y la solución pacífica de conflictos, en apego al marco jurídico vigente.

La gobernabilidad democrática requiere de demócratas. Requiere de hombres y mujeres visionarios, responsables y comprometidos con el presente y futuro de Sinaloa. Requiere mecanismos o instrumentos viables que articulen la participación real y efectiva de los partidos políticos, de las instituciones educativas, de ciudadanos y sus organizaciones, de los poderes estatales y de los municipios en la definición, conducción y evaluación de las políticas, programas, acciones y metas.

En síntesis, en Sinaloa no hay déficit o crisis de la Gobernabilidad Democrática, pero requiere consolidarla con el concurso y participación de todos.

1.3 Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad

El Gobierno, encabezado por Quirino Ordaz Coppel, enfrenta el gran reto de proteger, darle vitalidad y fuerza contundente al Estado de Derecho. Enfrenta desafíos inherentes a la pluralidad y diversidad de la sociedad sinaloense. Pero, también enfrenta el reto de disminuir la brecha de la desigualdad económica y social que separa a la población. La

lacerante desigualdad e inequidad en el disfrute de derechos entre hombres y mujeres. Así como el reto de combatir con toda la fuerza del Estado a la delincuencia criminal.

Entre estos desafíos se encuentran la necesidad urgente de fomentar la cultura cívica ciudadana y fortalecer su participación en las decisiones públicas, de establecer una coordinación eficaz con gobiernos municipales, de promover un mayor equilibrio entre regiones y municipios, de redefinir la perspectiva con la que se gestionan las demandas y conflictos a fin de construir soluciones pacíficas y difundir los valores democráticos y de la cultura de la legalidad para una mejor y saludable convivencia social.

En todo régimen democrático hay una característica predominante: la insistencia en que prevalezca el Estado de Derecho. Esto es, que en vez de que nuestra norma fundamental esté dirigida a fortalecer el ejercicio del poder frente a los derechos de los individuos, de las personas, de los ciudadanos, sea consagrada a que los derechos ciudadanos limiten el ejercicio del poder. La democracia se fundamenta en el reconocimiento del Derecho, y por lo tanto de la Ley como la norma básica de la convivencia en sociedad. En una sociedad que se precie de vivir en un Estado de Derecho, todos debemos ceñirnos a la legalidad, velar por el cumplimiento de los derechos y deberes constitucionales y proteger las libertades públicas. Sin embargo, esta aspiración es constantemente acosada por nuestras debilidades manifiestas: la prevalencia de fenómenos como la corrupción, inseguridad pública y privada, impunidad, ausencia de ética en el servicio público, entre otras no poco frecuentes acciones que dañan el tejido social, es decir, la confianza en las instituciones y la convivencia armónica y civilizada. Son diversas las causas que contribuyen a ello. La descoordinación y desorden gubernamental del pasado, por ejemplo, favoreció el creciente protagonismo en hechos de violencia de las organizaciones criminales o la prevalencia de un estado de cosas que poco ayuda a la eficacia de las políticas públicas encaminadas al desarrollo y bienestar de la población.

En un estudio realizado en 2015 por *World Justice Project* para medir el índice del Estado de Derecho, México se ubicó en el lugar 79 de 102 países, con lo cual se infirió que en nuestro país el Estado de Derecho es poco efectivo para reducir la corrupción y proteger a las personas de las injusticias.

1.4 Derechos Humanos

Durante las últimas seis décadas el mundo cambió radicalmente. Mucho se lo debemos a la innovación científica y tecnológica que tuvo un impulso y un avance sorprendente después de la Segunda Guerra Mundial. De manera paralela, se han registrado grandes acontecimientos políticos y sociales que con el paso del tiempo han provocado un gran movimiento en pro de los derechos humanos, y ese lapso apenas constituye un momento fugaz en la larga historia de la humanidad. Este crecimiento notable en pro del respeto y tutela de los derechos humanos es uno de los legados más sobresalientes del siglo XX.

En México, las reformas constitucionales del 10 de junio del año 2011, así como los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, forman parte importante de nuestro régimen jurídico fundamental. Este bloque de constitucionalidad se ha convertido en una plataforma para la defensa de las personas y habrá de cobrar mayor vigor con su aplicación efectiva. El avance en esta materia ha sido rotundo y no se detiene, porque además todavía ofrece una enorme gama de posibilidades, ya no necesariamente teóricas, sino enfocadas a la acción en beneficio de las personas.

Sin embargo, se requiere un cambio de mentalidad para continuar y avanzar en México y en Sinaloa en este sentido, ese es un reto y se puede tomar a la vez como una debilidad. Y es que las personas tienen la razón y también la voz para reclamar sus derechos fundamentales, los cuales aún no tienen plena garantía y efectividad en su mayoría. No podemos ni debemos olvidar la verdad insoslayable y por demás contundente de que México sigue siendo el país con más denuncias en su contra por violaciones a los derechos humanos presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a que posee el sistema con más instituciones públicas para hacerlos efectivos y garantizarlos.

A raíz del homicidio de la abogada sinaloense Norma Corona Sapién, surgió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y después aparecieron las comisiones estatales como organismos constitucionales autónomos. Desde entonces, hemos visto el nacimiento y posterior activismo de cientos de Organizaciones de la Sociedad Civil que han dado voz a las aspiraciones legítimas de libertad e igualdad.

En Sinaloa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al lado de otras organizaciones de ciudadanos han otorgado un impulso decisivo y relevante a la cultura en pro de los derechos humanos. Poco a poco, hemos abandonado prácticas y costumbres sociales tradicionales, propias de un régimen feudal y decimonónico y que chocan con los principios y normas que nos rigen. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. El problema que impide que esta institucionalización sea real y efectiva tiene que ver con el choque entre las ideas viejas y las nuevas. Lo viejo se resiste, en tanto mentalidad prevaleciente. Y las ideas y principios nuevos deben irrumpir y aplicarse con decisión.

Habrà que recordar que el objeto del Estado es el bien de las personas. Por esa razón deben estar por encima del Estado. Invariablemente, los derechos son de las personas y no del poder político organizado como Estado. Este último sólo tiene razón de ser en función de las personas.

La Suprema corte de Justicia ha jugado un papel importante respecto a los derechos humanos. La Corte se ha convertido no sólo en un contrapeso a los otros dos poderes sino también en su garante. Esto ocurre porque los derechos se pueden judicializar.

El 24 de mayo de 2017, se creó la Dirección de Derechos Humanos, en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría. El 20 de junio, se firmó el Acuerdo por el que se delegan facultades al Subsecretario de Asuntos Jurídicos y al Director de Derechos

Humanos, para efectos de atender y gestionar cualquier tipo de apoyo para las víctimas del delito (P.O. 23 de junio de 2017) y desde entonces y hasta el 15 de agosto se han atendido y apoyado a 60 víctimas.

A las víctimas se les proporciona atención inmediata, atención psicológica y manejo de crisis y se les otorga apoyos económicos para gastos de hospitalización. Asimismo, para gastos funerarios, cuando se requiere.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, órgano constitucional autónomo, de enero a junio de 2017, ha atendido alrededor de 2 500 asuntos, además 235 quejas se encuentran en trámites de gestión. Las principales autoridades señaladas como responsables son: Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación Pública y Cultura, Secretaría de Salud y gobiernos municipales. En estos primeros 7 meses la CEDH ha emitido cinco recomendaciones a diversas autoridades, entre ellas la Fiscalía General del Estado, a los gobiernos municipales de Mazatlán y Guasave y a la dirección del Hospital Civil de Culiacán. En el rubro de seguridad y justicia, es la Fiscalía General del Estado la que recibe más quejas en la CEDH, contándose 76 en el periodo de enero a julio de 2017, entre ellas destacan 39 las denuncias por violación de derechos humanos de personas privadas de la libertad, detención arbitraria, entre otras.

En cuanto a la población que ha sido desplazada de pueblos de la sierra por amenazas de bandas criminales, es necesario realizar un censo poblacional para saber el número de habitantes que han abandonado esos pueblos ubicados en los municipios de Choix, Badiraguato, Cosalá, San Ignacio, Concordia y El Rosario.

Se sabe por cálculos recientes realizados por la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS) que al menos mil 200 personas han sido desplazadas de 15 comunidades ubicadas en la sierra del municipio de Concordia., debido a enfrentamientos y amenazas del crimen organizado. A mediados de julio de este año inició el éxodo de habitantes de los pueblos de La Petaca y Chirimoyos, y paulatinamente se fueron sumando familias de El Carrizal, El Coco, Cuantantal, Potrerillos, Santa Catarina, Santa Lucía, La Capilla del Taxte, Habal de Copala, La Guayanera, y poco después la comunidad de Pánuco. El de este año es el segundo desplazamiento de personas a causa de la inseguridad en Concordia. En el año 2013, más de mil pobladores de ocho localidades colindantes con la sierra del municipio de Mazatlán y el estado de Durango se vieron en la necesidad de abandonar sus viviendas.

Respecto al panorama acerca de las desapariciones forzadas en México, según la CNDH en los últimos diez años han desaparecidos 29 mil 156 personas. El mayor número se concentra en 12 estados. La lista la encabeza Tamaulipas (5 mil 563 casos; le sigue el Estado de México (2 mil 984); Jalisco (2 mil 523); Sinaloa (2 mil 385); Nuevo León (2 mil 374); Chihuahua (mil 933); Coahuila (mil 620); Sonora (mil 288); Guerrero (mil 155); Puebla (mil 80); Michoacán (mil 29). Sin embargo, la tendencia va en aumento y se

sostiene a nivel nacional en los 3 mil desaparecidos por año, pero no son cifras definitivas, sino que podrían representar 25% de las desapariciones, según los especialistas. Además, hay que considerar un subregistro provocado por el temor de algunos familiares para presentar denuncias de desaparecidos porque en la Procuraduría General de la República (PGR) y las fiscalías de los estados no se cuenta con información precisa. A pesar de que la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas fue expedida por el Congreso de la Unión desde el año 2012, aún no se cuenta con un reglamento que permita instrumentar lo dispuesto por dicha ley. En conclusión, los especialistas del tema arguyen que las desapariciones no se detienen o reducen dada la impunidad y porque no hay voluntad de los gobiernos por buscar y por localizar a los desaparecidos. Otro problema, según la CNDH, es la ausencia de una ley general, la falta de investigaciones del Ministerio Público para la búsqueda y localización, inconsistencia en la definición jurídica de los tipos de desaparición, falta de equipos profesionales de búsqueda (en su lugar operan mujeres -familiares de desaparecidos- que voluntariamente se dedican a "rastrear" zonas rurales en busca de cuerpos enterrados), inexistencia de un registro nacional y estatal, nula coordinación entre autoridades competentes, escasa capacitación de funcionarios, así como la violencia, inseguridad e impunidad. Algunos de estos déficits podrían ser cubiertos con la llamada Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la cual se encuentra en proceso de aprobación en la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

1.5 Derecho de los Trabajadores y Acceso a la Justicia Laboral

En el primer trimestre del 2017, la población en Sinaloa superó los 3 millones de habitantes. De éstos, el 73.7%, es decir, 2 millones 230 mil 962, es de 15 años o más. La población económicamente activa es de más 1 millón 376 mil 285, que representa el 45.5% de la población total. De este universo, 1 millón 328 mil 463 personas constituyen la población ocupada (96.5%), de ellos, el 73.7% son trabajadores asalariados, el 17% son trabajadores por cuenta propia, el 5.9% son empleadores y el 3.2% sin pago y otros.

En septiembre de este año, Sinaloa contaba con un total de 522 mil 697 trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 26 mil 474 más que en septiembre del año pasado, lo que significó un crecimiento anual de 5.34 por ciento mayor al incremento que se tuvo a nivel nacional, el cual fue de 4.31 por ciento, según el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN), conforme a datos del IMSS. Del total de trabajadores, 436 mil 374 (83.49%) son permanentes; 56 mil 239 (10.76%) eventuales urbanos, y 30 mil 084 (5.76%) trabajadores del campo.

Los trabajadores que se ubican en el trabajo informal representan el 50.3% es decir, 668 mil 216 de la población ocupada -con las repercusiones que ello significa-. El trabajo informal se compone de las siguientes categorías:

- El trabajo no protegido en la actividad agropecuaria

- El servicio doméstico remunerado de los hogares, así como
- Los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.

Ocupados por posición en el trabajo



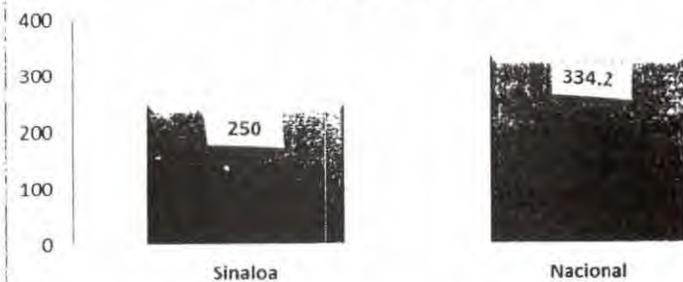
Fuente: Dirección del Trabajo y Previsión Social

Ocupación por sexo



Fuente: Dirección del Trabajo y Previsión Social

Salario diario asociado a trabajadores asegurados en el IMSS al trimestre enero-junio 2017



Fuente: Dirección del Trabajo y Previsión Social

Trabajadores ocupados por nivel de ingresos



Fuente: Dirección del Trabajo y Previsión Social

Sinaloa está en el lugar 15 con el 50.8%, es decir, 1.1 por debajo de la media nacional en este rubro. Las tendencias y características de las personas ocupadas en el estado de Sinaloa son de 11 sectores de actividad económica: Agropecuario, Comercio, Construcción, Educación y Salud, Extractiva, Gobierno, Servicios Personales, Servicios Profesionales, Transformación, Transporte y Turismo.

El primer dato relevante es que el 27.6% de las personas trabaja más de 48 horas a la semana, lo cual indica que éstas tienen más de un empleo o bien, su horario es mayor al que la Ley Federal del Trabajo establece como jornada laboral.

En cuanto a las remuneraciones, dos de cada diez trabajadores no tienen ingresos o ganan como máximo \$1,795 al mes; el ingreso máximo de dos terceras partes de la población ocupada es de \$5,383 y sólo el 8.3% recibe un sueldo mayor de \$8,973. Es decir, 9 de cada 10 trabajadores ni siquiera reciben 9 mil mensuales, lo que ubica a Sinaloa entre los primeros lugares de los estados con más bajos salarios.

La Dirección del Trabajo y Previsión Social es la instancia rectora por parte de Gobierno del estado de Sinaloa, en los temas de protección de los derechos de los trabajadores y vigilancia laboral. Los principales problemas que enfrenta esta Dirección, que depende de la Subsecretaría de Normatividad e Información Registral, son:

1. Delimitación geográfica de cobertura limitada para llevar a cabo las visitas de inspección en temas de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento en todo el estado.
2. Limitada garantía jurídica al derecho de protección contra toda forma de explotación económica de las niñas, niños y adolescentes.
3. Ausencia de una política empresarial en materia laboral y mejores salarios.
4. Ingresos familiares insuficientes para satisfacer necesidades básicas.
5. Limitada garantía jurídica al derecho laboral de los trabajadores económicamente activos.
6. La incertidumbre en cuanto al futuro de las procuradurías de la defensa del trabajo con la reforma constitucional en materia de justicia laboral y la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. En caso de convertirse estas en “centros de conciliación especializados e imparciales”, se requerirá de planeación, recursos y capacitación para el personal de la procuraduría.

Fortalezas y debilidades (de orden interno) de la Dirección de Trabajo y Previsión Social:

Fortalezas:

1. Programa estatal de inspección laboral;

2. Comisión estatal de seguridad, salud, capacitación e higiene;
3. Programa de inclusión laboral (reincorporación de presos liberados a la fuerza laboral);
4. Grupo de coordinación interinstitucional para la atención de grupos prioritarios;
5. Coordinación estatal de la mesa de inclusión y seguridad social de la cruzada contra el hambre.

Debilidades:

1. Deficiente cobertura de visitas de inspección en materia seguridad, higiene, salud, capacitación de trabajo y adiestramiento en el estado, ya que estas actividades sólo están focalizadas en el municipio de Culiacán.
2. El reglamento interior de la dependencia que data del 12 de marzo de 1984, contempla al Servicio Estatal del Empleo como un área de ella. Señala que corresponde a esta Dirección “estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación y el empleo, así como la colocación de los trabajadores desempleados en el aparato productivo”. Estas funciones, aunque a nivel federal competen a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el estado las realiza la Secretaría de Desarrollo Económico.
3. Las unidades foráneas están prácticamente abandonadas, con mobiliario de hace 20 años o más, sin espacios adecuados para la atención al público y con muy poco personal.
4. El sistema de inspección deja mucho que desear, ya que, si bien es cierto que en lo jurídico se han actualizado formatos de inspección a los lineamientos legales actuales, la forma en que se presta este servicio público de defensa de los trabajadores, hace posible que se pudieran presentar actos de corrupción. Es decir, se incumple con la disposición de otorgar recursos económicos a los inspectores del trabajo para llevar a cabo sus tareas de campo.
5. La Dirección, cuyas funciones son eminentemente de atención al público, cuenta con un solo vehículo para todo el territorio del estado.
6. Los procuradores auxiliares del trabajo que realizan funciones prácticamente iguales que los secretarios de mesa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no reciben las compensaciones como éstos, con lo cual no se es coherente con el lema de que “a trabajo igual, salario igual”.
7. Deficiencia de cobertura de personal para el área de inspección en materia de previsión social y
8. Insuficiencia de vehículos de transporte y viáticos.

Oportunidades y desafíos (de orden externo)

Oportunidades:

1. Nuevo modelo de justicia laboral –más ágil, económica y con mayor certeza jurídica– basado en la conciliación para resolver de fondo los conflictos.
2. Brindar certidumbre jurídica a empresarios y trabajadores en los procesos de inspección a fuentes de empleo y en la conciliación de sus conflictos derivados de la relación laboral.
3. Mantener un diálogo abierto con los sectores productivos y organizaciones sociales, a fin de colaborar para mantener el clima de estabilidad laboral que tiene actualmente Sinaloa.
4. Llevar a cabo campañas de concientización en orientación, capacitación y adiestramiento en los centros de trabajo en materia de seguridad, salud y capacitación.
5. Dar seguimiento a las normas oficiales mexicanas que establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
6. Dar seguimiento a los protocolos de inspección en materia de seguridad, salud e higiene, capacitación y adiestramiento en el trabajo.
7. Dar seguimiento a las comisiones consultivas de seguridad e higiene para el beneficio de los trabajadores.
8. Contribuir a la reducción de riesgos de trabajo en los sectores productivos de mayor siniestralidad, peligrosidad y/o condiciones de vulnerabilidad.
9. Ampliar la cobertura y efectividad de la vigilancia de la normatividad laboral.
10. Profesionalizar la actividad de inspección y vigilancia
11. Facilitar el cumplimiento de la normatividad, fortalecer los mecanismos de denuncia, transparentar y hacer más eficiente la función de la Dirección.
12. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en la erradicación del trabajo infantil y en la protección del trabajo de adolescentes.

13. Brindar asesoría y representación jurídica a los trabajadores que lo soliciten con relación a problemas de carácter laboral.

14. Apoyo para el retiro de abogados particulares que se posicionan a las afueras de la procuraduría, que en muchas ocasiones desinforman a los usuarios, entorpeciendo así las funciones de esta dependencia, además de cobrarles por sus servicios.

Desafíos:

1. Lograr que los empresarios cumplan con las normas laborales, prevenir accidentes y enfermedades de trabajo y contribuir al incremento de la productividad de las empresas.
2. Contribuir a la estabilidad en el empleo
3. Establecer un entorno protector de los derechos de los menores trabajadores, evitando el trabajo de quienes sean menores de 14 años.

Hasta este año, la justicia laboral fue obsoleta, compleja e ineficaz. En febrero de este año, el Constituyente Permanente aprobó reformas y adiciones a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF, 24 de febrero de 2017).

Con esos cambios innovadores se pretende acabar con los vicios en los procesos llevados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales desaparecerán en el año 2018. Con esta reforma constitucional se redefinen los órganos de justicia laboral para convertirlos en jurisdiccionales y se rescata la función fundamental y conciliadora. Al trasladarse la solución de conflictos entre trabajadores y patrones al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas (en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje) se busca erradicar las prácticas corruptas -que hoy es moneda corriente- y mejorar el acceso a la justicia en materia laboral.

De esa forma se extingue la figura de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales tienen hasta ahora una integración tripartita: cada una cuenta con un representante de los trabajadores, uno de los patrones y uno del gobierno. Se trata de un modelo anacrónico, porque ha quedado desfasado y rebasado en el siglo XXI. Se prevé un proceso legislativo de cambios profundos al derecho laboral mexicano. Se tendrán que aprobar y publicar 2 leyes secundarias por parte del Congreso de la Unión y otras de carácter local. El término para que entren en vigor las reformas secundarias feneció el 24 de febrero de 2018. El Congreso del Estado de Sinaloa tendrá que expedir nuevas leyes y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y el Ejecutivo promulgarlas y publicarlas.

Es de advertir que la competencia del Ejecutivo Estatal en esta materia se verá limitada por el nuevo paradigma de justicia laboral. Se prevé que en cada entidad federativa habrá un Centro de Conciliación, una nueva figura conformada como ente público con

personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

Bajo este nuevo esquema se avizora un área de oportunidad para que la justicia laboral sea más ágil, económica y con mayor certeza jurídica al transitar hacia un modelo basado en la conciliación para resolver de fondo los conflictos, en lugar de dar paso a procedimientos formales que alargan los juicios en los tribunales.

En tanto que se dé la implementación del nuevo modelo, el Ejecutivo del Estado, a través de sus instancias, continuará atendiendo las diferencias o conflictos entre patrones y trabajadores y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.

Un buen ambiente laboral en instituciones y empresas también contribuye a la paz y concordia social. De ahí que la problemática que atañe al cumplimiento a derechos de trabajadores deba atenderse y resolverse. Sinaloa es una entidad que destaca por su estabilidad laboral, no obstante, continúan vulnerándose y agredándose los derechos de los trabajadores. Si bien es cierto, los emplazamientos a huelga se redujeron de 171 a 96 en el periodo 2014-2015. Empero, las demandas individuales se incrementaron de 5 mil 255 a 5 mil 751 casos, en tanto que las sanciones a empleadores por no subsanar violaciones a la ley aumentaron de 153 a mil 106 en el periodo 2011-2015.

1.6 Equidad de Género y Violencia contra las Mujeres

México fue uno de los últimos seis países de América Latina que reconoció los derechos políticos de la mitad de su población: las mujeres. Ello muestra lo arraigada que está en nuestro país una cultura machista o misógina que no reconoce los mismos derechos a todos los miembros de la sociedad.

La igualdad de género y concretamente la igualdad en varios ámbitos de la vida pública es un tema que no está del todo comprendido en México y en Sinaloa.

La equidad de género es un principio fundamental que es reconocido en el mundo occidental y como tal es consignado en las políticas públicas de la mayoría de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desdeñar este principio doctrinario y político que es materia de varios tratados internacionales, es pretender ignorar una realidad, una situación que influye en los destinos de la sociedad misma y en nuestra cultura.

En México, la realidad de las mujeres se hace presente con todo vigor en todos los ámbitos de nuestra vida económica, social, política y cultural. Tanto en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, efectuada en El Cairo en 1994, como en los trabajos desarrollados en la Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Pekín en 1995, se ha resaltado enfáticamente el papel estratégico de la mujer en la promoción del desarrollo económico.

En los últimos 40 años, la participación de la mujer en las actividades económicas, empresariales, laborales, académicas y políticas ha crecido de manera sostenida. En Sinaloa, lo observamos a diario. No hay un sólo lugar, un sitio por más recóndito que sea, tanto en las ciudades como en el campo, donde no tenga importancia la presencia de la mujer. Sin embargo, no obstante, su proporción mayoritaria en la población, hay todavía manifestaciones evidentes de desigualdad entre los géneros. Ello sucede porque hay rasgos de nuestra cultura ancestral que aún permanecen vivos, activos, para permitir actos discriminatorios contra la mujer.

Lo cierto, es que el mundo cambia, se transforma, se moderniza, incluso se democratiza, sin embargo, algunas costumbres permanecen firmemente enraizadas en lo que llamamos el régimen del pasado, donde predominaban de manera "normal" los intereses del género masculino.

Ahora, los países más "civilizados" nos advierten que no podemos seguir permitiendo o fomentando la inequidad de género, porque a la larga los daños son más difíciles de reparar. Por tal razón, siendo la mujer el eje reproductor de nuestra vida y también motor del desarrollo, se plantea con mirada democrática emprender cambios sustanciales en el diseño, planeación y ejecución de las políticas públicas, pero con una visión distinta: tomando a la mujer como centro de los propósitos de algunos programas de gobierno. Con esta perspectiva de género se pretende erradicar las injusticias y discriminaciones del pasado. Siendo la mujer precisamente la gestora de dicho cambio. En este sentido, se defiende el derecho de equidad entre varones y mujeres, y se promueve también el derecho a ser diferentes.

Si bien es cierto a nivel general se registra en el orden jurídico un retraso sobre el tema de equidad de género, se observan algunos avances relativos en materia político-electoral, y también en lo social y cultural, sin embargo, no se logrará avanzar más en este tema únicamente con acciones legislativas, sino también con una estrategia integral que incluya un conjunto de políticas públicas y acciones afirmativas que garanticen la equidad entre mujeres y hombres.

Antecedentes

En el año de 1974, se realizó una profunda revisión a la legislación mexicana para eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres, dando como resultado la reforma al Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la plena igualdad jurídica del hombre y la mujer; la cual, sumada a la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en México en 1975, constituyeron un detonante para los estudios de género. Lo que impulsó más tarde la elaboración de programas en favor de las mujeres en todo el país. En esta Conferencia internacional se aprobó el Plan Mundial de Acción que incorporó importantes compromisos sobre la integración de las mujeres al sistema educativo, al trabajo y a la vida política; asimismo, propuso fomentar la

organización de las mujeres y sentó las bases para ejercitar el derecho a la salud y a la seguridad social, avanzó en la valoración del trabajo doméstico y elevó la imagen de las mujeres como protagonistas de los procesos de desarrollo nacional y regional.

La Conferencia acordó declarar 1975-1985 como la Década de la Mujer y el Desarrollo, y solicitó a los países su cooperación para la implementación del Plan de Acción Mundial. Por su parte, los diferentes organismos técnicos y financieros de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil tanto internacionales como nacionales, generaron diversos programas específicos en beneficio de las mujeres. Aun cuando las mujeres mexicanas, habían logrado importantes avances en la consagración de sus derechos políticos y un trato más equitativo en materia de salarios, condiciones de trabajo y servicios de apoyo, fue hasta a mediados de la década de los setenta, a raíz de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, que se inician los intentos por diseñar políticas públicas y programas dirigidos a este sector poblacional, los cuáles incluían programas de carácter multisectorial y proyectos concretos.

En el año de 1985, se instaló la Comisión Nacional de la Mujer, para coordinar las actividades y proyectos sectoriales en la materia; esta misma Comisión preparó la participación de México en la Tercera Conferencia Mundial de la Mujer en Nairobi, realizada en el año de 1986.

Como parte de los trabajos preparatorios hacia la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, se instaló en 1993 el Comité Nacional Coordinador que elaboró un informe detallado sobre la situación de las mujeres en México, así como un conjunto de diagnósticos temáticos y organizó las actividades preparatorias de la participación de México en dicha conferencia realizada en Pekín en 1995.

Recuperando las contribuciones realizadas en el seno de los grupos temáticos del Comité Nacional Coordinador y como respuesta a los compromisos asumidos en la Cuarta Conferencia, el Gobierno de México formuló el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 (PRONAM), como una instancia normativa y coordinadora de políticas en torno a las mujeres mexicanas, cuyo objetivo principal fue impulsar la formulación, el ordenamiento, la coordinación y el cumplimiento de los programas y acciones gubernamentales e incorporar a las diversas organizaciones sociales que trabajan con, por y para las mujeres.

En 1998, se creó la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER) como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y responsable de instrumentar el PRONAM.

El 12 de enero del 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante la cual se crea el INMUJERES, instancia que tiene como propósito promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no-discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida pública, cultural,

económica y social del país, bajo los criterios de transversalidad de las políticas públicas con perspectiva de género, el federalismo y el fortalecimiento de vínculos con los poderes legislativo y judicial, tanto federal como estatal.

En Sinaloa, el Ejecutivo del Estado representado en el gobernador Juan S. Millán Lizárraga, aprobó el decreto que crea el Instituto Sinaloense de la Mujer, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Núm. 121, de fecha 8 de octubre de 1999.

Un año más tarde, este decreto resultó abrogado por otro mismo que creó el Instituto Sinaloense de la Mujer, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Núm. 28, de fecha 6 de marzo de 2000.

Así, a partir de las propuestas de organizaciones de mujeres y en concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la constitución Política local, se abrió un proceso de comunicación y consulta permanente con la sociedad en el gobierno de Juan S. Millán, planteándose la necesidad de fundar un organismo público descentralizado representativo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno. En los considerandos y en el texto del mencionado decreto, el gobierno estableció el compromiso para que el Estado haga realidad las políticas públicas con enfoque de género, y se otorgue mayor apoyo en materia de salud, empleo y educación a las mujeres, y éstas resulten valoradas con equidad en las distintas facetas de su desempeño, tanto como profesionales, como madres, hijas, compañeras, y en general, en todos los roles sociales que cumplen. Coadyuvando en la reducción de la desigualdad social y para un acceso a las oportunidades de parte de las mujeres y la juventud. Posteriormente, la LVII Legislatura del Congreso del Estado Sinaloa, aprobó la iniciativa de Ley que crea el Instituto Sinaloense de las Mujeres, con fecha de 29 de julio de 2004, abrogando el Decreto del año 2000. Dicha ley fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Núm. 4, de fecha 10 de enero de 2005.

El Instituto Sinaloense de las Mujeres se institucionalizó para darle mayor seguridad jurídica y garantizar su permanencia en favor de las mujeres. Es producto de una larga lucha de cientos de mujeres activistas que aspiran al mejoramiento de las condiciones de vida, el desarrollo integral y la participación plena en la vida política, económica, cultural y social de la población femenina.

Acerca de los derechos fundamentales de las mujeres, hay mucho que decir en esta época difícil. La lucha por el respeto de los derechos de las mujeres y por la equidad de género no decae, sino por el contrario se fortalece año con año en Sinaloa.

El gobierno de Quirino Ordaz Coppel pretende consolidar políticas públicas en esta materia, a pesar de las actitudes y acciones de rechazo de una parte de la población que tiene arraigada una cultura machista y misógina. Sin embargo, esta cultura contra los derechos de las mujeres no es exclusiva de un sector poblacional. Cabe precisar que el

movimiento feminista es sustancial en la lucha permanente contra la desigualdad y la discriminación.

Por otro lado, no hay que perder de vista que a pesar de los tratados internacionales de los que México es parte y la nueva legislación que emana de ellos, las mujeres continúan siendo muy vulnerables a la violencia de género y a la explotación por su condición de madres y cuidadoras de la familia.

Los abusos contra las mujeres se expresan en cansancio y enfermedades por la explotación laboral. Las jóvenes que migran generalmente se emplean como trabajadoras domésticas, jornaleras o sexoservidoras en sus lugares de destino; las que se quedan en sus lugares de origen son mujeres abandonadas. Hay que señalar que hay métodos sofisticados que promueven el sometimiento de las mujeres.

Ya sea porque por un trabajo similar reciben menor remuneración que los hombres, por despidos injustificados por embarazos o por su orientación sexual, o por usar tatuajes, las mujeres se mantienen como la población más vulnerable de sufrir algún tipo de discriminación o agresión sexual que viola sus derechos humanos.

Aun cuando Sinaloa protege y tutela los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y leyes de vanguardia en materia de derechos humanos y, en igualdad entre hombres y mujeres, la discriminación en empresas privadas persiste por género, religión, origen socioeconómico, tendencia o preferencia sexual. Las mujeres se ubican un paso atrás con respecto a los hombres en cuanto a justicia.

No son pocos los lugares o centros de trabajo donde por el simple hecho de ser mujeres, aunque desempeñen la misma función o labor, perciben menos salarios que los hombres. También resulta revelador que en términos de promoción profesional y en obtener puestos superiores, incluso políticos, estos no son concedidos por su condición de mujer casada, con hijos o por estar embarazada.

La presencia de mujeres en cargos de gobierno y de representación popular registra avances en Sinaloa, pero en un rango insuficiente, en particular por la resistencia de los partidos y grupos políticos, controlados en su mayor parte por hombres. Hay manifiesta resistencia a incorporar a las mujeres con aspiraciones políticas. La ausencia de mujeres en la participación política y en cargos que inciden en la toma de decisiones significa un déficit democrático en Sinaloa. En este caso, influye aquí la combinación de machismo o discriminación con frágil institucionalidad. Los partidos políticos representan la cara más dura de la política respecto a la incorporación del sector femenino, con baja sensibilidad y “activa resistencia” al cambio. Es cierto, no se puede negar que hay avances en la incorporación de las mujeres a la educación, a la vida laboral y en el acceso a escaños en el Poder Legislativo, sin embargo, en el caso de la participación política –principalmente para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo y presidencias municipales– estamos muy lejos de alcanzar la igualdad.

Las reformas legislativas en materia de combate a la violencia contra las mujeres, de igualdad de géneros, de acceso a la salud reproductiva o derecho a la maternidad y a la crianza han contado con el liderazgo de mujeres dentro y fuera del H. Congreso del Estado. Sin embargo, sigue siendo altamente preocupante el creciente aumento de la violencia contra las mujeres.

Violencia contra las mujeres

La violencia es un fenómeno que preocupa a las sociedades del mundo occidental, las víctimas de las distintas formas y ámbitos en las que ésta se manifiesta son de tal magnitud y severidad, que los costos para los estados a nivel macro y para las personas en su experiencia más cercana, dejan daños a corto y largo plazo. Todo tipo de violencia es reprobable, sin embargo, la violencia contra las mujeres, por sus implicaciones, cronicidad e invisibilidad ha sido motivo de llamados urgentes a su prevención, atención, sanción y erradicación.

La violencia es producto de las asimetrías de poder entre quienes la viven y quienes la ejercen. Se utiliza como forma de control para someter o imponer comportamientos a la persona, en general como causa de una serie de creencias y actitudes, basadas en argumentos étnicos, económicos, culturales, de orden social, edad y de género. En el caso de las mujeres todos estos argumentos potencian su vulnerabilidad e incrementan su riesgo de padecer violencia a lo largo de la vida. Los tipos de violencia son: física, psicológica, sexual, obstétrica, política y patrimonial.

A nivel nacional, según datos de la Secretaría de Gobernación, 66% de las mujeres ha sufrido, por lo menos, un episodio de violencia en su vida y erradicar este problema debe ser responsabilidad compartida por todas las instancias de gobierno y de la sociedad organizada. Además, alrededor del 26% de las mujeres ha sufrido acoso laboral y probablemente el 50% de las mujeres que han tenido pareja, esposo o novio han sufrido violencia.

Asimismo, es lamentable que en diez años el país sólo haya sido capaz de reducir en 0.9% la violencia contra las mujeres, según datos aportados por el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La violencia en contra de las mujeres y las niñas, penosamente aún en el siglo XXI, es considerado un problema de seguridad pública. La violencia contra las mujeres y niñas ha sido definida como una forma de discriminación bajo la Convención de la Mujer (Recomendación General No.19). Este tipo de violencia no sólo es un fenómeno cotidiano de la vida moderna, sino resultado de siglos de dominación y de ejercer una "cultura de la sumisión" que lleva a miles de mujeres a construir su identidad en función de los demás y no de sus intereses o necesidades.

Al analizarse los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016, es inaceptable que 66.1% de mexicanas mayores de 15 años y más en el país, 30.7 millones han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en relación de pareja. La relación en que ocurre con mayor frecuencia la violencia contra las mujeres es precisamente la amorosa. Por ende, el principal agresor es o ha sido el esposo, pareja o novio. La mencionada encuesta muestra también que 43.9% de las mujeres que tienen o tuvieron pareja, sea por matrimonio, convivencia o noviazgo, han sido agredidas en algún momento de la relación.

Violencia familiar

La violencia familiar ocurre generalmente en el espacio que se considera privado y que debiera ser el más seguro para las familias; lamentablemente esto no suele ser así, el hogar se convierte en el lugar más inseguro e incluso peligroso para las personas que en él conviven, los daños pueden trascender generaciones; personas y familias rotas suelen ser las consecuencias tanto para las y los testigos, como para quienes la sufren directamente casi siempre mujeres, niñas y niños.

La violencia familiar es un fenómeno complejo que no puede resolverse de manera privada e individual, requiere de apoyo multidisciplinario (médico, jurídico, psicológico y social). Este apoyo necesariamente tiene que ser brindado por el Estado en auxilio de la sociedad civil. Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), avalados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reportan que en uno de cada tres hogares de nuestro país existe alguna forma de violencia familiar y en gran parte de éstos (72.2%) la violencia es recurrente.

El estado como órgano facultativo y tutor de las garantías de la seguridad de las personas en situación de vulnerabilidad ha generado una serie de acciones con el fin de atender la problemática. En el año 2000, la violencia familiar fue tipificada como delito en el Estado de Sinaloa con fin de que el Estado pudiera brindar protección de manera oportuna y eficaz a los integrantes de las familias que la sufren.

La violencia familiar y de género tiene costos socioeconómicos que incluyen gastos directos en el sistema de justicia penal, servicios de refugio; atención médica y de servicios sociales, tales como actividades de asesoramiento jurídico, educación y prevención; capacitación para la policía, el personal judicial y de salud; así como la pérdida de productividad, ausentismo, y aumento de la morbilidad y mortalidad de las víctimas así como la pérdida de calidad de vida de las víctimas y las y los testigos.

La violencia familiar se ejerce tanto en el ámbito privado como público, a través de manifestaciones del abuso de poder que dañan la integridad del ser humano.

Si bien cualquier persona puede ser susceptible de sufrir agresiones por parte de otro, las estadísticas apuntan hacia niños, niñas y mujeres como sujetos que mayoritariamente viven situaciones de violencia familiar y sexual. En el caso de niños y niñas, ésta es una manifestación del abuso de poder en función de la edad, principalmente, mientras que, en el caso de las mujeres, el trasfondo está en la inequidad y el abuso de poder en las relaciones de género. La violencia contra la mujer, tanto la familiar como la ejercida por extraños, está basada en el valor inferior que la cultura otorga al género femenino en relación con el masculino y la consecuente subordinación de la mujer al hombre.

El incremento de los casos de violencia doméstica, acoso sexual, violación y maltrato psicológico, e incluso "crímenes de odio", refleja que prevalece en una parte de la sociedad la idea de que las mujeres son "desechables y reemplazables", ya que están al servicio de los demás, y no como seres humanos con plenos derechos.

Feminicidios

Según el Instituto Nacional de las Mujeres cada cuatro horas es asesinada una mujer en México. Lo que se traduce en 6 mujeres asesinadas al día. Por esa razón se ha establecido la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 12 estados de la República.

En Sinaloa, en el año 2012 se logró la tipificación del delito de feminicidio. Desde esa fecha, hasta el año 2016, se han contabilizado 352 homicidios dolosos contra mujeres, de los cuales 116 fueron considerados como feminicidios, lo que representa el 32.96% de ese total.

Según el mapa interactivo localizado en Internet *Los feminicidios en México* (<https://feminicidiosmx.crowdmap.com/main>), en todo el país el número de mujeres asesinadas ha ido en aumento. En el año 2016 fueron reportados por la prensa mil 985 casos. En Sinaloa en el mismo año se registraron 94 muertes, colocando a Culiacán en el primer lugar con mayor número de casos, le sigue Los Mochis y después Mazatlán. La mayoría de las mujeres fueron asesinadas a balazos y a puñaladas.

En Sinaloa han sido asesinadas 801 mujeres entre 2005 y 2016, y la inmensa mayoría de los casos siguen impunes. En Sinaloa, durante el gobierno pasado, sólo hubo castigo penal a 116 imputados de 521 casos de feminicidios ocurridos, y hasta el 15 de agosto de 2017, la Fiscalía General del Estado ha logrado apenas 14 sentencias, de las cuales 13 son condenatorias. Están sin resolver el 78% de feminicidios ocurridos.

Según datos del Semáforo Delictivo, una plataforma ciudadana nutrida con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, en 2016 se registraron 43 feminicidios, siendo el mes de octubre el más violento para las mujeres con 11 casos. Le sigue febrero, agosto y septiembre con 7 víctimas.

Desde el primero de enero al 30 de septiembre de 2017, en Sinaloa han sido privadas de la vida 65 mujeres, lo que originó se declarara Alerta de Violencia de Género contra las

Mujeres (AVGM) el 31 de marzo en 5 municipios de Sinaloa (Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato).

En los primeros 6 meses del año pasado ocurrieron 10 feminicidios en todo el estado y en contraparte, según cifras oficiales, ocurrieron 45 durante todo el año 2016. Fue a partir del primero de abril en que la Alerta de Violencia de Género entró en vigor en Sinaloa.

1.7 Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

En nuestro país y en el estado de Sinaloa se ha avanzado en la creación de un andamiaje institucional para consolidar el interés supremo con respecto a las niñas, niños y adolescentes. En ese quehacer de dependencias gubernamentales, se incluyen políticas públicas, estrategias y acciones. Sin embargo, falta aún mayor coherencia y articulación de acciones concretas que impacten de manera significativa en el logro del respeto irrestricto a los derechos humanos de los infantes.

Marco jurídico

Diversos instrumentos internacionales que junto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen supremacía- señalan de manera puntual los derechos de las niñas, niños y adolescentes y reconocen sustancialmente sus situaciones de vulnerabilidad social a que están expuestos, situación que dio origen precisamente a dichos instrumentos, resaltando entre otros los siguientes:

- La Convención de los Derechos del Niño
- Convenio OIT 132 sobre la Prohibición del Trabajo Infantil
- Declaración Universal de los Derechos Humanos

Además de la Convención sobre los Derechos del Niño, tenemos presentes sus dos protocolos facultativos, y la resolución 2012/1 del 45º período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas de abril del 2012, que insta a los gobiernos a proteger los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 4 de diciembre de 2014, reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Ley general garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; crea y regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados; establece los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y establece las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendientes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.

El 14 de octubre de 2015, se publicó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, la cual reconoce a este grupo poblacional como sujetos de derecho y protección por parte del Estado; de igual forma, la legislación responsabiliza a los agentes involucrados en su desarrollo para que de manera coordinada se cumpla con el objetivo de garantizar a niñas, niños y adolescentes un sano crecimiento y un futuro mejor; colocando en el centro de la administración pública el interés superior de la niñez.

Dicho ordenamiento jurídico regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa (SIPINNA), así como el establecimiento de las bases generales para la participación de los sectores privado y social, en las acciones tendientes a garantizar la protección de los derechos de los menores, así como a prevenir su vulneración y cualquier acto que pueda atentar contra ellos.

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, el 5 de abril del 2016 fue instalado el Sistema Estatal de Protección Integral, encargado -mediante la transversalidad- de impulsar, colaborar, gestionar y coadyuvar al desarrollo de políticas, programas, estrategias y acciones en favor de la salvaguarda del interés superior de la niñez y protección de los derechos de adolescentes.

Perfil Demográfico

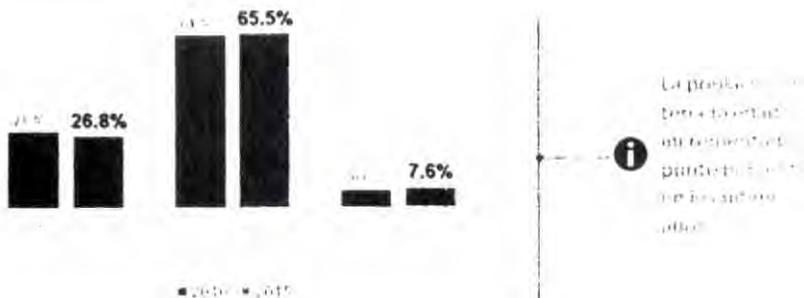
Según *Save the Children México*, en el país existen 4 millones de niños y niñas fuera del sistema educativo, 3 millones de ellos trabajan. 8 millones no acceden a servicios de salud. Y más de 1.5 millones menores de 5 años sufren de desnutrición crónica por falta de alimento.

De conformidad al artículo 5 de la Ley General, arriba citada, son niñas y niños las personas menores de doce años, y son adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años.

La base de la pirámide demográfica del estado se ha caracterizado por una menor participación de la población infantil asociada a la contención de la fecundidad y la reducción de la tasa de natalidad; este grupo de edad -de acuerdo con los resultados del censo 2010 del INEGI- representa el 34.13% de la población total (1 millón 012 mil 317 infantes y adolescentes). Para la Encuesta Intercensal del 2015, la población de cero a catorce años se redujo en 1.7 porcentuales.

Población de Sinaloa

Población por grandes grupos de edad



Elaboración: CONEVAL

Fuente: CONEVAL

A nivel municipal se observa que cuatro municipios del Estado de Sinaloa cuentan con porcentajes en donde más del 40% de su población son niños y adolescentes, destacando los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán.

Por grupos de edad, el número de niños y niñas de menos de 5 años asciende a 304 402 personas. El segmento social de 5 a 14 años que se encuentra en la edad escolar para cursar la educación básica asciende a 483 134, en tanto que 224 781 son adolescentes de 15 a 17 años. El mayor porcentaje se encuentra en la población infantil y adolescentes de 10 a 14 años, 270 555, que representan el 29 por ciento.

Alimentación

En relación con la alimentación, los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, permiten apreciar que en los hogares sinaloenses con población menor a los 18 años (488 mil 562 hogares), existen limitaciones de acceso a la misma, debido a la falta de recursos económicos. La principal limitación que afecta al 18.52% de los hogares, es la poca variedad de platillos de comida en la alimentación; sin embargo, la suficiencia es la segunda limitación en importancia, la cual está directamente relacionada con la desnutrición y la anemia. Cabe mencionar que en más del 40% de los hogares, los menores se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria.

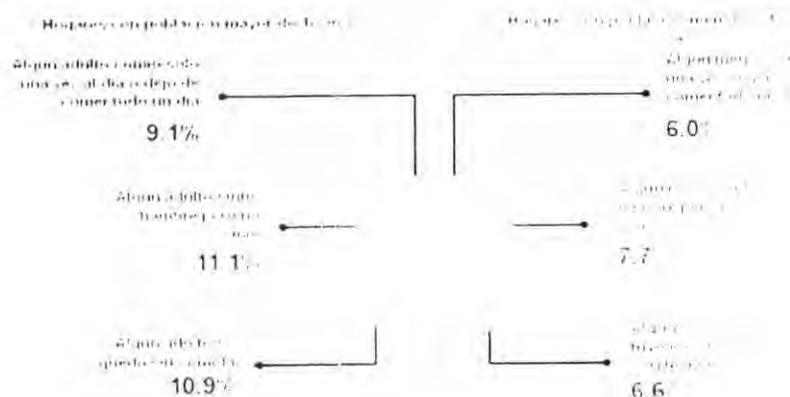
Limitación de acceso a la alimentación por
falta de dinero en los últimos tres meses de los
menores

Situación de acceso a la alimentación	SI	NO
Algún menor tuvo poca variedad en sus alimentos	18.52%	79.62
Algún menor se le tuvo que servir menos comida	13.75%	84.41
Algún menor comió menos de lo que debería comer	13.68%	84.49
Algún menor sufrió de hambre, pero no comió	7.30%	90.84
Algún menor comió sólo una vez al día o dejó de comer todo un día	6.07%	92.09
Algún menor se tuvo que acostar con hambre	6.61%	91.29

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015

Alimentación Sinaloa

Resultados de una selección de las preguntas sobre acceso a la alimentación en el hogar



Fuente: INEGI

Por otra parte, los resultados de la ENSANUT del año 2006 muestran que el 31.5% de los niños y niñas de entre 5 y 11 años presentan sobrepeso y obesidad (30.8% para hombres y 32.3% para mujeres).

Situación de niños migrantes

Hay una situación precaria y estado de indefensión de miles de niños migrantes provenientes principalmente de países de Centroamérica. Nuestras leyes en vez de protegerlos los criminaliza, según opinión de expertos en el tema. Por lo regular cuando son detenidos en el territorio mexicano por autoridades migratorias se les mantiene en condiciones carcelarias junto a adultos. En el año 2015, fueron detenidos por autoridades de nuestro país alrededor de 36 mil menores, de los cuales 18 mil eran niños migrantes no acompañados, mientras que en 2016 fueron deportados más de 40 mil, principalmente provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Salud

En México, la muerte de niños menores de 10 años rebasa el número de personas asesinadas en actos de violencia en el país, lo cual refleja una desprotección del Estado para garantizar los derechos de salud de los infantes, según datos de la Organización de la Sociedad Civil *Nosotrxs*.

Según datos del INEGI, en 2015 se reportaron 20 mil 762 homicidios en México, mientras que en el mismo año fallecieron 26 mil 57 niños menores a un año de vida. Del total de esta última cifra, 12 mil 992 casos se debieron a enfermedades prevenibles. Lo anterior

significa que el Sistema Nacional de Salud no está cumpliendo con su propósito de asegurar las condiciones físicas, materiales y económicas para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños a la salud. En México mueren diariamente 35 niños por enfermedades prevenibles, y fallecen por descuido o negligencia de instituciones oficiales.

Embarazo en adolescentes

En México uno de cada cuatro jóvenes de entre 12 y 19 años ha tenido relaciones sexuales. Entre las mujeres de ese mismo rango de edad, una de cada cinco inició su vida sexual. Tan sólo en el año 2015 se registraron en todo el país 415 mil 398 nacimientos de madres menores de 19 años.

En Sinaloa, requieren atención especial las madres adolescentes, las cuales representaron, en el año 2010, el 9.6% de las mujeres entre los 12 y 19 años. El embarazo adolescente representa un gran riesgo de salud tanto para las madres como para los hijos y afecta la capacidad de proporcionar una buena calidad de vida a las familias. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las madres adolescentes tienen entre dos y tres años menos de escolaridad que el promedio y, son 14 veces más propensas a abandonar el sistema educativo, en comparación con el resto de las mujeres, lo cual repercute negativamente en sus oportunidades laborales.

Los datos del Subsistema de Información de Nacimientos (SINAC) de la Secretaría de Salud muestran una ligera tendencia descendente en la proporción de nacimientos cuyas madres tienen entre 9 y 17 años, ya que para el año 2010, los 190 mil 468 nacimientos representaron 9.1% del total; mientras que, en el año 2015, los 190 mil 199 nacimientos representan un 8.8 por ciento. Con base en la distribución geográfica, entre los veinte municipios del país con mayor número de nacimientos ocurridos en 2015 cuyas madres tienen entre 10 y 17 años se encuentran Ecatepec de Morelos, Toluca, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

El temor de los padres de familia a hablar de sexo con sus hijos es un factor desfavorable en la prevención de embarazos en adolescentes. La información sobre los riesgos de iniciar una actividad sexual a edades tempranas debe proporcionarse en los hogares. Sin embargo, los padres evaden el tema por no saber cómo abordarlo o porque creen que podrían propiciarla con la información dada a sus hijas.

Adolescentes con hijos/hijas Sinaloa

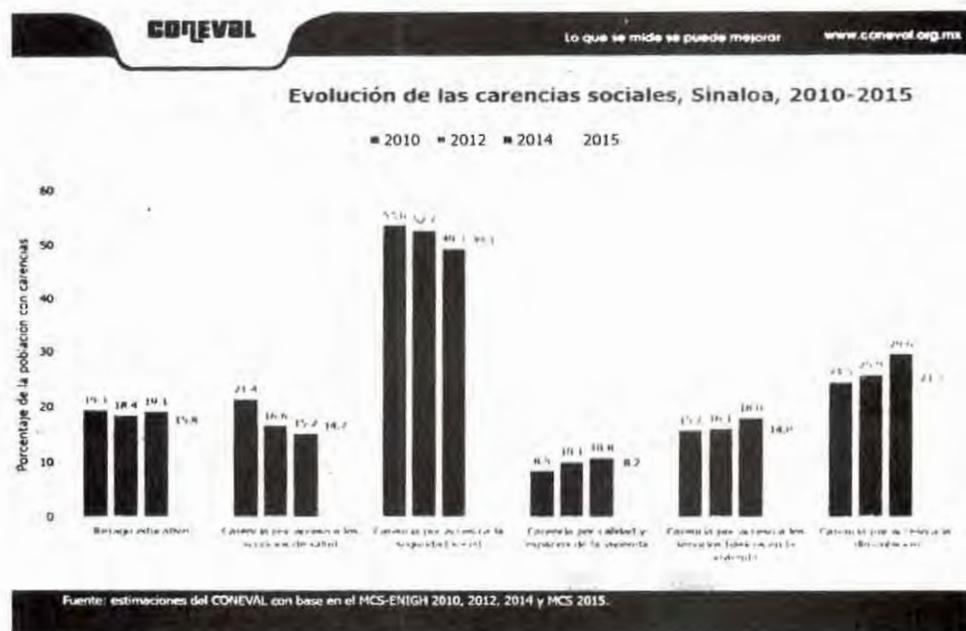
Adolescentes entre 12 a 17 años

SINALOA	12 Años	13 Años	14 Años	15 Años	16 Años	17 Años	TOTAL
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
Ahome	4,040	3,866	3,983	4,215	3,929	3,975	24,008
Angostura	417	437	472	493	444	384	2,647
Badiraguato	354	304	325	367	310	301	1,961
Concordia	284	277	288	283	266	296	1,694
Cosala	211	212	224	188	187	191	1,213
Culiacán	7,892	7,915	8,198	8,448	8,306	8,355	49,114
Choix	356	324	360	394	342	344	2,120
Elota	464	432	431	461	466	448	2,702
Escuinapa	548	528	550	591	559	424	3,402
El Fuerte	918	887	917	946	908	827	5,541
Guasave	2,854	2,855	2,869	3,028	2,938	2,819	17,363
Mazatlán	3,884	3,888	4,118	4,165	4,018	4,125	24,198
Mocorito	420	450	412	465	438	494	2,679
Rosario	489	512	505	463	483	498	2,970
Salvador Alvarado	725	796	787	820	751	823	4,702
San Ignacio	217	238	248	227	223	252	1,405
Sinaloa	920	886	922	972	956	921	5,627
Navolato	1,359	1,372	1,398	1,482	1,412	1,376	8,199
TOTAL	26,372	26,199	26,836	27,998	26,937	27,403	161,745

Fuente: INEGI – Encuesta Intercensal 2015

Desarrollo, pobreza y carencias sociales

El 59.0% de la población sinaloense de 0 a 17 años se encontraba en situación de pobreza; es decir, 3.1 millones de niñas, niños y adolescentes carecían de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales (educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, a una vivienda de calidad y con servicios básicos y a la alimentación). Además, el ingreso de su hogar era insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas.



Fuente: CONEVAL-UNICEF. Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014.

De esta población en condiciones de pobreza, el 8.4% se encontraba en pobreza extrema al presentar carencias en el ejercicio de tres o más de sus derechos sociales y ser parte de un hogar con un ingreso insuficiente para adquirir los alimentos necesarios a fin de disponer de los nutrientes esenciales. Entre 2010 y 2014, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en esta situación se redujo 2.9 puntos porcentuales, aun cuando de 2012 a 2014 se tuvo un incremento.

Asimismo, la población de menos de 18 años en situación de pobreza moderada representaba el 50.6% de las niñas, niños y adolescentes pobres. Este grupo de pobreza tenía 1.9 carencias sociales en promedio. En el periodo de análisis su participación porcentual se incrementó significativamente (11.2 puntos porcentuales).

En lo relativo a vulnerabilidad, los datos indican que 17.2% de las personas de 0 a 17 años era vulnerable por carencias sociales en 2014, es decir, tenían un ingreso mayor a la línea de bienestar, pero contaban con una o más carencias sociales. Entre 2010 y 2014 se presenta una disminución de 9.1 puntos porcentuales.

Por último, cabe mencionar que 10.8% era vulnerable por ingresos, pues éste era menor al indispensable para cubrir sus necesidades básicas, pero no presentaban carencias

excelencia o que enfrentan problemáticas económicas y el seguro escolar contra accidentes.

1.8 Instituto de la Defensoría Pública del Estado

La evolución del derecho mexicano, y recientemente la transformación y modernización del sistema de justicia penal mexicano, ha obligado a fortalecer la institución de la defensoría pública, en aras de proteger el derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada que asiste a todo imputado. No obstante, en Sinaloa el 42% de los acusados de un delito no tiene conocimiento de sus derechos, según la Encuesta Nacional Sobre el Sistema de Justicia Penal en México del año 2012, significando un porcentaje superior al promedio nacional, que es del 41 por ciento.

Por otra parte, y según la encuesta anterior, a nivel nacional hay la percepción generalizada de que los defensores públicos no desempeñan con eficiencia y eficacia su función encomendada. A mediados del año 2014, se creó en Sinaloa el Instituto de la Defensoría Pública, cuyo funcionamiento está previsto en los artículos 78 y 79 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Por mandato supremo gozará de independencia técnica y operativa, a fin de garantizar de manera gratuita a los imputados el derecho a una defensa adecuada y de calidad en materia penal y de justicia para adolescentes, así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en materia civil, familiar y administrativa. Sin embargo, como sucede a nivel nacional, a los defensores locales se les critica también la falta de experiencia y carencia de conocimientos actualizados en las ramas del Derecho, lo cual impacta negativamente en la imagen del defensor. Estos señalamientos se agravan con los bajos sueldos que perciben y la sobrecarga de trabajo, lo cual es una debilidad frente a los agentes del Ministerio Público. Se espera que en la medida en que avance y se perfeccione el nuevo sistema de justicia penal en Sinaloa, las variables relacionadas con la actuación de la defensoría pública observen mejor evaluación.

Lo cierto, es que la legalidad y certeza jurídica deben prevalecer en el ámbito de la seguridad pública, lo cual permite brindar respuesta a un sentido de reclamo ciudadano; por ello el eje prioritario para el Instituto de la Defensoría Pública es garantizar la continuidad de los servicios jurídicos gratuitos que brinda a la sociedad, contribuyendo como vía idónea para lograr un Gobierno eficiente y transparente, así como vivir en un Estado de Derecho, condición esencial para que prevalezca la armonía y la paz social.

Nuevo Sistema de Justicia Penal

Uno de los cambios más significativos en la procuración y administración de justicia, lo constituye la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Procesal Penal de 2008, un hecho trascendental en la vida jurídica y social de México; reformas que entre diversos aspectos mandata la correspondiente armonización legislativa; motivo por el cual desde hace aproximadamente cuatro años se publicó la Ley de la Defensoría Pública del Estado

de Sinaloa, que contempla las exigencias para atender el nuevo Sistema de Justicia Penal y que permitió la transformación de la dependencia en Instituto. El 14 de octubre de 2014, inició en Sinaloa la implementación gradual del Sistema Acusatorio, concluyendo en su totalidad el día 13 junio de 2016.

Los casos atendidos en el marco del nuevo Sistema de Justicia Procesal Penal, en un período comprendido desde su implementación hasta el día de hoy, se plasma en la siguiente gráfica:

Asuntos atendidos por Defensoría Pública en el Nuevo Sistema de Justicia Penal				
	2014 (inició 14 de octubre)	2015	2016	2017 (enero a julio)
Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal NSJP	16	291	702	767
Unidades Esp. Del Ministerio Público NSJP	45	625	1338	1052
Sala de Circuito Penal NSJP	8	39	87	56

Fuente: Instituto de la Defensoría Pública del Estado

Ahora bien, el desempeño de los abogados defensores públicos en el nuevo Sistema de Justicia Penal se refleja en gran medida en el hecho que el ciudadano deposita su confianza en los servicios jurídicos que se brindan; toda vez que aún y cuando puedan cubrir honorarios por patrocinio particular deciden los ciudadanos que sea un defensor público quien le brinde asesoría y/o representación legal gratuita.

Es oportuno resaltar que previo al inicio de la implementación de esta nueva forma de administración de justicia, la Defensoría Pública emprendió acciones firmes de capacitación del personal a través de cursos, diplomados, talleres y maestrías, para enfrentar con éxito el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Las constantes reformas mandatan y exigen la actualización del personal compuesto por abogados, lo cual permite brindar servicios jurídicos de mejor calidad y elevar la imagen institucional, e impactar en la percepción ciudadana de manera positiva; así las fortalezas de la Defensoría ante este nuevo Modelo de Procuración y Administración de Justicia, recae en un perfil de vocación de servicio y sentido de responsabilidad de los defensores públicos y en forma integral del resto del personal; sin embargo, una de las debilidades enfrentadas en esta nueva modalidad de justicia lo constituye la resistencia al cambio en las formas de procedimientos y sus impactos, obligado por tanto sensibilizar, socializar y difundir los beneficios de este nuevo modelo de Justicia Penal, tanto al interior como al exterior de las instituciones.

Servicios Jurídicos

Actualmente, en lo que va de la presente administración gubernamental se ha logrado la captación de 23,649 asuntos en las diferentes áreas, desglosados de la siguiente manera:

Asuntos captados en las diferentes áreas

	Enero a julio 2017
Averiguaciones Previas	282
Penales	333
Civiles	108
Familiares	4186
Agencias Especializadas para Adolescentes	202
Juzgados Especializados para Adolescentes	161
S.T.J. Apelaciones y Nulidades en materia de Justicia para Adolescentes	26
Adecuaciones de Medidas y extinciones en materia de Justicia Adolescentes	42
S.T.J. Apelaciones	964
Juzgado de Ejecución	1362
Asesorías Extrajudiciales	14022
Asesorías Juicios Administrativos	86
Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal NSJP	767
Unidades Esp. Del Ministerio Público NSJP	1052
Sala de Circuito Penal NSJP	56
Amparos	0

Fuente: Instituto de la Defensoría Pública del Estado

Para el Instituto de Defensoría Pública resulta fundamental continuar garantizando servicios jurídicos gratuitos con elevada calidad, a través de servidores públicos cuyo perfil idóneo les permita incrementar sus habilidades y destrezas en beneficio de la sociedad. Para ello se tienen detectadas áreas de mejora y oportunidad, que permitan elevar la

expectativa ciudadana en vías de otorgar servicios de mayor y mejor calidad, garantizando certeza jurídica.

1.9 Núcleos Agrarios y Campesinos

La tarea por Sinaloa es enorme y los retos muy exigentes, enfrentar los problemas de la tenencia de la tierra -que aún persisten- es parte de la esfera social y una ocupación del quehacer del Gobierno del Estado.

Es a través de la Dirección de Asuntos Agrarios que se brinda certeza jurídica, asesoría técnica y difusión de programas de gobierno que atañen a núcleos agrarios. Nuestras fortalezas son: asesoría jurídica, técnica y gestoría gratuita, ubicación accesible, soporte legal con atribuciones bien definidas, personal especializado y profesional, personalización de asuntos. Las debilidades: una baja incorporación de procesos organizacionales, instalaciones y material de trabajo en malas condiciones (mobiliario y equipo), se detectó bajo liderazgo y dominio en asuntos jurídicos y técnicos, deficiente equipo informático, insuficiente personal jurídico y técnico para satisfacer la cobertura estatal, equipo de transporte disfuncional (vehículos fuera de servicio), bajos sueldos del personal, falta de capacitación del personal en sistemas de gestión de calidad, bajo nivel de satisfacción del personal en razón de su trabajo, bajo presupuesto para la ejecución de actividades de la Dirección, nula difusión de la Dirección en los solicitantes potenciales (núcleos agrarios), bajo número de acciones en cobertura conciliatoria (jurídicas), durante el año anterior.

Las oportunidades son: la solución viable de conflictos en relación a la tenencia de la tierra, la integración de núcleos agrarios, incentivos para la certeza jurídica de la tenencia de la tierra en Sinaloa, se pueden aprovechar grupos y organizaciones ya definidas y cercanas a esta Dirección, la posibilidad de que dependencias federales, estatales y municipales apoyen a esta Dirección, alta posibilidad de crecimiento y cobertura, crear y mantener actualizada una base de datos de todas las autoridades ejidales, integrar una base de datos con los integrantes de los ejidos y mantenerla actualizada. En cuanto a los desafíos que se presentan: resolver los diferentes conflictos entre núcleos agrarios, otorgar diversos apoyos para la regularización de la tierra, operar cambios en la normatividad e incorporar nuevas normas y procedimientos (aplicar la ley de acceso a la información y de transparencia, la gestión de calidad).

La parte más importante de este análisis es la evaluación de los puntos fuertes y débiles, así como la obtención de conclusiones que van encaminadas a las diferentes acciones que esta dirección implementará como estrategia para hacer de las debilidades una fortaleza y de los desafíos oportunidades para brindar y garantizar la certeza en la tenencia de la tierra en núcleos agrarios y campesinos. Los beneficios previsibles y esperados son: generar confianza entre los ciudadanos acerca de las funciones del Gobierno del Estado, fomentar una alianza de la sociedad con el Gobierno del Estado para encontrar soluciones a problemas que atañen a este sector poblacional, incrementar la satisfacción de los

núcleos agrarios con una mejor calidad de vida, que el sector agrario pueda tener acceso a los apoyos provenientes de programas de los gobiernos federal, estatal y municipal.

1.10 Asuntos jurídicos

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, diariamente atiende situaciones jurídicas en su generalidad de asuntos internos del propio Gobierno del Estado, puesto que de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría General, es una dirección encargada de resolver las consultas jurídicas que le formulen tanto el Titular del Ejecutivo del Estado, como las dependencias de la Administración Pública, de igual manera se encarga de la elaboración o revisión de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, convenios, contratos y acuerdos de la misma; representa los intereses del Poder Ejecutivo en toda clase de procedimientos judiciales y administrativos, interviene en la tramitación de los juicios de amparo promovidos contra actos del Ejecutivo del Estado y sus dependencias.

Además, tramita la promulgación de leyes y decretos estatales, así como leyes, decretos y disposiciones de orden federal que deban publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; asesora jurídicamente en la creación, modificación o extinción de los organismos desconcentrados de la administración pública paraestatal; tramita las expropiaciones que sean competencia del Poder Ejecutivo del Estado.

Junto con lo anterior, la Dirección certifica la autenticidad de las firmas y cargos que aparecen en documentos suscritos por servidores públicos del Estado que así lo requieran; así como también elabora las opiniones que deba expedir el Ejecutivo del Estado en materia de explosivos, con excepción de las que se solicitan para exploración o explotación de minas.

Derivado de lo anterior, la atención va fundamentalmente dirigida al propio Gobierno del Estado, es decir, este es el destinatario principal de su labor, con excepción de las facultades señaladas en el párrafo anterior, las cuales van dirigidas al público y sobre una de las cuales centraremos los desafíos a vencer.

Entre los desafíos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo se encuentra el de implementar un Gobierno Abierto, cercano a la gente, construyendo un diálogo entre las dependencias y entidades y los actores de la sociedad, con el objetivo de profesionalizar el servicio público, ubicando como eje central de su actuación al ciudadano y utilizar de forma estratégica las herramientas institucionales para promover la eficiencia.

La Dirección cuenta con el Departamento de Legalización de Documentos, el cual es el contacto directo con los ciudadanos para llevar a cabo los trámites necesarios para certificar la autenticidad de las firmas y cargos que aparecen en documentos suscritos por servidores públicos del Estado, o de la administración pública paraestatal, que así lo

requieran, excepto los títulos profesionales, cuya facultad recae en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos; pero que de igual manera se tramita ante el citado departamento.

En virtud de que el trámite se realiza de manera presencial, en determinadas situaciones puede llegar a resultar en una inversión tanto en tiempo como económicamente que puede llegar a afectar al solicitante, sobre todo cuando se lleva a cabo por personas que radican fuera de la ciudad, e incluso fuera del estado, puesto que podría representar el tener que regresar otro día desde su lugar de origen o bien tener que pernoctar en la ciudad capital.

Los meses en los que más trámites se solicitan en el Departamento de Legalización, son julio y agosto, que es cuando finaliza el ciclo escolar y se hace entrega masiva de títulos y certificados, los cuales requieren legalizarse, y por el hecho de que el pago de derechos del trámite se realiza en el módulo de atención ciudadana correspondiente y no en el mismo departamento, en el periodo mencionado anteriormente, el trámite se vuelve más tardado y es cuando se hacen más evidentes los desafíos de este apartado.

Por otra parte, se busca que la recepción de los documentos susceptibles de legalización, específicamente para los ciudadanos de otras ciudades o poblaciones de nuestro Estado, pudiera realizarse por medio de las Unidades Administrativas y que éstas enviaran los documentos a Culiacán y una vez legalizados se retornaran a dichas ciudades para su entrega a los solicitantes.

El Plan Estatal de Desarrollo, en el tema Gobierno Abierto y Fortalecimiento del Estado de Derecho del Eje Estratégico que nos ocupa, hace mención de la creación de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción; del nuevo esquema de justicia laboral creado a nivel constitucional y que, entre otros aspectos desaparece las juntas de conciliación y arbitraje y deja en manos del Poder Judicial la resolución de los conflictos individuales y colectivos del trabajo; así mismo enfatiza en la transformación del sistema de justicia penal mexicano.

En general el Derecho, en todas sus vertientes, es un cúmulo de conocimientos en constante cambio y evolución, que se va actualizando continuamente, adaptándose a las necesidades de la sociedad que día a día son más específicas. Por tal motivo, quienes se dedican a la práctica y estudio del Derecho, necesitan actualizarse constantemente en las diferentes materias que lo componen, por lo que resulta un reto el brindar actualización a los servidores públicos que así lo requieran debido a la naturaleza de sus funciones dentro del Gobierno del Estado que tengan que velar por los intereses jurídicos del mismo.

1.11 Archivo General de Notarías

En Sinaloa, en total hay 136 notarios públicos en funciones, de los cuales 60 se encuentran en la ciudad de Culiacán.

En general, la situación del archivo es difícil y complicada. Se presentan algunas deficiencias para proporcionar en tiempo y forma información a los diferentes juzgados y dependencias gubernamentales en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 192 y demás artículos aplicables de la Ley del Notariado del Estado vigente. Como se sabe, el Archivo debe conservar y custodiar en buen estado los Libros Apéndices e Índices que los Notarios Públicos remiten y que por falta de espacio físico la administración anterior decidió sacar algunos libros fuera de la oficina, los cuales fueron enviados al edificio del Centro Logístico. Ese traslado se hizo sin reunir los requisitos para hacer un inventario de calidad que se requiere, encontrándose los libros en mal estado al no cumplirse con lo estipulado en la Ley del Notariado. Y al no tener la vigilancia debida de ellos, estos se encuentran en ese lugar de manera irregular, no teniendo el acomodo y orden adecuado, por lo que se dificulta la búsqueda de los libros, y por esa situación, los ciudadanos que acuden al archivo resultan afectados debido a que el trámite que realizan puede tardar hasta más de quince días para recibir respuesta a la búsqueda solicitada, en virtud que no se encuentran los libros que pretenden consultar, generando rezago y tardanza en los trámites a realizar, sumado al riesgo que se tiene al encontrarse estos fuera del Archivo.

Aunado a lo anterior, no hay recursos para aplicarlos en la supervisión de los notarios que se encuentran fuera de Culiacán. También se requiere mayor espacio para colocar los libros de forma ordenada y clasificada.

1.12 Inspección y cumplimiento de la normatividad en materia de alcoholes

En Sinaloa se tiene el registro de alrededor de 6 mil establecimientos entre restaurantes, licorerías, supermercados, antros y giros tipo centros nocturnos, bares y cabarets, de los cuales 182 tenían permiso de horario extendido, mismos que quedaron suspendidos a partir de los últimos días de febrero de 2017. Desde entonces, la Subsecretaría de Normatividad e Información Registral, a través de la Dirección de Inspección y Normatividad, ha revisado cada uno de los expedientes de las licencias. Además, por instrucciones directas del Gobernador del Estado los operativos serán más intensos en las revisiones y se advierte que será bajo la premisa de *Cero tolerancia a la corrupción*.

Se va a reforzar la inspección y seguridad en bares y antros, incluso con el apoyo de la PGR y, fuerzas del Ejército y la Marina, después de los hechos registrados en el Bar Reyes, en Culiacán, la madrugada del viernes 10 de noviembre de 2017 en donde dos personas perdieron la vida y dos resultaron heridas. Se ha tenido incidencia y reincidencia y eso mismo es lo que se tiene que evitar en los centros nocturnos y bares. Las fuerzas coordinadas que se están implementando intensificarán los operativos de revisión de este tipo de establecimientos para prevenir se cometan delitos.

La operatividad para el cumplimiento de la normatividad se realiza con cuatro componentes:

1. Inspecciones y supervisiones más intensivas realizadas a establecimientos dedicados a la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.
2. Inspecciones y supervisiones digitalizadas realizadas a establecimientos dedicados a la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.
3. Foros y pláticas de participación ciudadana para atender a alumnos de diversos niveles educativos con el fin de reducir el consumo de alcohol.
4. listado de escuelas participantes en foros y pláticas de participación ciudadana destinadas a alumnos para reducir el consumo de alcohol.

Como forma preventiva ante los sucesos de violencia que han sacudido los estacionamientos de bares y antros de la ciudad de Culiacán, los dueños de estacionamientos privados han tomado fuertes medidas de seguridad en sus establecimientos, como la instalación de videocámaras, contratación de personal de seguridad y patrullaje constante. La Asociación de Estacionamientos Privados contribuye con las autoridades a reforzar la prevención del delito. Sin embargo, a pesar de contar con 48 agremiados en la asociación, aún hay muchos dueños de estacionamientos que no cuentan con las especificaciones necesarias para brindar un buen servicio con seguridad a los clientes, por lo que se exhorta a la población a seleccionar los estacionamientos que usan para evitar ser víctimas de algún robo u otro acto delictivo.

1.13 Registro Civil

Según datos de UNICEF del año 2005, el 14.5% de la población infantil, menores de cinco años, carecía de registro de nacimiento en América Latina. Esta carencia genera vulnerabilidad, pues la falta de un documento probatorio de identidad impide a la persona tener acceso a derechos esenciales como son la salud, la educación y protección integral. En ámbito local, se puede afirmar con cifras del INEGI que Sinaloa se encuentra en quinto lugar nacional en índices de registro de nacimiento de personas. El Registro Civil cuenta con 145 oficinas diseminadas por toda la entidad, de las cuáles el 47% trabaja en red, el 51% trabaja en local y el 2% trabaja con máquina de escribir. Desde el año 2014 a la fecha no se cuenta con una máquina empastadora, esto se traduce en que aproximadamente 5,500 libros de actos registrales corren riesgo de extravío.

El Archivo Central de Registro Civil no se encuentra a la altura de un gobierno innovador y competitivo, ya que no se atienden con éxito todas las solicitudes de búsqueda de registros, debido al deterioro e ilegibilidad de los documentos. No es posible asegurar el resguardo de los documentos a largo plazo debido al deterioro de las unidades documentales y a la sustracción de documentos, lo cual es una debilidad interna.

Desde la administración gubernamental pasada, existe un proyecto para mejorar las condiciones físicas y la accesibilidad de los depósitos de archivo, se estima que de llevarse a la práctica se evitarían adulteraciones o robos, pero nunca se puso en ejecución.

Actualmente no existe un marco regulatorio estatal que marque la pauta de la organización, disposición y administración documental de los archivos.

En cuanto a la normatividad referente al Registro Civil, se trabaja con tres lineamientos jurídicos que se contradicen entre sí, a saber: Reglamento Interno, publicado en el Periódico Oficial en el año de 1982, sin reforma alguna desde entonces; el manual de Registro Civil, emanado del Reglamento, por último, el Código Familiar cuya última reforma inherente a esta institución fue durante el año 2017.

Podemos afirmar que el 90.1% de los estados de la República Mexicana cuentan con una Ley de Registro Civil, Sinaloa no está dentro de esa lista. Con una Ley de Registro Civil en la entidad se pueden unificar criterios, requisitos, facultades y atribuciones de cada una de las áreas y sobre todo establecer lineamientos básicos referentes al trabajo cotidiano. Lo cual vendría a ser una oportunidad.

La iniciativa de Ley de Registro Civil es un asunto pendiente. A principio de año, se presentó en la Subsecretaría de Normatividad e Información Registral un anteproyecto del Reglamento Interno del Registro Civil acorde a las reformas del Código Familiar de nuestra entidad. A la fecha no hay avances sobre este tema.

Para lograr un gobierno cercano a los ciudadanos es necesario socializar la información de los beneficios que brinda el Registro Civil. En el quehacer cotidiano es posible detectar lo siguiente: por desconocimiento de estos beneficios, el ciudadano utiliza recursos fuera de la norma jurídica, para solucionar en apariencia su problema de falta de identidad, que a la larga sólo agrava su situación personal. A continuación, se mencionan programas que tienen poca difusión:

- a) Cada año durante el mes de abril se lleva a cabo la campaña denominada "Abril, mes del registro extemporáneo" (En coordinación con el sistema DIF se registra el nacimiento de personas que cuentan con pocos documentos).
- b) Programa federal "Soy México", que reconoce la binacionalidad y protege el derecho a la identidad de la población migrante, hijos de padre o madre mexicanos nacidos en Estados Unidos (suprime la apostilla con una verificación gratuita), con dicha verificación es posible el registro de las actas de nacimiento de estas personas acreedoras a la doble nacionalidad.
- c) "Campaña Interestatal de acercamiento de Registro Civil a la Población Indígena Migrante y asentada originaria de los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz". En dicha campaña se ofrecen de manera gratuita los servicios de registro civil de los estados participantes (pueden variar las entidades involucradas) como son aclaración administrativa, reposición de actas y registros de matrimonio, nacimiento y defunción.

d) Programa federal “Tu acta donde te encuentres”, que consiste en la interconexión de las bases de los registros civiles del país, que permite poder expedir actas de otros estados en cualquier parte del país y consulados o embajadas de México en el mundo.

Con el nuevo sistema de cobro de servicios que proporciona el Gobierno, se puede tener mayor certeza de que el dinero entra directamente a las arcas gubernamentales, pero esto se ha traducido en que el ciudadano invierte mayor tiempo al realizar sus trámites si no posee una tarjeta bancaria, hay población que está dispuesta a pagar a un tercero que le agilice sus trámites (*coyote*), quien no otorga ninguna garantía en el servicio y desorienta a los usuarios. En otros estados de la República Mexicana está instituido el cobro por expedir actas, esto es, la persona que no quiera esperar ni hacer filas tiene la opción de pagar por la rapidez, un ejemplo son las oficinas de Registro Civil de los estados de Puebla, Baja California, Ciudad de México, entre otros.

Registro Civil presta servicios solicitados vía telefónica a sinaloenses en otras latitudes del mundo, los usuarios se quejan de lo congestionadas que son las líneas y que además el conmutador no los canaliza al área indicada. Los servicios que se ofrecen a distancia son: venta de actas, subir actas a la base nacional (cuando el ciudadano no la encuentra en la interconexión), aclaraciones administrativas, constancias de inexistencia y asesoría legal. El problema se presenta desde el conmutador telefónico de Gobierno, ya que no lleva un control o registro de las llamadas de los ciudadanos, sobre todo cuando los trámites no son posibles agotarlos en el mismo momento. Gran parte de los gobiernos estatales del país cuentan con un *call center* sistematizado, donde se registra un folio por usuario que le sirve para dar seguimiento desde el inicio hasta finalizar el trámite, así como la especificación de su necesidad, canalizando la solicitud al área correspondiente, un ejemplo de ello lo son los estados de Chihuahua y Durango.

1.14 Registro Público de la Propiedad y del Comercio

El Registro Público de la Propiedad y del Comercio busca impulsar el desarrollo económico del Estado de Sinaloa, proporcionando servicios registrales y de certificación que garantizan la certeza jurídica de los actos con el sustento del marco jurídico. Actualmente sólo los municipios de Culiacán y Navolato operan mediante un sistema informático (Sistema de Gestión Registral), las 16 oficinas restantes operan de manera manual mediante la incorporación de escrituras públicas y privadas. Los espacios e instalaciones son inadecuados en la mayoría de ellos.

La principal problemática que se presenta es contar con suficiencia presupuesta para continuar con el proceso de digitalización de inscripciones de escrituras, para poder migrar la incorporación de escrituras a folio real electrónico, que nos permita hacer más eficiente y rápida la función registral, brindando certeza jurídica y un mejor servicio a los ciudadanos a nivel estatal, de igual importancia es la adecuación y actualización del marco jurídico.

En el año 2016, se inscribieron los siguientes actos inmobiliarios a nivel estatal

	Estado	
	Operaciones	Importe
Traslativos		
Compra ventas	23,002	145,818,170.00
Donaciones	3,339	3,410,040.00
Adjudicaciones	1,796	4,841,440.00
Otras	1,386	5,272,740.00
Constitución de Gravámenes		
Hipotecas	13,955	33,004,200.00
Embargos	1,154	2,362,200.00
Convenio Modificatorio	306	247,450.00
Otros	1,674	3,906,770.00
Cancelaciones de Gravámenes		
Hipotecas	13,753	2,841,510.00
Embargos	738	143,170.00
Otros	96	26,600.00

Fuente: Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Sinaloa

1.15 Regulación en el Transporte Público y Seguridad Vial

La movilidad consiste en la supresión de todas aquellas barreras que obstaculizan los desplazamientos y los accesos en un entorno físico terrestre. Entonces, para poder plantearnos cómo obtener las mejores acciones encaminadas a mejorarla es necesario primero medirla para después evaluar y tomar las decisiones correctas.

Hablar de movilidad es conocer de sistemas de transportes, ya que no existe movilidad sin transporte y viceversa a menos que sea a pie, es por tanto cuando decimos movilidad podemos entender a todos aquellos desplazamientos que se realizan con origen y destino y lo realizan mediante un medio de transporte ya que sea en bicicleta, automóvil, transporte público o a pie. Por lo tanto, el objetivo de la movilidad es acortar las distancias entre nosotros y los lugares deseados para satisfacer alguna necesidad, es decir hacer más accesible un destino, ya sea por necesidad o placer. Un objetivo de la movilidad es la accesibilidad a cualquier lugar, a través de algún medio de transporte. Es por tanto lógico pensar que impulsar las oportunidades de mejorar la movilidad urbana para el desarrollo económico y social de sus habitantes debe ser motivo de políticas públicas.

Obliga entonces analizar la situación actual de la operación del servicio de transporte público urbano. Para la mayoría de los usuarios el modelo de operación resulta obsoleto,

por lo que resulta fácil deducir que un cambio en el modelo permitirá una movilización masiva de personas en forma óptima y reduciendo recursos, en comparación con las que pueden ser transportadas mediante el uso de vehículos particulares. Con un mejor servicio y más moderno habría un beneficio ambiental, debido a las reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los automóviles particulares.

Debido a la falta de infraestructura pública, aunado a la falta de coordinación y unificación en los criterios de operación del servicio de transporte público, hace que el servicio no sea de elevada calidad, por lo que las personas optan por usar el automóvil particular como primera opción al elegir un medio de transporte, y esto genera de forma natural la solicitud de espacios que cada vez son más reducidos.

La consecuencia es una "sobrepoblación" o saturación de automóviles que requieren más recursos y espacios para funcionar, generando desorden, contaminación del aire y más problemas. Por otro lado, la población urbana en las ciudades crece y requiere más espacios, así el problema de movilidad se incrementa, es decir nuestras ciudades crecen y se producen problemas de movilidad en ellas y con ello surge la dificultad de los gobiernos de facilitar a los habitantes el acceso a los servicios públicos. Visto que la movilidad urbana ligada al transporte público ha tenido esfuerzos por mejorar, pero continúa sin satisfacer las continuas y crecientes necesidades de transporte de los ciudadanos y por tanto resulta deficiente, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 define estrategias y acciones a implementar, siendo las más significativa en este rubro la modernización de los sistemas de transporte público e impulsar la movilidad urbana en las ciudades, y en su caso, impulsar sistemas de movilidad sustentables como medios de transporte en los centros poblados y crear infraestructura para la movilidad no motorizada.

En el Estado de Sinaloa, el servicio de transporte público de pasajeros se presta a través del sistema de concesiones autorizadas a personas físicas o morales, quienes han conformado un sistema operativo tradicional en el que existe diversidad de criterios de ejecución. Al autorizarse o concesionarse la prestación del servicio público de transporte, queda a juicio del Poder Ejecutivo Estatal establecer para su explotación las modalidades que dicten el orden público y el interés social, pudiendo decretar las medidas tendientes a lograr la más eficaz coordinación, funcionamiento y regulación en la prestación del mismo, de acuerdo con las necesidades del público y congruentes con el desarrollo social y económico de la entidad; los concesionarios y permisionarios de cualesquiera de los servicios públicos debidamente autorizados, estarán obligados a cumplir con las estipulaciones que para la prestación de los servicios le fije la concesión respectiva y con aquellas disposiciones emitidas por Poder Ejecutivo, garantizando el cobro de las tarifas previamente establecidas, respetando los horarios e itinerarios fijados para la ruta, cuya explotación les haya sido autorizada, debiendo implantar medidas de supervisión y control, a efecto de cumplir con estas obligaciones.

El Poder Ejecutivo, tiene la facultad de establecer los lineamientos para impulsar la modernización del servicio público de movilización de personas para lo cual desarrolla el Programa de Modernización del Transporte Público Urbano.

Dentro de las acciones a implementar, el Ejecutivo determinó la creación de un organismo público descentralizado (RED PLUS) encargado de formular, proponer, administrar, operar y evaluar el Programa, con las atribuciones que le confiere su respectivo decreto de creación y las disposiciones legales aplicables. El mencionado Acuerdo define también los lineamientos esenciales que deberán atender los concesionarios del transporte público que participen en el Programa.

En ese orden de ideas, dentro del Programa de Modernización del Transporte Público en Sinaloa, se contemplan acciones encaminadas a mejorar el modelo de operación y la infraestructura del transporte público urbano, tal como funciona la credencialización de la Tarjeta Inteligente de Identidad Estudiantil, al garantizar que los estudiantes reciban el 50% de descuento en el transporte público urbano. Así, se han detectado áreas de oportunidad como la de tener mayor capacidad de atención e instalar más centros de atención al usuario, así como decrementos en el tiempo de trámite. Cabe mencionar, que el sector transporte ha visto mejorado sus operaciones y controles y que la infraestructura instalada tiene la capacidad para lograr el prepago, en la cual el servicio se verá favorecido y las inversiones rendirán frutos.

Cabe mencionar que se ha detectado un sector poblacional vulnerable: el de las personas con alguna discapacidad motriz, por lo que se ha planteado el reto de incluir a este sector en el programa de credencialización, de forma tal que también reciban el beneficio del descuento, de 50 por ciento, a bordo de las unidades del transporte público urbano.

Hay que recalcar que el crecimiento acelerado de las grandes ciudades mexicanas se ha dado en un contexto de deficiencia, vacíos y errores de la planeación urbana y su normatividad; la expansión de la mancha urbana conlleva a un desarrollo urbano de baja densidad con alta dependencia del automóvil y sin previsión de sistemas integrados de transporte públicos adecuados, a pesar de ser el medio más utilizado por la mayoría de la población, lo que ha agravado el problema de la movilidad urbana.

En la actualidad, se destinan cuantiosos recursos públicos financieros a la construcción de infraestructura vial en beneficio del transporte en automóvil privado, agravando drásticamente los principales problemas en las ciudades, que es el congestionamiento vial, producto de la enorme cantidad de vehículos privados en donde se trasladan en promedio 1.2 personas por unidad. Se estima que diariamente se pierde gran cantidad de horas/hombre en el tráfico citadino, los ingresos económicos de las familias disminuyen por los costos crecientes del servicio de transporte, y se incrementan los niveles de contaminación ambiental y auditiva que afectan a la salud de las personas.

El incremento en el parque vehicular privado supera ampliamente al aumento de la población en el país, tan sólo en los últimos 10 años la cantidad de vehículos en el país superó los 35 millones de unidades, de los cuales el 66% es representado por automóviles privados, es decir, presentó una Tasa Media de Crecimiento Anual del 7.4%, que supera 5 veces el de la población nacional (1.4%), mientras que la flota de menor crecimiento, innovación tecnológica y sistemas de administración y operación se ve representada por el transporte público.

Las principales ciudades de Sinaloa, aunque en diferentes grados, padecen congestión vial, deficiencia y baja calidad del servicio colectivo de transporte público y costos crecientes para las personas, los gobiernos y el ambiente, que afectan la competitividad y disminuyen la calidad de vida.

En Sinaloa, se estima que 7 de cada 10 habitantes viven en una localidad urbana, situación que obliga a replantear la movilidad a través del uso más eficiente de los recursos públicos para la dotación de infraestructura y equipamiento para el transporte y, con ello, preparar regiones funcionales con sistemas masivos de transporte público que disminuyan el número de vehículos particulares circulando en las vialidades de las ciudades.

Una de las causas que afectan la movilidad en los centros urbanos es el acelerado crecimiento del parque vehicular. En el periodo 2012-2015, el registro de automotores en circulación por municipio, según clase de vehículo y tipo de servicio, en la modalidad de vehículos privados y transporte público, pasó de 990 mil 152 a 1 millón 138 mil 411 unidades, lo que representó un aumento del 15% en apenas tres años. En 2015, los vehículos registrados se concentraban en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, lo que representaba más del 87% del total. En Culiacán, según datos del INEGI, se estima que se tiene un parque vehicular de 300 unidades por cada mil habitantes, lo que representa un índice de motorización de 0.30, sólo por debajo de las zonas metropolitanas de Tijuana, Mexicali y Chihuahua. Aunque comúnmente el índice de motorización es considerado como indicador de desarrollo económico, si éste es alto puede indicar problemas de movilidad dentro de algunas urbes, al asociarse con su uso irracional.

Mientras los desplazamientos en medios de transporte privado se disparan, los sistemas de transporte público evolucionan lentamente en términos de tamaño y renovación de su flota, los modelos de operación y administración se estancaron y disminuyó progresivamente la calidad en el servicio, por lo que al avanzar el proceso de expansión urbana, los problemas de movilidad crecieron de manera exponencial al igual que el rechazo de las y los usuarios que generalmente lo califican de malo, lento, peligroso, deteriorado y como un sinónimo de pobreza.

La movilidad urbana se basa principalmente en el transporte público concesionado. Se tiene estimado que en promedio el 25% del total de los viajes realizados en estas ciudades

es mediante el uso del transporte público en sus diferentes modalidades, donde sobresale el transporte urbano (camión), que representa el mayor porcentaje (70%).

En Sinaloa se cuenta con un sistema de transporte público concesionado al sector privado, es decir, las autoridades estatales otorgan concesiones individuales mediante un obsoleto esquema conocido como hombre-camión; la administración del servicio de transporte público se basa en función de la ganancia diaria del dueño o sueldo del conductor. Este sistema se caracteriza por una competencia feroz por el pasaje, inseguridad, sobrecupo, nula interconectividad, paradas discrecionales y repentinas para el ascenso y descenso de pasajeros, invasión de rutas, bajas velocidades, conductores improvisados o mal capacitados y deterioro del espacio público.

La eficiencia de la movilidad está dada por la calidad de los viajes en camiones del servicio de transporte público, la accesibilidad universal, la inter-modalidad y la sustentabilidad. Las limitaciones en la movilidad afectan en mayor proporción a los grupos de menores ingresos que habitan en asentamientos o desarrollos habitacionales periféricos alejados de los nodos de empleo y oferta de servicios, además son quienes más usan el transporte público (70% contra un 8% de quienes tienen ingresos altos) por ende, son quienes pierden más horas atrapados en el tráfico con velocidades de traslado más bajas.

Dado que el esquema de operación del servicio de transporte público concesionado está organizado y opera en función del ingreso que se obtiene por su uso diario y que se encuentra regulado oficialmente con un sistema tarifario, se caracteriza por ser un servicio deficiente por los usuarios e inseguro, ya que se adoptan conductas de manejo inapropiadas por parte de los conductores al circular a altas velocidades, con música a todo volumen, y demás deficiencias mencionadas en párrafos anteriores. A pesar de mantener este sistema de operación anárquico, los concesionarios en forma permanente exigen incremento a las tarifas para seguir prestando el servicio y mantener sus costos operativos.

Este círculo vicioso de incremento de tarifas cada año y deterioro del parque vehicular del transporte público hace que la población rechace a utilizar este servicio y opta por otros medios alternativos de traslados, siendo en este caso el uso del vehículo privado, por lo que los sistemas oficiales de planeación urbana deben estar enfocados a convertir el servicio colectivo de transporte público en atractivo para la población haciéndolo accesible, integrador, moderno, funcional, de calidad y con autobuses que utilicen el uso de energías alternativas de menor costo que los combustibles derivados del petróleo, para que su sistema de rentabilidad esté en función de la demanda y no en su precio. Este es el principal reto que se tendrá que enfrentar en el transporte público de pasajeros.

Accidentes de tránsito

A escala mundial, suceden más de 1.2 millones de muertes al año por accidentes de tránsito. Del total de fallecimientos, 12 por ciento ocurren en América Latina, principalmente entre adolescentes y adultos jóvenes, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El documento *La seguridad vial en la región de Las Américas*, destaca el aumento de la mortalidad de motociclistas en la región -casi 30 por ciento- entre los años 2010 y 2015, al pasar del 15 al 20 por ciento.

En la evaluación por país, México figura entre los que reportan menos avance en seguridad vial, debido a la carencia de una ley general o de carácter nacional.

En el Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2015, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes reportó que por cuestiones de tránsito Sinaloa tiene una tasa de mortalidad de 23.6 decesos por cada 100 mil habitantes, muy por arriba del promedio nacional (13.3), lo que posiciona a nuestra entidad entre los primeros lugares por la incidencia de esta problemática.

El mayor número de víctimas por accidentes viales son los peatones y motociclistas, lo cual indica que las prioridades para establecer medidas de seguridad vial deben estar enfocados a estos usuarios de las vías públicas. Según el INEGI, el 36% de los accidentes ocurren en Culiacán, seguidos por Ahome y Mazatlán, con 19% del total cada municipio.

Pese a la tarea de modificar y actualizar leyes, corregir fallas y realizar operativos de alcoholimetría, en seis meses del actual gobierno, se han registrado más de medio millar de muertes por accidentes de tránsito en el territorio de Sinaloa, en los que el alcohol está presente, y se enfila a superar los 687 fallecimientos por esta causa en el año 2016.

1.16 Proyecto Baluarte-Presidio

Con este proyecto el Gobierno del Estado se propone el desarrollo del sistema integral que comprende el aprovechamiento sustentable de los ríos Baluarte y Presidio, con los afluentes de ambos, a través del diseño, financiamiento, construcción, desarrollo, explotación y operación de las presas hidráulicas de almacenamiento Picachos sobre el río Presidio, incluyendo su distrito de riego, y la presa Santa María sobre el río Baluarte, incluyendo sus obras complementarias. Para tales efectos, en su origen concurren y participaron en este proyecto varias dependencias federales, estatales y los presidentes municipales de Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, mediante un acuerdo de coordinación suscrito el 8 de junio de 2001, así como mediante posteriores convenios modificatorios suscritos el 30 de septiembre de 2004 y 16 de diciembre de 2005 y el Acuerdo de fecha 7 de mayo de 2013, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 19 de junio de 2013 y su modificatorio del 6 de abril de 2016. El propósito es conjuntar esfuerzos, acciones y recursos para llevar a feliz término el proyecto Baluarte-Presidio.

Para la consolidación del proyecto, se formó la Comisión de Coordinación Interinstitucional Estatal para el Seguimiento, Operación, Consolidación y Evaluación del Proyecto Baluarte-Presidio, mediante Acuerdo del Ejecutivo publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, Núm. 31, de 8 de marzo de 2017.

Esta Comisión es de carácter transitorio y está integrada por titulares, o sus suplentes, de varias secretarías del Gobierno del Estado. Por mandato del artículo segundo del Acuerdo, la Secretaría General de Gobierno la presidirá y además la Comisión tiene un Secretario Ejecutivo, nombrado por el Gobernador Constitucional del Estado.

CAPÍTULO 2.

Estrategia General

Estrategia General

Conduciremos las relaciones del Poder Ejecutivo Estatal con los otros poderes del Estado, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos municipales, en un marco de estricta colaboración y respeto, con el fin de garantizar la gobernabilidad, la tranquilidad y la paz social.

Ejerceremos una política colaborativa con autoridades y representantes de los otros órdenes de gobierno, así como con otras secretarías y entidades administrativas de este Poder Ejecutivo.

Coordinaremos, junto con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, en su caso, el seguimiento y evaluación de programas, estrategias y acciones que se emprendan en materia de seguridad pública y prevención del delito.

Intervendremos en asuntos de política interna, conforme a los lineamientos que señale el Gobernador del Estado y el Reglamento Orgánico. Además, mantendremos relaciones respetuosas con partidos y agrupaciones políticas.

Aplicaremos una estrategia preventiva y de solución de conflictos con base en el diálogo constante, diseñando mecanismos de coordinación entre los ámbitos de gobierno y de acercamiento con grupos sociales y partidos políticos para fortalecer nuestra cultura democrática y la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno.

Fomentaremos y promoveremos el desarrollo político y la gobernanza, con la participación de partidos políticos y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con el fin de fortalecer la cultura cívica y los valores de la democracia.

Nuestro quehacer institucional está comprometido con el respeto de los derechos de las personas, la transparencia y la rendición de cuentas, donde la solución de los problemas se deberá emprender a partir del diálogo constante y permanente con los protagonistas de nuestra vida económica, política y social.

Coadyuveremos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otras instancias similares en la promoción, vigilancia y respeto de los derechos humanos, además para que se garantice la protección y auxilio oportuno a las víctimas.

Con la participación del Instituto de la Defensoría Pública brindaremos certeza jurídica a los ciudadanos mediante el acceso a una justicia integral y eficaz en aras de proteger los derechos de las personas, otorgando asesoría y representación jurídica de mayor calidad.

Realizaremos estudios constitucionales y proyectos legislativos con el fin de simplificar y actualizar el orden jurídico vigente.

Coordinaremos acciones con las secretarías de Innovación y, de Transparencia y Rendición de Cuentas, en materias de Gobierno Abierto, atención ciudadana y mejora regulatoria, con el propósito de hacer eficiente el funcionamiento de los servicios públicos, eliminando o reduciendo trámites administrativos.

Modernizaremos los sistemas de registro de información y generaremos bases de datos confiables y útiles para permitir tomar decisiones de manera oportuna y rápida, y rendir cuentas claras.

Promoveremos una política totalmente transversal que garantice la igualdad y equidad con el fin de disminuir la brecha entre géneros, asimismo, para reducir la desigualdad, la discriminación y la exclusión social.

El consenso se construirá para crear un nuevo entorno en el que las instituciones y autoridades tengan la capacidad de hacer valer el Estado de Derecho con integridad, honestidad, profesionalismo y compromiso, aceptando la contribución de sectores de la sociedad organizada para consolidarlo.

Por ello, implementaremos el modelo de Gobierno Abierto y proactivo en el fomento de la participación ciudadana como parte del quehacer gubernamental en el marco de la cultura de la legalidad y del respeto a los derechos humanos.

Estaremos siempre comprometidos con el modelo de Gobierno Abierto, la transparencia, la rendición de cuentas y la ética pública, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de Derecho.

Impulsaremos una agenda de participación ciudadana y gobernanza eficaz. Hay un principio esencial de la política que debe imperar en Sinaloa en los próximos años: escuchar e implementar las propuestas de ciudadanos organizados como parte sustancial del Gobierno Abierto.

Consideramos fundamental y esencial la participación ciudadana en las políticas, estrategias y acciones de gobierno, así como en los mecanismos de evaluación para medir el desempeño y calidad de los servicios públicos. Por ello, impulsaremos un gobierno abierto, honesto, eficiente y transparente, dispuesto a combatir la corrupción e impunidad que tanto daña el prestigio de las instituciones públicas y la gobernabilidad.

Es esencial el involucramiento de los ciudadanos para la mejora continua del servicio colectivo de transporte público. Solo así y mediante la capacitación permanente de promotores voluntarios será posible impulsar la educación vial en la población. Asimismo, se pretende mejorar mediante operativos de inspección con el fin de garantizar un servicio de calidad.

Apoyaremos políticas públicas que incidan en una mejor y más moderna infraestructura urbana a favor del transporte público, mediante convenios de colaboración con áreas de

desarrollo urbano, ecología, tránsito municipal e IMPLAN de las presidencias municipales, con el fin de apoyar los programas estatales para la circulación segura de vehículos, en calles y carreteras del estado. De igual forma se colaborará con proyectos de ingeniería de tránsito y transporte desarrollados que cuenten con opiniones técnicas de expertos de la sociedad civil, con la finalidad de mejorar los vínculos para lograr estrategias y soluciones en favor de los sinaloenses.

En general, en nuestro quehacer institucional seremos más asertivos y ágiles. Provocaremos cambios importantes en la manera de operar para que se abra la posibilidad de generar eficiencias en los diversos servicios que proporciona la Secretaría General de Gobierno. Porque estamos conscientes que debemos utilizar procesos transversales que deberán ser más digitales, mucho más flexibles, ágiles y escalables en beneficio de los habitantes de Sinaloa.

CAPÍTULO 3.

Políticas públicas para fortalecer la Gobernabilidad Democrática y el Estado de Derecho.

Este programa está estructurado a partir de 7 políticas públicas:

- Impulso a la gobernabilidad democrática
- Protección de los derechos de las personas
- Fortalecimiento a la certeza jurídica
- Normatividad e información registral
- Fomento de la cultura de la legalidad
- Prevención y atención a la violencia familiar
- Modernización del transporte público y seguridad vial.

La política de **Impulso a la gobernabilidad democrática** está orientada al desarrollo colectivo y al progreso de todos por igual. La gobernabilidad que necesita y merece Sinaloa no significa únicamente liberar a la sociedad y al gobierno de la corrupción, sino también otorgar al pueblo los derechos, los medios y la capacidad para participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas y para hacer que los gobiernos sean responsables de sus actos. Significa que la gobernabilidad ha de ser justa y equitativa, y, ante todo, democrática.

La política de **protección de los derechos de las personas** está orientada a coadyuvar con todas las instancias e instituciones competentes en avanzar hacia un cambio de mentalidad para que en Sinaloa se respeten y promuevan los derechos humanos. Y es que las personas tienen la razón y también la voz para reclamar sus derechos fundamentales, los cuales aún no tienen plena garantía y efectividad, en su mayoría. Asimismo, esta política está orientada a promover el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La política de **fortalecimiento a la certeza jurídica** está orientada a consolidar la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales y garantizar la certidumbre acerca de los actos jurídicos. Está orientada a que los ciudadanos tengan la seguridad de que la norma se hará cumplir y en que estos conozcan los criterios básicos bajo los cuales se aplicará. La legalidad y certeza jurídica deben prevalecer en todo momento en diversos ámbitos de nuestra vida pública y privada, y no debe haber duda acerca de su aplicabilidad. Además, esta política está orientada a reducir la discrecionalidad en el desempeño de la función pública. Por lo que esta Secretaría seguirá brindando continuidad a los servicios que da a la sociedad, como vía idónea para lograr un gobierno eficiente y transparente, cercano a la gente, viviendo en un Estado de Derecho, condición esencial para que prevalezca la armonía y la paz social.

La política de **normatividad e información registral** está orientada a dar cumplimiento puntual a la legislación y reglamentación vigente, propiciando procesos registrales más modernos, eficientes y transparentes, orientada también a aplicar programas de

profesionalización, así como para el uso correcto de procesos digitales, más innovadores, en los trámites gubernamentales, mejorando así la eficiencia de los actos registrales.

La política de **fomento de la cultura de la legalidad** está orientada a que niñas, niños y jóvenes se apeguen, desde chicos, al respeto de leyes y normas que nos rigen, sin excepción alguna. La ley como la norma básica de la convivencia en sociedad debe ser conocida por todos para ser plenamente respetada y vigilada su cumplimiento. En una sociedad que se precie de vivir en un Estado de Derecho, todos debemos ceñirnos a la legalidad.

La política de **prevención y atención a la violencia familiar** está orientada a reducir los feminicidios, así como hechos de violencia contra niñas, niños, adolescentes, mujeres y ancianos por parte de sus familiares.

La política de **modernización del transporte público y seguridad vial** está orientada a proporcionar un mejor servicio a los usuarios, pugnar porque sea más eficiente, dotado con unidades motrices modernas y con aditamentos y equipo idóneo para transportar discapacitados con problemas de movilidad. Asimismo, para inhibir el consumo de bebidas alcohólicas y drogas ilícitas en conductores de vehículos particulares y del transporte público de pasajeros, y que lamentablemente ocasionan accidentes viales fatales.

Estas políticas públicas se complementan entre sí de la siguiente manera:

3.1 Impulso a la Gobernabilidad democrática

El propósito de esta política es construir un proceso permanente de diálogo y concertación entre el gobierno y la sociedad sinaloense. Se impulsa para alcanzar acuerdos políticos y sociales en el marco de respeto a las normas jurídicas e instituciones que nos rigen. Debe considerarse la base para desarrollar el resto de las políticas públicas. Una condición *sine que non* para reducir y/o eliminar los problemas que frenan el desarrollo político, económico y social de Sinaloa. En otras palabras, se impulsa esta política para alcanzar los objetivos y metas que nos hemos trazado en el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo y en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Retos y Desafíos

El principal desafío es superar una menor disponibilidad presupuestal para cumplir con los compromisos y obligaciones que el gobierno tiene con los ciudadanos, lo cual ha generado una serie de inconformidades, incluso con trabajadores y servidores públicos, que se manifiestan cotidianamente mediante acciones de protesta emprendidas por organizaciones de la sociedad civil y por diversos grupos de trabajadores, principalmente del Estado.

Otro reto es captar información objetiva, veraz y oportuna acerca de posibles acontecimientos políticos y sociales que sucedan en la entidad y que puedan alterar y

perturbar el orden y la paz pública. Asimismo, para que el gobierno pueda tomar decisiones antes de que estallen y se esté en condiciones de desactivar situaciones complicadas que puedan convertirse en conflictos mayores y violen los derechos de las personas.

Uno de los retos es afianzar la coordinación intergubernamental, fortaleciendo la comunicación interna. Asimismo, tener mayor comunicación con líderes de partidos y grupos para analizar problemas políticos y sociales y para el intercambio de ideas y propuestas. Asimismo, reconocer y divulgar que la gobernabilidad eficaz está basada en la rendición de cuentas, en la participación amplia de grupos sociales organizados, en la transparencia y en la vigencia del Estado de Derecho, y que el fortalecimiento del gobierno del Estado es asunto clave para lograr los objetivos de desarrollo, paz y seguridad.

Otro reto es cumplir con el objetivo de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de promover una sociedad pacífica e inclusiva, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Para lograr la paz, la justicia y la inclusión, es importante que el Gobierno, la sociedad civil y las diversas comunidades que componen el conglomerado social trabajen juntos para poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan la violencia, hagan justicia, combatan eficazmente la corrupción y garanticen en todo momento la participación inclusiva.

Las leyes y las políticas deben aplicarse sin distinción alguna y sin discriminación.

AMENAZAS SITUACIONES EXTERNAS QUE ATENTAN CONTRA LA GOBERNABILIDAD	FORTALEZAS RECURSOS Y CAPACIDADES CON QUE CUENTA EL GOBIERNO ESTATAL
Conflictos sociales (Educativos, agropecuarios, sociales, etc.).	Buena relación con organizaciones sociales, políticas, académicas, agropecuarias, religiosas, etc.
Establecimiento de organizaciones sociales hostiles en el estado (UNTA, Antorcha Campesina, CNTE, etc.).	Compromiso institucional de colaboradores de la DG.
Descontento social hacia la administración pública.	Excelentes resultados en gestión e las demandas de ciudadanos y organizaciones.
DEBILIDADES FACTORES QUE CONTRIBUYEN A POSICIÓN DESFAVORABLE ANTE GRUPOS DESESTABILIZADORES	OPORTUNIDADES FACTORES QUE CONTRIBUYEN A UNA POSICIÓN FAVORABLE
Equipamiento obsoleto (Parque vehicular, equipo de cómputo e investigación).	Escasa participación ciudadana.
Falta de capacitación.	Deficiente coordinación entre organizaciones y competencia política entre ellas.

Plan de Acción

Fortalecer las acciones de inteligencia de la Dirección de Gobierno, captando información, por todos los medios posibles en la entidad para la correcta, oportuna y rápida toma de decisiones del Ejecutivo.

Vigilar e investigar hechos que alteren o sean susceptibles de alterar o dañar la seguridad interna del Estado.

Empoderamiento interinstitucional de la Dirección de Gobierno, reforzando el área de vinculación social y política, extendiendo su presencia en las delegaciones regionales, distribuidas en el territorio del estado.

Evaluar, previa consulta ciudadana, los problemas que afecten el equilibrio político y social de Sinaloa.

Efectuar análisis coyunturales acerca del origen de los conflictos y su posible desarrollo, reuniendo datos y generando metadatos que sirvan de herramienta útil para negociar con la parte peticionaria, previniendo que los conflictos tomen un cariz más complejo y difícil de resolver.

Mantener y privilegiar la disposición al diálogo constante y permanente, como la vía más efectiva para distender conflictos y allanar las diferencias.

Esta política tiene como instrumentos los siguientes:

3.1.1 Instrumentos

- El Gobierno Abierto;
- Un renovado y actualizado marco jurídico estatal de vanguardia, en concordancia con la legislación nacional y federal;
- Convenios de colaboración con los distintos ámbitos de gobierno para facilitar la cooperación y atención de las demandas sociales;
- Reuniones de trabajo con líderes de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, empresarios, grupos de la sociedad organizada y legisladores para fomentar mecanismos de cooperación y análisis de diversos temas.

Propósito de los Instrumentos

La finalidad del Gobierno Abierto es optimizar la comunicación entre el gobierno y ciudadanos para lograr un diálogo dinámico, colaborativo, efectivo y eficaz, donde las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) juegan un rol trascendental.

El objetivo de actualizar el marco jurídico es cimentar y reforzar la convivencia armónica, pacífica y civilizada.

La prioridad en cuanto a la firma de convenios de colaboración es mejorar la coordinación interna entre las secretarías y dependencias del gobierno con el fin de atender y resolver los problemas políticos y sociales que se presentan.

La intención de efectuar reuniones de trabajo con actores políticos es mantener y mejorar la comunicación con los sujetos políticos y líderes sociales de Sinaloa.

Retos y desafíos

Con apoyo de ciudadanos organizados, aplicar el modelo de Gobierno Abierto. Atender de manera más eficaz los servicios que proporciona la Secretaría General de Gobierno.

3.2 Protección de los derechos de las personas

El propósito de esta política es coadyuvar a garantizar de mejor manera el reconocimiento jurídico de toda persona física y moral como sujetos de derechos humanos y a protegerlos de posibles violaciones a sus derechos inherentes. Asimismo, para garantizar la identidad personal y sentido de pertenencia de los habitantes de Sinaloa a un estado, un territorio, una sociedad y una familia.

Además, con esta política se busca velar por el interés superior de la niñez mediante el impulso de acciones, mecanismos, servicios, estrategias y programas con un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, que garanticen de manera plena el goce, ejercicio, respeto, protección, promoción y defensa de los derechos referentes a la supervivencia, desarrollo, protección y participación de la niñez y la adolescencia.

Retos y Desafíos

El principal desafío es lograr, en corto tiempo, un cambio de mentalidad en la mayoría de la población en el respeto pleno y general a los derechos humanos, los cuales, como se sabe, son vulnerados cotidianamente. México sigue siendo el país con más denuncias en su contra por violaciones a los derechos humanos presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La cultura predominante es un obstáculo para que se ejerzan plenamente los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hoy en día, las relaciones interpersonales, familiares, institucionales, sociales, económicas y políticas se basan en una cultura discriminatoria y *adultocéntrica*. Por ello, se tienen que impulsar políticas, programas, acciones tendientes a un cambio cultural que reconozca los derechos de la niñez y adolescencia.

Por otro lado, pese a los múltiples programas y acciones, los datos e indicadores existentes dan cuenta de situaciones de desventaja sistemática, riesgo o discriminación en temas como pobreza, violencia, desarrollo infantil temprano, acceso a seguridad social, explotación laboral, y grandes desigualdades por origen étnico, territorio, nivel socioeconómico o sexo, entre otros. Lo anterior demuestra una falta de articulación de la política pública en la materia, por lo que el gran reto es desarrollar una capacidad de implementación y una coordinación y concurrencia interinstitucional e intergubernamental efectiva, para garantizar el interés superior de la niñez.

Un desafío es otorgar protección integral a niños y adolescentes migrantes no acompañados provenientes de países de Centroamérica, principalmente, en virtud de que el gobierno de México ha desatendido la protección y la asistencia a niños migrantes en situación vulnerable, al no respetar leyes en la materia y tratados internacionales.

Un reto es mostrar mayor voluntad política y congruencia para que haya una política efectiva de protección a las víctimas del delito. Destinar una partida presupuestal anual o multianual, sustancial para apoyo de víctimas y familiares.

Otro desafío es enmendar y superar los problemas de capacitación en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, no sólo de los abogados del Instituto de la Defensoría Pública, sino también de operadores, policías, peritos, agentes del Ministerio Público, jueces, asesores jurídicos y periodistas.

Asimismo, habrá que superar los posibles casos de deficiencia en los servicios que presta esta Secretaría. Se requiere capacitar y actualizar a los servidores públicos constantemente para mejorar su desempeño conforme al marco jurídico que los rige y regula. Mejorar la percepción de los ciudadanos respecto a la imagen de las instituciones de gobierno.

Igualmente, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo social se debe enmendar la ausencia de una política pública para apoyar a la población que se ve forzada a abandonar sus pueblos y comunidades de las zonas serranas a causa de la violencia y amenazas generadas por grupos del crimen organizado.

En cuanto al tema de las desapariciones forzadas, el reto es intervenir más y coadyuvar en la búsqueda de cuerpos desaparecidos y enterrados clandestinamente, en virtud de que esta labor es realizada por familiares de desaparecidos y por organizaciones de la sociedad civil, principalmente, y no por las autoridades competentes.

Otro desafío es construir confianza entre ciudadanos, lo cual se logra con hechos y cercanía con la gente, para generar una nueva dinámica entre ciudadanos y la Secretaría.

Plan de Acción

Allegarse información para elaborar el proyecto de Plan Estatal de Derechos Humanos.

Coadyuvar para poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños, conforme al objetivo 16.2 de la Agenda 2030.

Avanzar en la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para ello se requiere vincular los sectores público, social y privado, delimitando líneas de trabajo, atendiendo facultades, competencias y concurrencia interinstitucional e intergubernamental efectiva para la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias, servicios y acciones, asegurando un enfoque transversal, integral y con perspectiva de derechos humanos. Asimismo, se requiere la coordinación entre las dependencias y de los gobiernos estatal y municipales, a fin de garantizar la institucionalidad para protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Realizar talleres para capacitar a servidores públicos de dependencias relacionadas con el cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes, donde se aborden problemas centrales, así como rutas de trabajo para la institucionalidad del Sistema.

Elaborar un registro estatal de personas desplazadas de manera forzosa de sus pueblos, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, con el fin de atender a familias de la sierra que se ven forzadas a abandonar sus hogares y desplazarse a las ciudades de la costa con motivo de la violencia y amenazas de parte de grupos de la delincuencia organizada.

Destacar y difundir la universalidad, igualdad, transversalidad, integralidad, inclusión, solidaridad, equidad y dignidad y los derechos humanos en la aplicación de los enfoques hacia todos los grupos en condición de vulnerabilidad que existen en Sinaloa, así como los temas conexos relacionados con la salud, educación, comunidad, gobernabilidad y sostenibilidad para la implementación regional del Programa de Acción de El Cairo y sus medidas clave para seguir ejecutándolo, y su seguimiento después del año 2014.

Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ningún tipo de discriminación, las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección social.

Garantizar la existencia de mecanismos de participación efectiva de adolescentes en el debate público, en la toma de decisiones y en todas las etapas de las políticas y programas, en particular en aquellas que les atañen directamente, sin ningún tipo de discriminación fortaleciendo los mecanismos institucionales.

Invertir en la atención de adolescentes, a través de políticas públicas específicas y condiciones diferenciales de acceso, especialmente en la educación pública, universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad, para lograr que sea una etapa de vida plena y satisfactoria, que les permita construirse a sí mismos como personas autónomas, responsables y solidarias, capaces de enfrentar creativamente los retos del siglo XXI.

Promover e invertir en políticas de trabajo y empleo y programas especiales de formación para que potencien la capacidad e iniciativa colectivas y personales y posibiliten la conciliación entre los estudios y la actividad laboral, sin precarización del trabajo y garantizando igualdad de oportunidades y trato.

Asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos.

Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e intercultural, y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual.

En el SIPINNA, poner en práctica o fortalecer políticas y programas para evitar la deserción escolar y prevenir la drogadicción entre niños y adolescentes.

En el SIPINNA, dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos. Diseñar estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente en la adolescencia, incluida la atención prenatal, del parto y posparto, el acceso a métodos anticonceptivos, a las acciones de protección y asistencia y a la justicia.

Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las oportunidades y capacidades para una sana convivencia y una vida libre de violencia, mediante estrategias intersectoriales que incluyan actuar sobre los determinantes que dificultan la convivencia y promueven la violencia, que brinden una formación que promueva la tolerancia y el aprecio por las diferencias, el respeto mutuo y de los derechos humanos, la resolución de conflictos y la paz desde la primera infancia, y aseguren la protección y el acceso oportuno a la justicia de las víctimas y la reparación del daño;

Garantizar también datos estadísticos confiables, desagregados por sexo, edad, condición migratoria, raza y etnia, variables culturales y ubicación geográfica en materia de educación, salud, en particular salud sexual y salud reproductiva, empleo y participación de adolescentes y jóvenes.

3.2.1 Instrumentos

Esta política tiene como instrumentos los siguientes:

- Respetar los derechos y garantías de las personas;
- La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa y su reglamento;
- El sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa (SIPINNA);

- Alianza por una Niñez sin Violencia, con apoyo de UNICEF, organismos internacionales, sector empresarial, sociedad civil y academia;
- Consulta a niñas, niños y adolescentes con el fin de allegarse datos con el fin de combatir la violencia y drogadicción que los afecta y daña;
- Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA);
- Programa de la Dirección del Trabajo y Previsión Social para la Erradicación del Trabajo Infantil en Sinaloa.
- Programa de la Dirección del Trabajo y Previsión Social "Conoce tus prestaciones laborales".

Propósito de los Instrumentos

La finalidad del primer instrumento anotado líneas arriba es promover y garantizar los derechos humanos de los habitantes de Sinaloa.

Se busca aplicar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa y su reglamento para garantizar a niños, niñas, adolescentes las oportunidades y capacidades para una sana convivencia y una vida libre de violencia.

El objetivo principal del SIPINNA es garantizar el pleno goce, ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes es una herramienta dinámica de coordinación entre distintas dependencias del Gobierno Federal y un puente de coordinación y cooperación con las entidades federativas y los municipios.

El programa para erradicar el trabajo infantil va dirigido, principalmente, a los campos agrícolas de los valles de Sinaloa, donde se les emplea en la recolección de hortalizas, en contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales de los que México es parte, Ley Federal del Trabajo y otras leyes.

El programa "Conoce tus prestaciones laborales" se propone fortalecer la política laboral para que los sinaloenses tengan mejores empleos y salarios, con prestaciones y derechos plenos, salvaguardando el acceso a una justicia más justa y expedita.

Retos y desafíos

Elaborar y publicar el Plan Estatal de Derechos Humanos a fin de promover masivamente los derechos que les asiste a las personas en Sinaloa.

3.3 Fortalecimiento a la Certeza Jurídica

El propósito de esta política es dar certeza y seguridad jurídica a la sociedad. Asimismo, brindar, en general, certeza a los ciudadanos mediante el acceso a una justicia integral y eficaz en aras de proteger los derechos de las personas. A través del Instituto de la Defensoría Pública garantizar a los imputados el derecho a una defensa adecuada y de

calidad en materia penal y de justicia para adolescentes mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en materia civil, familiar y administrativa, procurando la solidez institucional.

Retos y Desafíos

En asuntos agrarios, el principal reto es darle certeza jurídica para quien quiera invertir en terrenos que son propiedad social; ofrecer seguridad no sólo al que es el dueño o a los núcleos agrarios, sino también a quienes desean realizar una inversión y conozcan la situación legal de esos terrenos, y tener la certeza si son sujetos susceptibles de arribar a un acuerdo para realizar alguna inversión, para ello se debe utilizar el portal donde se puede acceder a los servicios públicos de información que ofrece el Registro Agrario Nacional (RAN), desde su página web.

Plan de Acción

En la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos coordinar la elaboración de proyectos de iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y cualquier otro instrumento del orden jurídico que sea encomendado por el Gobernador del Estado, así como revisar los proyectos que sean propuestos por otras instancias.

Presentar ante el Congreso del Estado iniciativas de ley firmadas por el Ejecutivo.

Brindar asesoría y apoyar a los gobiernos municipales en las materias que competen a esta Secretaría, cuando así lo soliciten.

En la Dirección del Archivo General de Notarías realizar las gestiones correspondientes ante la Dirección de Consulta y Compilación del Orden Jurídico Nacional, de la Secretaría de Gobernación, para llevar a cabo la actualización del Programa de Registro local de aviso de testamento. Implementar un programa estatal de rezago y actualización de inspecciones generales. Implementar un programa de digitalización de bases de datos de los libros notariales.

Avanzar en la socialización de los programas agrarios del Gobierno del Estado con ejidatarios, comuneros posesionarios, pequeños propietarios y colonos, para lo cual se diseñó un tríptico conteniendo los servicios que se prestan en la Dirección de Asuntos Agrarios.

En la Dirección de Asuntos Agrarios, mantener un contacto permanente con los núcleos agrarios a fin de que estos estén informados sobre las acciones y programas gubernamentales que les permitan elevar el nivel de vida. Asistir a las asambleas que celebran los núcleos agrarios para efectos de transmitir información sobre los programas y acciones que el Gobierno del Estado implementa en su beneficio, conforme a una agenda de visitas ejidales. Capacitar y mantener actualizados e informados a los núcleos agrarios de los avances de los programas y acciones que implementa el Gobierno del Estado en la

población objetivo. Ser interlocutor entre los núcleos agrarios y Gobierno, asimismo entre las dependencias de la administración pública federal y municipal, mediante el servicio de gestoría. Dar asesoría a los ciudadanos del sector campesino, mediante la asistencia profesional jurídica y técnica gratuita.

3.3.1 Instrumentos

Esta política tiene como instrumentos los siguientes:

- Programa actualizado de registro local de aviso de testamento;
- Programa estatal de rezago y actualización de inspecciones generales;
- Programa de digitalización de bases de datos de libros notariales;
- Programa del Instituto de la Defensoría Pública "La defensa en tu comunidad";
- Foros, seminarios y cursos para fortalecer la labor que realiza el Instituto de Defensoría Pública;
- En materia agraria, el acceso mediante internet a cuatro módulos: *módulo de consulta SIMCR*, donde los usuarios podrán consultar en tiempo real el estatus de solicitud de trámite que estén registrados en el Catálogo Nacional de Trámites, el boletín registral, el listado de ejidatarios, comuneros, posesionarios y vecindados. *Estadística Agraria*, proporciona información sobre la propiedad social. Tiene la finalidad de aportar elementos que apoyen las tareas de investigadores, estudiantes, instituciones y población interesada en impulsar programas, estrategias y acciones que beneficien a hombres y mujeres del campo. *PHINA*, primera fuente de información a consultar en el análisis de temas agrarios tanto en el interior del Sector Agrario como fuera de él, ya sea para la integración y elaboración de proyectos académicos, sociales, territoriales y urbanos o simplemente para conocer la historia agraria de un pueblo. *Sistema de Información Geoespacial (SIG)*, sistema de consulta a nivel nacional que contiene información catastral y registral de la propiedad social en México, a través de un mecanismo de georreferenciación que permite visualizar capas de información en una computadora electrónica;
- Acuerdo que crea con carácter transitorio la Comisión de Coordinación Interinstitucional Estatal para el Seguimiento, Operación, Consolidación y Evaluación del Proyecto Baluarte-Presidio, así como su plan de trabajo.
- El cambio de paradigma y proyecto de traslado de la jurisdicción y competencia de conflictos laborales al Poder Judicial del Estado.

Propósito de los Instrumentos

El propósito general de estos instrumentos es avanzar en el fortalecimiento del ejercicio de los derechos les corresponde a los ciudadanos, especialmente de campesinos, ejidatarios y trabajadores.

Retos y desafíos

Mejorar sustancialmente la certeza jurídica en los diversos trámites procedimentales que se realizan en las diversas direcciones y dependencias de la Secretaría.

3.4 Normatividad e Información Registral

El propósito de esta política es dar certeza jurídica a los sinaloenses en sus datos de información registral y patrimonio. Concretamente, respecto a actos y actas del estado civil, mediante la modernización y mejoramiento de los procesos por los que el gobierno inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a actos del estado familiar de las personas.

Dar seguridad jurídica y protección oficial a los actos del Registro civil y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio es una prioridad, para la tranquilidad de las personas, como para una mejor comprensión en las relaciones sociales y jurídicas, puesto que la incertidumbre generada por la ausencia de certeza imposibilita la realización de negocios jurídicos con un mínimo de seguridad, e inhibe la inversión productiva. A través de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, garantizar que los actos registrados sean protegidos por la Ley y alentar la actividad económica en Sinaloa.

Retos y Desafíos

El reto en el Registro Civil es modernizar oficinas y procesos en las oficinas, como una condición para incrementar la eficiencia operativa en la expedición de las actas. Un reto trascendental es incrementar la eficiencia y eficacia del proceso operativo en línea (es decir, mediante el acceso a internet).

En general para los registros públicos y archivos el desafío a enfrentar es incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los actos registrales. Incrementar la oferta de los servicios electrónicos. Consolidar los procesos de organización mediante la innovación y mejorar la coordinación interinstitucional.

Con el fin de cumplir con la Agenda 2030, en su objetivo 16.9, se deberá proporcionar acceso al cien por ciento a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos en el Registro Civil.

Asimismo, reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas en las oficinas con atención al público. Específicamente, en los procedimientos de inspección y vigilancia de restaurantes, bares, antros y otros negocios donde se venden bebidas alcohólicas que realiza la Dirección de Inspección y Normatividad, conforme al objetivo 16.5 de la Agenda 2030.

Plan de Acción

En la Dirección General del Registro Civil se deberá diseñar un proyecto de modernización de las oficinas de oficiales del Registro Civil, incluyendo equipamiento moderno, así como elaborar un proyecto de reglamento.

En la Dirección de Inspección y Normatividad el propósito está enfocado a vigilar el cumplimiento y aplicación de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa y su reglamento. Trabajar en coordinación con otras dependencias para intervenir establecimientos mercantiles nocturnos irregulares. Asimismo, intensificar los operativos de revisión de los centros nocturnos para que no ingresen personas armadas, se respeten los horarios de atención y se evite el ingreso a menores de edad. Mantener actualizado el listado de establecimientos que deban ser intervenidos y verificados por la Dirección, haciendo especial énfasis en los denominados *after hours*. Igualmente, revisar permanentemente los establecimientos suspendidos, clausurados o con rompimiento de sellos.

En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio se deben establecer medidas para agilizar la integración de expedientes y para que su digitalización sea rápida y eficiente, logrando, además, que las escrituras se inscriban en el Registro en un tiempo menor que el logrado en años anteriores.

Por otro lado, se debe pugnar ante el Consejo Estatal de Notarios de Sinaloa y Colegios de Notarios Públicos, para que modernicen sus procesos y se apeguen a la legalidad y normatividad institucional, adaptándose mejor a los sistemas innovadores e invertir en infraestructura y en personal capacitado.

Revisar las escalas del índice de excelencia INEX, para determinar la calificación de notarios públicos.

3.4.1 Instrumentos

Esta política tiene como instrumentos los siguientes:

- Programa de modernización y equipamiento de las oficinas de los oficiales del Registro Civil;
- Programa de inspecciones y supervisiones de vigilancia de restaurantes, bares, cantinas y centros nocturnos;
- Foros y pláticas con alumnos de educación media superior y superior de escuelas públicas y privadas pretenden desestimular el consumo de bebidas con contenido de alcohol;
- Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, y el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, en materia del Registro Público del Comercio;

- Ley del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria;
- Plan Estatal de Simplificación administrativa y Regulatoria (PESAR).

Propósito de los Instrumentos

El propósito de la modernización de las oficinas de los oficiales del Registro Civil es dotarlas de equipos de cómputo e impresoras de última generación, con acceso a internet, para que puedan estar en línea y expedir actas de manera eficiente.

Asimismo, para dotarlas de personal capacitado y mobiliario para las labores indispensables de oficina. También es prioritario expedir un nuevo Reglamento del Registro Civil (que sustituirá al vigente que data de 1982), con el fin de hacer más eficiente y eficaces los procesos del Registro.

El programa de inspecciones y operativos de vigilancia de restaurantes bares, cantinas y centros nocturnos se hará por parte de la Dirección de Inspección y Normatividad, con apoyo de otras dependencias, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública, PGR, el Ejército y la Marina. El propósito es intensificar la vigilancia y revisión al interior y exterior de los antros, incluso con videocámaras, para evitar se cometan actos ilícitos.

Los foros y pláticas con alumnos de escuelas públicas y privadas tienen el propósito de desalentar el consumo de bebidas alcohólicas.

El propósito del Convenio de Colaboración y Coordinación con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal es para operar el Sistema Integral de Gestión Registral, en su versión 2.0 (SIGER, por sus siglas en español). Se trata de un programa informático que redundará en beneficio de los usuarios del Registro Público de Comercio. Con esta innovación tecnológica se tendrá acceso vía internet a la base de datos nacional y también se podrán realizar inscripciones y consultas de manera inmediata.

Retos y desafíos

Modernizar y equipar debidamente las oficinas del Registro Civil que operan a lo largo y ancho del territorio de Sinaloa. Asimismo, mejorar y extender el programa de inspecciones y operativos de vigilancia de restaurantes bares, cantinas y centros nocturnos que realiza la Dirección de Inspección y Normatividad.

3.5 Fomento a la Cultura de la Legalidad

El propósito de esta política es formar de manera enfática e integral a niñas, niños y jóvenes, para que se apeguen al respeto de las leyes y normas que nos rigen. Es un componente indispensable y fundamental para la vida social sinaloense. En un Estado de Derecho Democrático como el que deseamos reforzar en Sinaloa el imperio de la ley

demanda la subordinación a ella de todos los poderes del Estado, así como de todos los representantes populares, servidores públicos y ciudadanos, sin excepción alguna.

Retos y Desafíos

El apego a la legalidad es uno de los principios claves y necesarios en el proceso de formación de ciudadanía responsable en Sinaloa y para disminuir los hechos de violencia. La ley por sí misma y su aplicación es indispensable, más no suficiente para garantizar una convivencia pacífica, armónica, tolerante y respetuosa en sociedad. Si se quiere lograr esto último, deberá entonces fomentarse por todos los medios una educación que promueva en las personas el ejercicio responsable de su libertad y el desarrollo de su autonomía moral, así como la capacidad de solidarizarse y preocuparse por el bienestar colectivo.

Plan de Acción

Promover de manera transversal cursos, simposios, mesas redondas y conferencias en materia jurídica y otros temas afines, con la participación del personal de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, y Secretaría de Seguridad Pública.

3.5.1 Instrumentos

Esta política tiene como instrumentos los siguientes:

- Ley de Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad del Estado de Sinaloa. (P.O. “El estado de Sinaloa”, 4 de mayo 2016).
- Programas de difusión de los valores cívicos en escuelas de educación básica y media del estado, y para la población en general.

Propósito de los Instrumentos

El propósito de estos instrumentos es avanzar de manera sustantiva en la promoción y difusión de la cultura basada en principios y valores. La cual debe estar enfocada básicamente hacia niños y jóvenes en edad escolar.

Retos y desafíos

Vencer las resistencias en cuanto a aplicar una política pública basada en principios y valores. El reto es aplicar debidamente y de manera transversal la Ley de Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad del Estado de Sinaloa, así como aplicar con eficacia los programas de difusión de los valores cívicos en escuelas.

3.6 Prevención y Atención de la Violencia Familiar

El propósito de esta política es aplicar un enfoque integral de derechos humanos con perspectiva de género en el tratamiento de los asuntos de violencia familiar, e incrementar los esfuerzos tendientes a prevenirla. Se pretende reducir al máximo los

feminicidios y otros tipos de violencia que se dan contra las mujeres en el seno de los hogares, atendiendo, además, los hechos de violencia contra niñas, niños, adolescentes, mujeres y ancianos por parte de sus familiares.

En el ámbito de su competencia, el Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar (CEPAVIF), deberá funcionar como órgano de vigilancia, seguimiento y evaluación del Programa para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado. Además de proponer modelos de prevención y atención a la violencia familiar e impulsar la creación de Centros de Atención a Víctimas de Violencia Familiar. Promover programas de intervención temprana para prevenir desde donde se genera la violencia familiar.

Retos y Desafíos

Uno de los retos es bajar las elevadas tasas de violencia en el hogar y en los espacios públicos. Asimismo, avanzar en el libre acceso a la justicia, la cual continúa siendo desigual.

El reto es avanzar en la eliminación de los obstáculos que traban la alerta de violencia de género y facilitar el trabajo que realizan la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), CEPAVIF y los Centros de Justicia para Mujeres.

A pesar de que nuestro país es de los que más invierte en materia de igualdad, mantiene aún incoherencias entre los contenidos de las políticas públicas y la interpretación que les dan las diferentes instancias gubernamentales. Entonces, uno de los retos consiste en que el gobierno del Estado le otorgue prioridad a la atención de la violencia familiar y violencia contra las mujeres.

Un desafío al que nos enfrentamos en este tema es eliminar la principal causa por la que la mujer agredida en Sinaloa opta por callar y no denunciar algún acto de violencia en su contra. El problema radica en la revictimización y criminalización que efectúan algunas autoridades sobre las propias víctimas.

3.6.1 Instrumentos

Esta política tiene como instrumentos los siguientes:

- Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)
- Campañas de difusión y sensibilización sobre las herramientas con las que se cuenta para prevenir y atender la violencia familiar.
- Convenios de colaboración entre el Instituto Sinaloense de la Mujeres, con el CEPAVIF y con el SIPINNA.
- Programa para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado
- Centros de Justicia para las Mujeres (CJM)

- Centros de Atención a Víctimas de Violencia Familiar

Propósito de los Instrumentos

El propósito de la alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es evitar más crímenes de féminas en cinco municipios de Sinaloa e instrumentarla como un conjunto de acciones emergentes y efectivas para erradicar la violencia feminicida.

El propósito de las campañas de difusión y sensibilización sobre las herramientas con las que se cuenta para prevenir y atender la violencia familiar es dar a conocer la existencia de que en Gobierno del Estado existe una institución que atiende y previene la violencia familiar a través de programas institucionales de manera gratuita, con personal profesional y capacitado para la correcta atención de personas que sufran violencia familiar.

El propósito de los Centros de Justicia para las Mujeres es coadyuvar, entre varias instancias, a crear un entorno seguro para las mujeres y niñas, y para hacer efectiva la protección integral de sus derechos al ser violentadas. El primero operará en la ciudad de Culiacán. Los centros surgen en varias ciudades del país como resultado de la suma de esfuerzos y recursos entre el Gobierno de la República, entidades federativas y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), y tienen el propósito de crear espacios donde se concentren servicios integrales para ayudar a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia, asimismo, para hijas e hijos de las víctimas. El primero ya opera en la ciudad de Culiacán, el cual fue inaugurado el martes 7 de noviembre de 2017.

Retos y desafíos

Los principales retos son: que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y los Centros de Justicia para Mujeres (CJM) funcionen íntegramente, respondiendo de manera satisfactoria a los requerimientos de apoyo y atención de mujeres agredidas.

3.7 Modernización del Transporte Público y Seguridad Vial

El propósito de esta política es crear un entorno seguro y rápido para la movilidad de las personas, salvaguarda y protección de sus vidas, salud y sus bienes. Al impulsar la política pública de movilidad y seguridad vial, se pretende destinar más recursos enfocados a mejorar el servicio concesionado de transporte público de pasajeros, asimismo se procura reducir sustancialmente los accidentes viales, que actualmente colocan a Sinaloa en los primeros lugares con más accidentes en el país.

La modernización del transporte es un proyecto integral e implica brindar un sistema de transporte público donde los usuarios se conecten de una manera eficiente con sus lugares de trabajo y convivencia, por lo que se deberán establecer mediciones de la calidad que permitan tomar decisiones oportunas para alcanzar la mejora esperada. El

objetivo asumido por el gobierno del Estado es dar a los sinaloenses una nueva cara del transporte público de pasajeros.

Retos y Desafíos

El principal reto es enfrentar con decisión el problema que representa el gran número de autobuses urbanos con demasiados años de servicio y que aún circulan por las calles de las principales ciudades, contaminando el aire y generando desorden vial.

El servicio del transporte urbano ha estado por muchos años en medio de la controversia y es calificado como malo por usuarios, y en ocasiones es calificado de pésimo. El reto consiste en adquirir unidades nuevas que no contaminen el aire, así como capacitar debidamente a los choferes que operan los autobuses y el servicio que prestan sea certificado por la autoridad, porque la mayoría circulan por las calles a gran velocidad y en ocasiones drogados, haciéndolo con impunidad y sin el debido respeto a los pasajeros, pues los inspectores los toleran.

Otro desafío es impulsar y poner en funcionamiento un sistema de transporte con equidad en su acceso, eficiencia en la disponibilidad, sustentabilidad, calidad de infraestructura y operación. Con unidades que cumplan las características necesarias para garantizar su eficiencia como funcionalidad con base a gas, en vez de diesel o gasolina, y que algunos cuenten con accesos por ambos lados y cama baja para accesibilidad de discapacitados.

Además, se requiere que en las principales ciudades del estado funcionen centros de verificación vehicular con el fin de prevenir y resolver problemas de contaminación del aire.

Igualmente, es necesario resolver el problema que generan los taxis piratas y que no tienen una concesión y licencia para transportar pasajeros.

Asimismo, habrá que solucionar de manera definitiva el problema que se presenta en la zona turística de Mazatlán, al darse constantes enfrentamientos y disputas entre taxistas por apropiarse del pasaje que proviene de cruceros turísticos.

Otro desafío es reducir las frecuentes anomalías en que incurren choferes de autobuses urbanos de pasajeros, al subir el volumen de aparatos de sonido y provocar molestias entre los usuarios.

Igualmente, habrá que resolver la disputa en el transporte de carga, para que los particulares -que carecen de concesión o permiso- no proporcionen el servicio de manera onerosa al público.

3.7 Instrumentos

Esta política tiene como instrumentos los siguientes:

- Programa de reordenamiento y modernización del servicio de transporte público urbano de pasajeros en las principales ciudades del estado.
- Programa de educación vial y de seguridad para la prevención de accidentes de tránsito.
- Operativos de revisión contra vehículos automotores que dan servicio de transporte público colectivo de pasajeros y de carga en general.

Propósito de los Instrumentos

El propósito del programa de reordenamiento y modernización del servicio de transporte público de pasajeros es ponernos a la par de las principales ciudades del país, mejorando sustancialmente la movilidad urbana y desestimular el uso desmedido de vehículos particulares por calles de por sí congestionadas por el tráfico.

El propósito del programa de educación vial es inculcar entre jóvenes una forma correcta de circular por calles y avenidas a fin de evitar al máximo accidentes viales con hechos de sangre. Los operativos de revisión del transporte público deben ser constantes y permanentes en bien de la seguridad vial.

Retos y desafíos

Contar con los recursos financieros y técnicos para modernizar el transporte público de pasajeros en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

CAPÍTULO 4.

Matriz Estratégica

4.1. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción de cada instrumento.

4.1.1 Instrumentos de la Política de Gobernabilidad Democrática

Ejercer el Gobierno Abierto

Objetivo

Optimizar la comunicación entre el gobierno y ciudadanos para lograr un diálogo dinámico, colaborativo, efectivo y eficaz, donde las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) deben ser utilizadas para establecer la gobernanza y una mayor eficacia del gobierno.

Estrategia

Contribuir a la instrumentación transversal del modelo de Gobierno Abierto (en coordinación con otras instancias gubernamentales). La conversación y diálogo que establecemos con ciudadanos tiene el fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan, tomar decisiones basadas en sus necesidades y preferencias y, facilitar la colaboración entre ciudadanos y servidores públicos en el desarrollo de los servicios que se proporcionan en beneficio de la colectividad. Es primordial entender que el objetivo principal de la Administración Pública es servir a los ciudadanos, poniendo al ciudadano como eje central de la gestión. En esta tarea se deben mezclar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Líneas de acción

- Para la debida instrumentación del modelo de Gobierno Abierto se llevarán a cabo reuniones de trabajo con la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP) y con integrantes de Organizaciones de la Sociedad civil (OSC), que están abocadas al tema. Posteriormente, como resultado de esas reuniones se elaborará un documento rector y un plan de acción.

Marco Jurídico Estatal de Vanguardia, en Concordancia con la Legislación Federal

Objetivo

Convertir a las instituciones y dependencias del Gobierno del estado de Sinaloa en entes más competitivos para facilitar la transformación progresista de la vida económica, social y cultural de Sinaloa. Consolidar un marco jurídico acorde a las necesidades de la sociedad, armonizado con la legislación nacional y federal, y que permita la práctica de una gobernabilidad con apego al Estado de Derecho.

Estrategia

Revisar toda la normatividad vigente y establecer un programa para reordenar el ejercicio de la facultad reglamentaria en el orden local.

Impulsar las reformas necesarias al marco jurídico legal para lograr el fortalecimiento de los Poderes del Estado y su eficaz desempeño en apego al Estado de Derecho.

La actualización legislativa se enfocará primordialmente en aquellos ejes de trabajo más trascendentes del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.

Líneas de acción

- Hacer una exhaustiva revisión del marco jurídico estatal, con el objetivo de actualizar la normatividad, la cual es aproximadamente de 108 leyes y 143 reglamentos estatales;
- Elaborar proyectos de iniciativas de nuevas leyes que coadyuven a las ya existentes en la búsqueda de la consolidación del Estado de Derecho;
- Hacer más eficiente el proceso de elaboración de proyectos de reglamentos.

Convenios de Colaboración con los Distintos Ámbitos de Gobierno para Facilitar la Cooperación y Atención de las Demandas Sociales.

Objetivo

Contribuir al desarrollo democrático y cívico de Sinaloa. Facilitar la coordinación y colaboración entre los diversos ámbitos de gobierno, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, empresarios y grupos de sociedad civil, a través de convenios administrativos que permitan facilitar y agilizar las acciones precisas para atender las diversas demandas y necesidades de la sociedad sinaloense, garantizando el alcance de la gobernabilidad democrática.

Estrategia

Fortalecer la relación con los Poderes del Estado y promover la construcción de acuerdos políticos. Promover la suscripción de convenios de coordinación y colaboración, ya sean a nivel municipal, estatal o federal, que permitan consolidar la cooperación necesaria que facilite la atención requerida en las diferentes demandas sociales, así como medidas preventivas para evitar eventuales conflictos políticos y sociales.

Líneas de acción

- Reuniones de trabajo con titulares de dependencias y sus servidores públicos.
- Ubicar y precisar los asuntos susceptibles de resolverse a través de convenios de coordinación y colaboración;
- Suscribir convenios administrativos necesarios que permitan brindar certeza jurídica en las acciones gubernamentales que conlleven a la resolución de las diversas demandas sociales;
- Supervisar el cumplimiento de las acciones convenidas en los diversos instrumentos jurídicos suscritos;

Reuniones de Trabajo con Líderes de Partidos Políticos, Organizaciones no Gubernamentales, Empresarios, Grupos de la Sociedad Organizada y Legisladores para Fomentar Mecanismos de Cooperación Y Análisis de Diversos Temas.

Objetivo

Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. Fungir como medio vinculatorio entre las diferentes entidades de gobierno, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, empresarios y grupos de la sociedad civil, con el fin de coadyuvar al logro de relaciones que garanticen el alcance de la gobernabilidad democrática.

Estrategia

Fortalecer y promover una relación incluyente, participativa y respetuosa entre el Gobierno del Estado, los ciudadanos y sus organizaciones.

Impulsar una mayor coordinación y corresponsabilidad en protagonistas de la vida política.

Incorporar a dichas reuniones de trabajo a organizaciones no gubernamentales, es decir, a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), empresariales, académicas y de investigación para la detección de hechos que pueden ser causa de acciones de protesta que deterioren el desarrollo económico y la paz social, así como la pérdida de confianza en las instituciones del Estado y su gobierno.

Líneas de acción

- Establecer un calendario de reuniones con líderes de partidos, líderes de grupos parlamentarios y de OSC;
- Coordinar la política para la prevención social de la violencia y la delincuencia con organismos gubernamentales y no gubernamentales, académicos, privados y ciudadanos;
- Análisis preventivo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en las relaciones internas de dichas organizaciones, con el fin de detectar eventuales conflictos y coadyuvar en la búsqueda de soluciones que los eviten;
- Incorporar a Organizaciones de la Sociedad Civil a través de expresiones, estudios, investigaciones, mesas de trabajo, que permitan tener políticas públicas efectivas, eficaces y permanentes para la sociedad sinaloense;
- Instrumentar una política estatal en Derechos Humanos por primera vez en Sinaloa, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil;

4.1.2 Instrumentos de la política de Protección de los derechos de las personas.

Respetar los derechos y garantías de las personas

Objetivo

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a lo establecido en el artículo 1 de la CPEUM.

Estrategia

Crear e implementar políticas públicas de prevención de derechos humanos en la Administración Pública Estatal.

Realizar cursos de capacitación en materia de derechos humanos en la Administración Pública Estatal.

Líneas de acción

- Elaborar el anteproyecto del Plan Estatal de Derechos Humanos como la expresión de la política del gobierno en la materia;
- Desarrollar protocolos y lineamientos de actuación en las dependencias de la administración pública estatal para la prevención de violaciones a derechos humanos;
- Promover el cambio cultural en favor del respeto de los derechos humanos con la participación de la sociedad civil;
- Implementar un modelo de formación integral para servidores públicos en derechos humanos;
- Crear una red estatal de derechos humanos en todas las dependencias de la Administración Pública Estatal;
- Diseñar las bases preparatorias para la prevención en materia de derechos humanos con la participación de la sociedad civil y sus organizaciones;
- Instrumentar herramientas que faciliten a las dependencias y entidades de la Administración Pública en la definición de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos.;
- Establecer mecanismos de coordinación con los diversos actores responsables de la política de estado en materia de derechos humanos. Establecer los mecanismos de coordinación y vinculación con las dependencias y entidades de la Administración Pública, órganos autónomos, los otros poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno, para articular sus acciones, en el marco de sus respectivas competencias, al cumplimiento del Programa Nacional,
- Generar y obtener información sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos en Sinaloa. Promover metodologías que brinden insumos para conocer la situación

de los derechos humanos y estar en posibilidad de generar un diagnóstico integral sobre los avances y dificultades en el goce y ejercicio de los derechos humanos;

- Impulsar la comunicación e intercambio de información con los otros poderes, con los diferentes órdenes de gobierno y con los organismos autónomos involucrados;
- Impulsar reformas jurídicas para la homologación del marco jurídico local con el nacional e internacional, para garantizar el respeto a los derechos humanos;
- Promover la armonización del orden jurídico local con los lineamientos más altos en materia internacional en derechos humanos;
- Organizar y promover la participación de la sociedad civil, las universidades, especialistas en derechos humanos en el proceso de formulación de la agenda legislativa;
- Organizar una mesa de trabajo en coordinación con la Comisión Permanente de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado, el Poder Judicial del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con el fin de realizar el análisis del marco jurídico local y elaborar la agenda legislativa para su homologación con la Constitución Federal y los tratados internacionales.

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa y su reglamento.

Objetivo

Reconocer y proteger a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos.

Estrategia

Garantizar el pleno goce, respeto, protección y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Líneas de acción

- Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;
- Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; y
- Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.

El sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Sinaloa (SIPINNA).**Objetivo**

Establecer políticas, procedimientos, servicios y acciones en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Estrategia

Asegurar un enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en la gestión de la Administración Pública Estatal.

Líneas de acción

- Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional;
- Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional de Protección Integral;
- Garantizar la transversalidad de la perspectiva de sus derechos en la elaboración, o en su caso, institucionales específicos, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal;
- Difundir el marco jurídico estatal, nacional e internacional en la materia;
- Integrar a los sectores público, social y privado en la definición e instrumentación de políticas para su protección;
- Generar los mecanismos necesarios para garantizar su participación directa y efectiva en los procesos de elaboración de programas y políticas locales para la protección integración de sus derechos;
- Establecer en su presupuesto, rubros destinados a su protección, los cuales tendrá una realización progresiva;
- Participar en la elaboración del Programa Nacional;
- Elaborar y ejecutar el Programa Estatal con la participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes;
- Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución del programa Estatal;
- Emitir un informe anual sobre los avances del Programa Estatal y remitirlo al Sistema Nacional de protección Integral;
- Participar en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de sus derechos con la participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes;
- Garantizar su participación en el ejercicio de sus derechos humanos, tomando en consideración las medidas especiales que se requieran;

- Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y privadas con niñas, niños y adolescentes;
- Administrar el sistema estatal de información y coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel nacional;
- Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento y respeto de sus derechos humanos, principalmente con aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos;
- Celebrar convenios de coordinación en la materia, y auxiliar a la Procuraduría de Protección en las medidas urgentes de protección que esta determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones.

Alianza por una Niñez sin Violencia, con apoyo de UNICEF, organismos internacionales, sector empresarial, sociedad civil y academia.

Objetivo

Garantizar medidas de protección especial y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Estrategia

Impulsar la sensibilización, capacitación, formación y profesionalización del servicio público sobre el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Líneas de acción

- Identificar necesidades de formación en derechos de niñez y adolescencia, considerando las percepciones, requerimientos y capacidades de servidores/as públicos/as;
- Implementar un modelo integral de formación y profesionalización del servicio público, que incluya los principios, derechos de la infancia y obligaciones del Estado;
- Promover que los tres órdenes de gobierno difundan y sensibilicen al servicio público sobre los derechos de niñez y adolescencia;
- Crear incentivos institucionales para fomentar la formación en el respeto, promoción y defensa de los derechos de niñez y adolescencia;
- Incluir contenidos de derechos de niñez y adolescencia con perspectiva intercultural y de género en el Servicio Profesional de Carrera de la administración pública estatal;
- Capacitar al servicio público sobre su responsabilidad de garantizar una vida libre de violencia a niñas, niños y adolescentes. Líneas de acción derivadas de la consulta a niñas, niños y adolescentes;

- Sensibilizar sobre el desarrollo evolutivo de niñas, niños y adolescentes, particularmente primera infancia, a personas encargadas de su cuidado;
- Desarrollar herramientas y habilidades psicosociales en niñas, niños y adolescentes, que les permitan conocer, ejercer y defender sus derechos humanos.

Consulta de niñas, niños y adolescentes con el fin de allegarse datos sobre los ejes rectores de la ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como son: supervivencia, desarrollo, participación y protección.

Objetivo

Fortalecer y ampliar los sistemas de salud, seguridad, educación, y desarrollo social, para atender eficaz y efectivamente a niñas, niños y adolescentes.

Estrategia

Desarrollar e Instituir mecanismos para tener un sistema de información que nos indique cuál es la problemática que se presenta en nuestro estado.

Líneas de acción

- Ampliar las coberturas de protección de la salud a grupos vulnerables;
- Derivado de las necesidades de educación es importante mejorar y fortalecer el Sistema Educativo;
- Mejorar las condiciones de hacinamiento, agua y drenaje de las comunidades que se encuentran en pobreza y pobreza extrema;
- Grado de marginación de las comunidades en nuestra entidad;
- Disminución del trabajo infantil en campos agrícolas;
- Disminución de embarazos en adolescentes;
- Disminuir lesiones en niñas, niños y adolescentes;
- Crear entornos seguros.

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA)

Objetivo

Coadyuvar en los mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes en Sinaloa, así como reducir el número de dichos embarazos con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos.

Estrategia

Cumplir con los compromisos del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente, promoviendo acciones que permitan a las y los jóvenes del estado tomar decisiones libres,

responsables e informadas sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo.

Líneas de acción

- Realizar sesiones periódicas el Grupo Institucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes con el fin de establecer los mecanismos de articulación con las dependencias, así como las gestiones que permitan destrabar obstáculos y mejorar el rendimiento local;
- Realizar acciones de sensibilización dirigidas a jóvenes de los 18 municipios del Estado de Sinaloa;
- Promover el uso correcto de métodos anticonceptivos de prevención de embarazo y prevención de infecciones de transmisión sexual;
- Impartir talleres sobre derechos sexuales y reproductivos a adolescentes;
- Impartir talleres sobre prevención de la violencia de género a adolescentes;
- Implementar espacios recreativos para la juventud los cuales consistan en orientar y concientizar sobre el embarazo no planeado e infecciones de transmisión sexual, así como en el fortalecimiento de su proyecto de vida por medio de diferentes actividades en las cuales desarrollen sus destrezas y habilidades;
- Estar en contacto a través de las redes sociales para desarrollar una mayor participación y presencia a nivel estatal por medio de mensajes breves con información relevante, estratégica y de interés público.

Programa para la erradicación del Trabajo Infantil en Sinaloa

Objetivo

Erradicar el trabajo de niñas y niños en los campos agrícolas de Sinaloa. Asimismo, en instalaciones fabriles y comerciales, tanto en el medio rural como urbano. Especialmente en aquellos donde son explotados los menores de edad, en contravención a lo que dispone la CPEUM y tratados internacionales de los que México es parte.

El sector agrícola es uno de los tres más peligrosos para trabajar a cualquier edad, junto con la industria de la construcción y minería. En México, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2012, enlista una serie de labores consideradas peligrosas, estableciendo las labores agrícolas como peligrosas para los menores de 18 años.

Estrategia

Establecer una coordinación eficaz y permanente con las siguientes dependencias involucradas: SIPINNA, DIF Estatal y oficinas municipales.

Realizar actividades transversales en labores de promoción y difusión de los beneficios del programa, así como para la obtención de recursos.

Sensibilizar en los medios de comunicación y redes sociales sobre la no tolerancia al trabajo infantil.

Promoción de una campaña permanente e intensa entre cámaras empresariales y sus agremiados en contra del trabajo infantil. Comprometiéndolos, además, a pegar en las fachadas o entradas de los negocios calcomanías con las leyendas "Espacio Libre de Trabajo Infantil" "No al Trabajo Infantil".

Líneas de acción

- Adecuar y aplicar localmente el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC, por sus siglas en inglés);
- Reforzar con actividades la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio), con la alianza de colaboración con otras secretarías, dependencias y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) denominada "12 a 12" (del 12 de junio al 12 de junio del siguiente año). Es decir, deberán realizarse actividades alusivas a esa fecha cada 12 de junio;
- Implementar el uso de playera roja los días 12 de cada mes con la imagen en el pecho de las leyendas "Espacio Libre de Trabajo Infantil" y "No al Trabajo Infantil";
- Elaboración y pega masiva de calcomanías alusivas con la leyenda "No al Trabajo Infantil";
- Incentivar la certificación en campos agrícolas y otros centros de trabajo. Los Distintivos MEXSTI (México Sin Trabajo Infantil) y DEALTI (Distintivo Empresa Libre de Trabajo Infantil), las cuales son herramientas útiles para certificar las acciones tendientes a erradicar este problema social;
- Retirar de los cruceros de calles y de espacios públicos a niñas, niños y adolescentes pidiendo dinero a transeúntes y conductores de vehículos;
- Instalar un número telefónico 1-800 para la denuncia ciudadana contra el trabajo infantil.

Programa "Conoce tus prestaciones laborales"

Objetivo

Fortalecer la política laboral para que los sinaloenses tengan mejores empleos y salarios, con prestaciones y derechos plenos, salvaguardando el acceso a una justicia laboral.

Estrategia

Acercar a los ciudadanos la justicia laboral y conozcan sus derechos laborales y de seguridad social, sin necesidad de desplazarse a una oficina de representación.

Promover una política empresarial para la implementación de buenas prácticas laborales en los centros de trabajo.

Líneas de acción

- Informar y Sensibilizar al empresariado local acerca del quehacer institucional en materia de inspección;
- Implementar la Procuraduría del Trabajo Móvil y recorrer el territorio del Estado para informar a los trabajadores de sus derechos laborales;
- Promover la certificación en las empresas por sus buenas prácticas laborales.

4.1.3 Instrumentos de la política para el fortalecimiento de la certeza jurídica.

Instituto de la Defensoría Pública

Objetivo

Garantizar el acceso a los servicios jurídicos gratuitos que otorga la Institución

Estrategia

Asegurar la cobertura oportuna de los servicios jurídicos que requiere la sociedad

Líneas de acción

- Brindar certeza jurídica que demanda la sociedad en materias Penal, Civil, Familiar, Administrativa y Justicia para Adolescentes;
- Programa “La defensa en tu comunidad”, llevar los servicios que presta el Instituto a las comunidades rurales, principalmente, los sábados.

Foros, seminarios y cursos para fortalecer la defensoría pública en el Instituto

Objetivo

Hacer más eficiente y profesional la función del personal que otorga el servicio de defensoría pública.

Estrategia

Implementar un programa institucional de capacitación

Líneas de acción

- Intensificar las acciones de capacitación a servidores públicos mediante la creación e implementación de un programa institucional de capacitación.

Instrumentos en materia agraria

Objetivo

Mantener informados a los núcleos agrarios acerca de las acciones y programas gubernamentales que les permita elevar el nivel de vida.

Estrategia

Acceso mediante internet a cuatro módulos: módulo de consulta SIMCR, donde los usuarios podrán consultar en tiempo real el estatus de solicitud de trámite que estén registrados en el Catálogo Nacional de Trámites, el boletín registral, el listado de ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados. Estadística Agraria, proporciona información sobre la propiedad social. Tiene la finalidad de aportar elementos que apoyen las tareas de investigadores, estudiantes, instituciones y población interesada en impulsar programas, estrategias y acciones que beneficien a hombres y mujeres del campo. PHINA, primera fuente de información a consultar en el análisis de temas agrarios tanto en el interior del Sector Agrario como fuera de él, ya sea para la integración y elaboración de proyectos académicos, sociales, territoriales y urbanos o simplemente para conocer la historia agraria de un pueblo. Sistema de Información Geoespacial (SIG), sistema de consulta a nivel nacional que contiene información catastral y registral de la propiedad social en México, a través de un mecanismo de georreferenciación que permite visualizar capas de información en una computadora electrónica.

Líneas de acción

- Asistir permanentemente a las asambleas que celebran los núcleos agrarios a efecto de transmitir información sobre los programas y acciones que el Gobierno del Estado implementa en su beneficio;
- Capacitar y mantener actualizados e informados a los núcleos agrarios de los avances de los programas y acciones que implementa el Gobierno del Estado en el sector;
- Aclarar dudas y orientar a los ciudadanos sobre las acciones y programas de Gobierno del Estado;
- Recabar el impacto real que causan los programas y acciones de Gobierno del Estado en la población objetivo;
- Ser interlocutor entre los núcleos agrarios y dependencias de Gobierno, así como entre las dependencias de la administración pública Federal y municipal;
- Abatir el rezago agrario dando certeza jurídica a los ciudadanos del sector campesino;
- Promover la Instalación del Consejo Estatal Agrario.

Programa actualizado de Registro local de aviso de testamento, Implementar un programa estatal de rezago y actualización de inspecciones generales, Implementar un programa de digitalización de bases de datos de los libros notariales.

Objetivo

Programa de Digitalización de Base de datos de los Protocolos, apéndices e índices, que se encuentran resguardados en la Dirección del Archivo General de Notarías del Estado de Sinaloa.

Espacio suficiente para el resguardo y custodia de los Libros de los Notarios Públicos en el Estado de Sinaloa.

Tener actualizado la base de datos del RENAT (Registro Nacional de Testamentos).

Realizar las Inspecciones Generales a las notarías públicas una vez al año como lo marca la Ley del Notariado Vigente en el Estado.

Atender oportunamente las quejas presentadas por los ciudadanos en contra de los notarios públicos en el Estado.

Estrategia

Certeza Jurídica en los actos realizados por los notarios públicos.

Modernización del Sistema de Archivo General de Notarías de Sinaloa.

Seguridad Jurídica Notarial.

Prevención de destrucción y deterioro de los Libros existente en custodia.

Contribuir a la seguridad de los Libros mediante el mecanismo de digitalización para no trasladarlo de un lugar a otro poniendo el riesgo los Libros.

Conservación de los libros notariales.

Permite contar con la seguridad y certeza jurídica que la información otorgada tenga todos los requisitos de validez evitando el mal uso de los instrumentos públicos llevando un control de ellos.

Rapidez y seguridad de respuesta en tiempo y forma

Beneficio al ciudadano al evitar los traslados a los diferentes estados

Verificación anual a los Notarios Públicos para el debido cumplimiento de los lineamientos de acuerdo con la Ley que los rige.

Disminuir el rezago de revisión en la Zona Sur en el Estado de Sinaloa mediante las Inspecciones Generales correspondientes.

Seguridad Jurídica de los Actos Notariales

Seguimiento legal y oportuno a las Quejas presentadas por los ciudadanos

Notificaciones personales oportunas como lo marca la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa.

Seguridad Jurídica de los Actos Notariales

Líneas de Acción

Contratación de una empresa que realice el escaneo de los Libros, Protocolos e Índices que se encuentren bajo el resguardo del Archivo;

Equipos de Plataforma Digital con los puertos necesarios para la captura;

Expansión del área de archivo que tenemos actualmente;

La coordinación constante con la Secretaria de Gobernación mediante el programa establecido RENAT;

Partida especial para llevar a cabo dichas inspecciones y notificaciones a las diversas notarías públicas en el Estado de Sinaloa;

Inspecciones Especiales acatando lo dispuesto en la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, en cuanto al seguimiento administrativo que se lleva a cabo para resolver la situación que está presentando el ciudadano ante la inconformidad que tiene con el Notario Público que se desprende dicha Queja, mediante la inspección y notificación oportuna, mediante los recursos proporcionados por la unidad responsable.

El cambio de paradigma y proyecto de traslado de la jurisdicción y competencia de conflictos laborales al Poder Judicial del Estado

Objetivo

Elaborar proyectos legislativos de armonización con la reforma laboral de la CPEUM para el traslado de la jurisdicción y competencia al Poder judicial del Estado. Estos proyectos incluyen adecuaciones a la Constitución Política local, adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, asimismo una nueva ley: Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral.

Estrategia

En reuniones de trabajo, definir cómo se implementará este traslado de jurisdicción y competencia, así como los órganos jurisdiccionales encargados de impartir justicia laboral (juzgados de primera instancia del ramo laboral). Igualmente, establecer cuál será la estructura organizativa del Centro de Conciliación Especializado en Materia Laboral.

Fomentar la cultura de la legalidad, a fin de erradicar la problemática que atañe al cumplimiento de los derechos laborales, garantizando la estabilidad laboral de los propios trabajadores de la Junta local de Conciliación y Arbitraje.

Líneas de acción

- Elaborar un anteproyecto de traslado de jurisdicción y competencia al Poder judicial del Estado;
- Coadyuvar con la certeza jurídica, fomentando la conciliación en los conflictos laborales.

Comisión de Coordinación Interinstitucional Estatal para el Seguimiento, Operación, Consolidación y Evaluación de Proyecto Baluarte–Presidio.

Objetivo

Conforme al Decreto de creación de la Comisión, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, Núm. 31 de 8 de marzo de 2017, darle seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades y recursos inherentes a la consolidación del Proyecto que conlleva la construcción de las presas Picachos y Santa María y sus correspondientes distritos de riego y obras complementarias, plasmados en los convenios de coordinación, así como para la atención de la problemática surgida a partir de la ejecución de las acciones realizadas dentro de los procesos de regularización de la tenencia de la tierra propiedad de los diversos núcleos agrarios, zonas federales, terrenos propiedad de la Nación, posesiones y propiedades privadas, que se ubican en el área de su confluencia.

Estrategia

Para la realización de sus fines, el Secretario Ejecutivo de la Comisión coordinará las acciones que realicen las dependencias y entidades del Gobierno del Estado en el Proyecto, manteniendo estrecha coordinación con las dependencias del Gobierno Federal y los gobiernos municipales participantes.

Líneas de acción

- Emitir reglas de organización y funcionamiento, plan de trabajo y calendario de sesiones ordinarias de la Comisión;
- Atender prioridades institucionales comprometidas en los convenios de coordinación;
- Dar seguimiento a las aportaciones y recursos asignados para la consolidación del Proyecto;
- Evaluar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios de coordinación, así como supervisar la calidad de las obras y servicios objeto del Proyecto.

4.1.4 Instrumentos de la política de Normatividad e Información Registral

Modernización Integral del Registro Civil

Objetivo

Brindar al ciudadano la información precisa, oportuna, apegada a derecho, de manera presencial y medios electrónicos a través de un archivo documental innovador y competitivo.

Estrategia

Implementar herramientas tecnológicas de conservación y buen uso de archivo documental. Pugnar por la aprobación de una ley que marque los lineamientos con los que se debe conducir un Registro Civil, así como un reglamento actualizado.

Líneas de acción

- Modernizar las oficinas de los oficiales del Registro Civil, así como de los procesos con apoyo de la tecnología de última generación;
- Hacer más eficientes los servicios de Registro Civil con más personal capacitado y con el uso de herramientas tecnológicas modernas.

Programa de inspecciones y operativos de vigilancia de restaurantes, bares, cantinas y centros nocturnos.

Objetivo

Proporcionar mayor seguridad a las personas que asistan a esos lugares recreativos y de diversión con venta de bebidas alcohólicas, con apoyo de policías y otras dependencias, con el objeto de que no se cometan hechos delictivos dentro y fuera de esos establecimientos, así como evitar menores de edad consuman bebidas alcohólicas.

Estrategia

Concertar con propietarios de esos establecimientos con venta de bebidas alcohólicas la instalación de videocámaras y arcos detectores de armas de fuego en los accesos de entrada y en estacionamientos, con el fin de inhibir hechos delictivos.

Líneas de acción

- En cumplimiento de la normatividad, intensificar y reforzar los operativos de inspección y vigilancia de restaurantes, bares, cantinas y centros nocturnos, con apoyo de policías locales y fuerzas de seguridad federales;
- En caso de incumplimiento a las normas, clausurar de manera temporal o definitiva esos establecimientos.

Foros y pláticas con alumnos de educación media superior y superior de escuelas públicas y privadas.**Objetivo**

Ilustrar a grupos de alumnos acerca de las acechanzas y riesgos a la salud que ocasionan las adicciones en los jóvenes, concretamente el consumo excesivo de alcohol.

Estrategia

Concertar con algunas escuelas y colegios un programa de conferencias y charlas acerca de los peligros que ocasionan a la salud integral el consumo de alcohol.

Líneas de acción

- Ofrecer conferencias y pláticas dirigidas a grupos de estudiantes del nivel educativo medio superior y superior;

Convenio de Coordinación entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, y el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, en materia del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.**Objetivo**

Integrar el nuevo Sistema de Gestión Registral versión 2.0, para poder inscribir y consultar los actos de comercio a nivel Estatal.

Estrategia

Migrar la información que se tiene en el SIGER 1.0 a la nueva versión 2.0.

Líneas de acción

- Capacitar a los servidores públicos del Registro Público de Comercio;
- Capacitar a los notarios públicos para que realicen la inscripción de los actos de comercio a través del SIGER 2.0 que pone a disposición la Secretaría de Economía.

Ley del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria**Objetivo**

Contribuir a dar certeza jurídica al ciudadano, mediante el funcionamiento de la mejora regulatoria, que abarque la revisión del marco jurídico, simplificación administrativa e identificar el impacto social de los trámites y servicios.

Estrategia

Revisión del marco normativo para promover y realizar las reformas correspondientes, así como expedir el instrumento jurídico para efectuar el estudio de todos los trámites y servicios, requisitos y plazos correspondientes.

Líneas de acción

- Fortalecer la estructura administrativa y los servicios bajo el enfoque de la mejora regulatoria;
- Propiciar un marco normativo que corresponda a la realidad del estado y promueva su desarrollo;
- Incrementar la eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos.

Plan Estatal de Simplificación Administrativa y Regulatoria (PESAR)

Objetivo

Otorgar al ciudadano trámites y servicios ágiles mediante la reducción de tiempos y requisitos buscando la simplificación administrativa.

Estrategia

Modificar el marco normativo e implementar herramientas tecnológicas avanzadas

Líneas de acción

- Publicar los trámites y servicios prestados en las diversas áreas de manera clara y entendible;
- Simplificación de los requisitos;
- Trámites en Línea.

4.1.5 Instrumentos para el Fomento a la cultura de la legalidad

Ley de Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad del Estado de Sinaloa.

Objetivo

Difundir y dar a conocer el contenido de la Ley, principalmente entre Colegios de abogados, asociaciones cívicas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), instituciones educativas.

Estrategia

Organizar reuniones de trabajo con maestros y colegios de profesionistas, así como cámaras empresariales.

Se busca fortalecer el tejido social y prevenir comportamientos violentos. Que los ciudadanos sinaloenses, de preferencia los jóvenes, se apeguen a la legalidad y se convenzan de su utilidad para vivir junto con otras personas con necesidades y derechos similares, viviendo en armonía y siendo tolerantes con la diversidad que nos rodea y que es digna de respetar, asimismo, se pretende que desarrollen una actitud crítica frente al desempeño de sus representantes en la vida pública y sepan emplear los mecanismos que la propia ley les otorga, para hacer cambios que contribuyan al mejoramiento social.

Líneas de acción

- Que los jóvenes participantes construyan y reflexionen sobre el concepto de cultura de la legalidad, sobre las características que nos hacen humanos e individuos, así como el sentido e importancia de las normas y los valores en la convivencia social;
- Que los jóvenes entiendan en qué consiste el Estado de Derecho, cómo reconocerlo y por qué es importante fomentarlo y respetarlo. Y se den cuenta de que frente a normas, leyes o a una impartición de justicia incorrectos, ellos mismos pueden propiciar un cambio. El enfoque principal será cómo y por qué es necesario mantener una cultura de legalidad.

Programas de enseñanza y difusión de los valores cívicos en escuelas de educación básica y media del estado y para la población en general.

Objetivo

Proporcionar a jóvenes y niños en edad escolar, en estrecha colaboración con autoridades e instituciones educativas, elementos que favorezcan la construcción de conocimientos, la adquisición de habilidades y el desarrollo de actitudes que propicien su participación voluntaria en la promoción de una cultura de la legalidad en Sinaloa.

Estrategia

Con apoyo transversal de autoridades e instituciones educativas, de manera específica se busca que los participantes comprendan y expliquen por qué la sociedad necesita desarrollar y mantener una cultura de la legalidad para prevenir la violencia y combatir la corrupción e impunidad en Sinaloa.

Reconozcan aquellas conductas que dañan su integridad física, mental y emocional, y reflexionen sobre el ejercicio responsable de su libertad.

Entiendan que la delincuencia y la corrupción, acompañada de la narco-cultura, dañan la convivencia social y a las instituciones del Estado de Derecho Democrático en Sinaloa.

Líneas de acción

- Ciclo de conferencias, talleres y charlas con educadores y protagonistas de la vida pública de Sinaloa.

4.1.6 Instrumentos de la política en materia de prevención y atención de la violencia familiar.

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)

Objetivo

Según la CNDH, este es un mecanismo que visibiliza la violencia de género y omisiones de gobiernos y órganos de justicia para asegurar y garantizar a niñas y mujeres el derecho a una vida libre de violencia. Es un procedimiento que enfoca esfuerzos en el diseño, ejecución y evaluación de estrategias y acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

A través de este mecanismo se busca garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, disminuir la violencia contra ellas y erradicar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.

Objetivo de CEPAVIF: garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes del Estado de Sinaloa, una vida libre de violencia, el debido acceso a la justicia, respeto a sus derechos humanos y la reparación integral del daño, mediante la implementación de acciones específicas, coordinadas y articuladas entre las partes involucradas para el debido cumplimiento de las propuestas y conclusiones emitidas por el Grupo de Trabajo conformado para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Sinaloa, así como a las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación establecidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para los Municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato.

Estrategia

El Gobierno del estado de Sinaloa adoptará las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia y todas aquellas que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el derecho a vivir una vida libre de violencia.

Para lograr resultados positivos, es preciso establecer un marco mínimo de actuación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir los ataques y agresiones contra la población femenina.

Bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, operarán células de reacción inmediata para que, en caso de que una mujer sea violentada, reciba atención inmediata.

Sensibilizar a los 18 presidentes municipales acerca del impacto y consecuencias de la Alerta de Violencia de Género.

Coadyuvar con los otros órdenes de gobierno e instituciones para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.

Fortalecer programas destinados a erradicar la violencia familiar.

Coordinar las instancias encargadas de operar medidas de protección especial y restitución de derechos de mujeres y niñas.

Vigilar y articular mecanismos de protección especial para proteger y restituir los derechos violentados de mujeres y niñas.

Publicación de la naturaleza y alcance de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de manera clara y sencilla para la población en medios de comunicación y en lugares estratégicos.

Líneas de acción

- Publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los alcances de la Alerta Violencia de Género con información accesible para la población, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción V, y 26, fracción III, inciso d) de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia;
- Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la implementación de medidas de seguridad específica en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres. Entre otras acciones, se solicita: reforzar los patrullajes preventivos e instalar alumbrado público y mejorar el existente en las principales ciudades del estado;
- Implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública como la instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos. Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea efectuada mayoritariamente por mujeres;
- Incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público como el rastreo por georreferenciación;
- Difundir la información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia y crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento;
- Crear una aplicación para teléfonos inteligentes que permita a las mujeres víctimas de violencia el acceso inmediato a los servicios de atención y seguridad;

- Crear módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo en los 5 municipios que comprende la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento deberá contemplar asistencia multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes;
- Empezar acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia: particularmente, se brindará protección inmediata y pertinente en caso de violencia familiar. Para ello, se deberá generar mecanismos efectivos de implantación y seguimiento a las órdenes de protección -como pueden ser el uso de brazaletes electrónicos en los agresores, para aquellos casos en los que las circunstancias particulares lo ameritan;
- Crear y/o fortalecer las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como células municipales de reacción inmediata. Estas agrupaciones deberán integrarse multidisciplinariamente, actuar coordinadamente entre ellas y otros actores estratégicos, y su personal deberá estar capacitado para ejecutar sus acciones con perspectiva de género;
- Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, de acuerdo con la definición que se hace en la Ley General de Acceso, que busca identificar las problemáticas particulares de cada región, con la finalidad de generar acciones específicas de prevención de violencia contra las mujeres en el estado de Sinaloa en coordinación con CONAVIM;
- Integrar y actualizar adecuadamente el Banco estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Con base en lo establecido en el artículo 23, frac. III de la Ley General de Acceso, esta medida deberá permitir en un plazo razonable monitorear las tendencias de la violencia contra las mujeres, realizar estadísticas, diagnósticos, análisis y reportes periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de la violencia y, en consecuencia, instrumentar políticas públicas efectivas. Para ello, se sugiere crear un semáforo de violencia feminicida que permita diseñar y ejecutar planes de atención preventiva adecuados al comportamiento de la incidencia delictiva. La información vertida en este banco deberá ser reportada también al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM);
- Establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres para los servidores públicos del Gobierno del estado de Sinaloa, que prevea un adecuado mecanismo de evaluación de resultados. La estrategia deberá ser permanente, continua, obligatoria y focalizada particularmente a las personas vinculadas a los servicios de salud y atención de víctimas, así como a los de procuración y

administración de justicia, con el apoyo de instituciones y personas especializadas a la materia. Se sugiere que la capacitación prevea una evaluación de las condiciones de vida de las y los servidores públicos para eliminar la violencia de género desde su entorno primario. Esta medida deberá contemplar el fortalecimiento de las herramientas teórico-prácticas de jueces y juezas en materia de perspectiva de género y derechos humanos;

- Establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo público y privado. Para ello, se deberá diseñar una estrategia de educación en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género que busca la transformación de patrones culturales y la prevención de violencia mediante la identificación, abstención y denuncia;
- También se deberá capacitar con herramientas teóricas y prácticas al personal de los centros educativos públicos y privados, para detectar oportunamente casos de niñas o adolescentes que se encuentren en una situación de violencia y denunciarlos ante las instancias correspondientes;
- General campañas permanentes, disuasivas, reeducativas, expansivas e integrales, encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel estatal, municipal y comunitaria, con el fin de dar de conocer a la sociedad en general los derechos de las niñas y mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia, así como los servicios institucionales;
- Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia basados en la perspectiva de género, tomando como base el modelo de CONAVIM;
- Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para atención y prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público;
- Generar una estrategia de empoderamiento económico para las mujeres sinaloenses víctimas de violencia;
- Con base en el artículo 26 frac. I de la Ley General de Acceso, se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y víctimas de feminicidio. La efectividad en el cumplimiento de esta medida se encuentra plenamente relacionada al fortalecimiento de la Fiscalía General –particularmente de las agencias especializadas en investigación y atención de los delitos de feminicidio y homicidio dolosos de mujeres. Así como la especializada en delitos sexuales y de violencia familiar y de la desaparición forzada de las personas no localizadas, a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadena de custodia y servicios periciales con base en estándares internacionales, así como la efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos. Para ello, se deberá crear una unidad de análisis y evaluación de las labores de investigación y proceso de los delitos de género que se denuncien. Asimismo, se

sugiere crear una unidad de contexto para la investigación de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y sicosociales, permite identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad;

- Es indispensable llevar a cabo un mapeo de los delitos cometidos en contra de mujeres, particularmente, de los feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres y sus tentativas, con la finalidad de generar políticas públicas focalizadas para la atención y erradicación de la violencia contra las mujeres;
- Conformar un grupo-unidad especializada encargada exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los últimos 8 años. Entre las funciones que deberá ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos;
- Conformar un grupo-unidad especializada –en la que se involucren las autoridades de procuración e impartición de justicia –encargada de emprender las acciones necesarias para emitir las sanciones correspondientes respecto de los feminicidios, homicidios dolosos y delitos sexuales cometidos en contra de mujeres;
- Con base en lo establecido en el artículo 26, frac. Inciso b) de la Ley General de Acceso, se deberán establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. El estado de Sinaloa deberá dar continuidad a los procesos iniciados previamente por posibles omisiones de servidores públicos en la integración de carpetas de investigación;
- Conformar un grupo de trabajo que revise y analice exhaustivamente, la legislación estatal existente relacionada con los derechos de las mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos. Consecuentemente, se deberá establecer una agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar dichas disposiciones;
- De conformidad con el artículo 26 de la Ley General de Acceso, se deberá realizar un plan individualizado de reparación integral del daño respecto a los casos de homicidios de mujeres y/o feminicidios. Para estos efectos, se deberán considerar los estándares básicos en materia de reparación del daño, reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como lo establecido en la Ley General de Víctimas y la Ley de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa;

- Determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el estado de Sinaloa. Para la definición de la reparación simbólica se tomará en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y los familiares de las víctimas.

Campañas de difusión y sensibilización sobre las herramientas con las que se cuenta para prevenir y atender la violencia familiar.

Objetivo

Intensificar la difusión de los servicios integrales y preventivos a través de las diferentes instituciones que integran el Consejo, que nos permita problematizar la violencia institucional y reflexionar sobre cómo influir en su erradicación desde la promoción del buen nuevas formas de relación.

Estrategia

Campaña publicitaria para dar a conocer la existencia de que en Gobierno del Estado existe una institución que atiende y previene la violencia familiar a través de programas institucionales de manera gratuita, con personal profesional y capacitado para la correcta atención de personas que sufran violencia familiar.

Líneas de acción

Acciones estratégicas de prevención de la violencia familiar:

- Programa de Atención;
- Programa de Prevención;
- Programa de Línea de Emergencia;
- Programa de Albergue;
- Programa de vinculación interinstitucional;

Convenio de colaboración entre el Instituto Sinaloense de la Mujeres (ISMUJERES), el CEPAVIF y SIPINNA.

Objetivo

Coadyuvar y articular las bases y mecanismos de colaboración entre el Instituto Sinaloense de las Mujeres, el CEPAVIF y SIPINNA.

Estrategia

Acordar una agenda de trabajo común, que permita concertar acciones para el cumplimiento del sistema de Protección Integral.

Líneas de acción

- Desarrollar proyectos de colaboración interinstitucional;
- Garantizar la transversalidad de la perspectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
- Participar conjuntamente en campañas preventivas y de sensibilización dirigidas a la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
- Ofrecer servicios de orientación psicológica;
- Ofrecer servicios de orientación jurídica.

Programa para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado**Objetivo**

Difundir información sobre formas en que se manifiesta la violencia familiar; así como brindar a personas receptoras de este tipo de violencia servicios multidisciplinarios institucionales que les faciliten afrontar los malos tratos y salir de esa situación, para que generen estrategias asertivas y empoderamiento.

Estrategia

Orientar y dar acompañamiento a las personas que acuden a CEPAVIF, SIPINNA o ISMUJERES, en temas de gestión social, psicológicos y jurídicos.

Líneas de acción

- Establecer acciones para sensibilizar a los medios de comunicación propiciando un cambio cultural de género en la población;
- Elaborar y difundir campañas de sensibilización social para la prevención de la violencia familiar;
- Elaborar y difundir lineamientos para la implementación de campañas de sensibilización social para la prevención de la violencia familiar y contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, a nivel estatal y municipal;
- Desarrollar campañas y acciones para difundir entre las familias las consecuencias del maltrato y la violencia familiar;
- Gestión Social: activación de redes apoyo, gestiones de becas, despensas, etc.;
- Atención psicológica: proceso de terapias de contención, individual y grupal, empoderamiento de las usuarias;
- Asesoría jurídica: orientación sobre acciones que pueden realizar, acompañamiento y traslado a juzgados.

Centros de Justicia para las Mujeres (CJM)

Objetivo

Proporcionar servicios integrales a las mujeres. De acuerdo al decreto de su creación, su objeto es mejorar y lograr un real, pronto y expedito acceso a la justicia para las mujeres, fomentar el incremento de denuncias y reducir la impunidad, evitar la revictimización de las mujeres, combatiendo los delitos de violencia hacia las mujeres en todas sus modalidades y brindando de manera interdisciplinaria, secuencial, interinstitucional y especializada, servicios con unidad de criterio y perspectiva de género en un ambiente agradable, seguro y confiable (artículo 3 del Decreto que crea el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Sinaloa, P.O. “El Estado de Sinaloa”, Núm. 150, 13 de diciembre de 2013).

Los Centros brindarán a mujeres atención especializada de agentes del Ministerio Público; acceso a servicios periciales; atención médica; tramitación de órdenes de protección, custodia y pensión alimenticia, a través de juzgados en materia de lo familiar; atención psicológica; acceso a refugio y albergue temporal; asesoría y representación jurídica; bolsa de trabajo; guardería y servicios educativos para niñas y niños; capacitación; albergue para víctimas, y celda para agresores.

Estrategia

Coadyuvar a la institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública estatal.

Asignar personal de CEPAVIF al CJM, concretamente especialistas en servicios de atención en violencia familiar.

Líneas de acción

- Elaboración de un manual de procedimientos para el personal de la administración pública del Centro de Justicia para las Mujeres;
- Diseñar e implementar el Modelo de atención a las Mujeres que acudan al Centro de Justicia;
- Elaborar el reglamento interno del Centro de Justicia;
- Elaborar el proyecto de presupuesto y el Programa Operativo Anual;
- Fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres y de erradicación de la discriminación de género;
- Promover la participación y colaboración de organismos públicos y privados que son afines al Centro de Justicia;
- Dar seguimiento y evaluar el desempeño del personal asignado al CJM.

Centros de Atención a Víctimas de Violencia Familiar

Objetivo

Resguardar a mujeres víctimas del delito de violencia familiar de riesgo alto y extremo, sus hijas e hijos menores de 12 años que carecen de un lugar seguro donde puedan resguardarse de manera temporal para protegerse de agresiones relacionadas con el mismo delito que puedan generarles daños físicos o psicológicos irreversibles e incluso la pérdida de la vida.

Estrategia

Albergar hasta por tres meses a mujeres, hijas e hijos menores de 12 años víctimas de violencia familiar.

Líneas de acción

- Proporcionar atención integral a personas víctimas de violencia familiar;
- Establecer una coordinación institucional para el fortalecimiento de acciones de prevención y atención de la violencia familiar;
- Capacitar en temas de prevención y atención de la violencia familiar al funcionariado y sociedad civil;
- Promover programas de intervención temprana para prevenir la violencia familiar;
- Brindar el servicio de albergue y servicios multidisciplinarios de gestión social, psicológicos, jurídicos, médicos y capacitación para el trabajo, a mujeres en situación de violencia.

4.1.7 Instrumentos para la política de Modernización del transporte público y seguridad vial.

Programa de reordenamiento y modernización del transporte público en las principales ciudades del estado.

Objetivo

Incrementar el uso del transporte público garantizando un servicio eficaz, confiable y de calidad.

Estrategia

Desarrollar proyectos de ingeniería de tránsito y transporte con opiniones técnicas de expertos de la sociedad civil.

Líneas de acción

- Realizar una reingeniería de rutas impulsando la interconectividad entre rutas y/o modalidades del transporte público;

- Impulsar el uso de tecnología en todas las unidades del transporte público para garantizar seguridad, calidad e innovación en el servicio;

-

Programa de educación vial y de seguridad para la prevención de accidentes de tránsito

Objetivo

Reducción de accidentes viales en las principales ciudades del estado

Estrategia

Promover acciones orientadas a la capacitación de promotores ciudadanos para la participación social e impulsar la educación vial en niños y jóvenes.

Líneas de acción

- Operación de programas estatales de seguridad vial;
- Realizar acciones de difusión y de mejora para lograr la participación social en torno a la problemática de la seguridad y educación vial;
- Crear la Comisión Mixta de Seguridad y Educación Vial.

Operativos de revisión contra vehículos que dan servicio de transporte público colectivo de pasajeros y de carga sin autorización o concesión.

Objetivo

Asegurar que el servicio de transporte público se preste conforme a Ley y reglamentos, y garantizar la seguridad del usuario.

Estrategia

Coordinar operativos de inspección y vigilancia del servicio de transporte

Líneas de acción

- Realizar operativos en coordinación con las delegaciones de la Dirección de Vialidad y transportes para revisiones electromecánicas y de documentación a unidades, operadores y permisionarios.

4.2. Alineación de las Políticas Públicas del Programa Sectorial con los Objetivos Estatales, Nacionales e Internacionales.

Programa Sectorial Secretaría General de Gobierno, 2017-2021

Políticas públicas

Plan Estatal de Desarrollo.

Plan Nacional de Desarrollo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, ONU.

1. Impulso a la gobernabilidad democrática.

1. Ejercer el Gobierno Abierto.
2. Impulsar la Gobernabilidad Democrática.

1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.



2. Protección de los derechos de las personas.

3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.

2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.



3. Fortalecimiento a la certeza jurídica.

3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.

1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.



4. Normatividad y actos registrales.

3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.

2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.



5. Fomento de la cultura de la legalidad.

3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.

1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.



6. Prevención y atención a la violencia familiar.

3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.

1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.



7. Modernización del transporte público y seguridad vial.

3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.

2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.



CAPÍTULO 5

Programas Presupuestarios

02Gobernación

Secretaría General de Gobierno (SGG)

No.	Sector / Estructura Administrativa	Clasificación Funcional del Gasto (CONAC)			Plan Estatal de Desarrollo				Actividad Institucional
		Finalidad	Función	Subfunción	Eje	Tema	Objetivo	Estrategia	
G151	Programa de Protección Laboral	1 Gobierno	13 Coordinación de la Política de Gobierno	135 Asuntos Jurídicos	V. Gobierno eficiente y transparente	1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho	3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional	3.2 Contribuir a la protección de los derechos de las personas. 3.3 Coadyuvar a la certeza jurídica	022 Atención a la demanda ciudadana en materia jurídica efectuada.
E152	Programa de Asuntos y Asesoría Agraria	1 Gobierno	13 Coordinación de la Política de Gobierno	135 Asuntos Jurídicos	V. Gobierno eficiente y transparente	1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho	3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.	3.2 Contribuir a la protección de los derechos de las personas. 3.3 Coadyuvar a la certeza jurídica	019 Asesorar, canalizar y dirimir los conflictos relativos a procedimientos agrarios.
E153	Asesoría y Representación Jurídica	1 Gobierno	13 Coordinación de la Política de Gobierno	135 Asuntos Jurídicos	V. Gobierno eficiente y transparente	1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho	3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional	3.2 Contribuir a la protección de los derechos de las personas. 3.3 Coadyuvar a la certeza jurídica.	022 Atención a la demanda ciudadana en materia jurídica efectuada.
G154	Programa de Vinculación Ciudadana y Prevención del Alcoholismo	1 Gobierno	17 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	173 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	IV. Seguridad pública y protección civil	1. Seguridad pública integral y participativa	2. Fomentar, coordinar e integrar la participación ciudadana en el desarrollo de acciones preventivas que inhiban las conductas antisociales y factores criminógenos que generan la violencia y la delincuencia, así como para fortalecer la cultura de orden y respeto a la autoridad, la denuncia de los delitos y el fomento de valores cívicos y morales en la ciudadanía.	2.1 Establecer mecanismos de cooperación entre la sociedad y el gobierno, para coordinar su acción integral en la atención de los delitos. 2.3 Desarrollar medidas, acciones y programas para prevenir accidentes, delitos y conductas antisociales	013 Regulación, inspección y solicitud de licencias para producción, consumo y venta de bebidas alcohólicas.

E155	Programa de Seguridad Vial de Sinaloa	1 Gobierno	17 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	173 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	IV. Seguridad pública y protección civil	1. Seguridad pública integral y participativa	2 Fomentar, coordinar e integrar la participación ciudadana en el desarrollo de acciones preventivas que inhiban las conductas antisociales y factores criminógenos que generan la violencia y la delincuencia, así como para fortalecer la cultura de orden y respeto a la autoridad, la denuncia de los delitos y el fomento de valores cívicos y morales en la ciudadanía	2.3 Desarrollar medidas, acciones y programas para prevenir accidentes, delitos y conductas antisociales	008 Vigilancia del sistema de tránsito y vialidad en el Estado.
P158	Planeación de la Política de Buen Gobierno	1 Gobierno	13 Coordinación de la Política de Gobierno	132 Política Interior	V. Gobierno eficiente y transparente	1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho	2. Impulsar la Gobernabilidad Democrática.	2.1 Establecer la coordinación intergubernamental y con organizaciones políticas y ciudadanas, como el eje articulador de las acciones orientadas al desarrollo político, económico y social de la entidad.	005 Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo Estatal con los tres poderes del Estado, así como los asuntos de política interna. 009 Análisis de problemas políticos y sociales que impacten la seguridad interior de la entidad.
E159	Modernización y Operación del Registro Civil	1 Gobierno	18 Otros Servicios Generales	181 Servicios Registrales, Administrativos y Catastrales	V. Gobierno eficiente y transparente	1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho	3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.	3.3. Coadyuvar a la certeza jurídica.	011 Diseño de políticas en materia de Registro Civil, Registro Público, Inspección y Normatividad. 012 Regular, ordenar, supervisar y capacitar a las Oficinas del Registro Civil.
E160	Seguridad Jurídica Registral y Notarial	1 Gobierno	18 Otros Servicios Generales	181 Servicios Registrales, Administrativos y Catastrales	V. Gobierno eficiente y transparente	1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho	3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.	3.3. Coadyuvar a la certeza jurídica. 3.6 Crear un entorno seguro para la movilidad de las personas, salvaguarda y protección de sus vidas y sus bienes.	015 Organizar, dirigir y administrar las oficinas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 020 Regulación de la actividad notarial del Estado
E161	Reformas Legislativas para fortalecer el Orden Jurídico Estatal	1 Gobierno	13 Coordinación de la Política de Gobierno	135 Asuntos Jurídicos	V. Gobierno eficiente y transparente	1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho	3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la	3.3. Coadyuvar a la certeza jurídica.	016 Elaboración y revisión de documentos (proyectos de reglamentos, contratos, convenios,

							solidez institucional.	acuerdos, circulares y demás documentos) en materia jurídica y de transparencia realizadas. 017 Asesorar y representar en materia jurídica al Poder Ejecutivo del Estado, las entidades administrativas, así como sus Organismos Descentralizados respecto de la publicación de decretos u otras disposiciones.	
E162	Periódico Oficial del Estado	1 Gobierno	18 Otros Servicios Generales	183 Servicios de Comunicación y Medios	V. Gobierno eficiente y transparente	1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho	3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.	3.3 Coadyuvar a la certeza jurídica.	021 Impresos y publicaciones oficiales.
P117	Administración Financiera	1 Gobierno	13 Coordinación de la Política de Gobierno	132 Política Interior	V. Gobierno eficiente y transparente	1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho	2. Impulsar la Gobernabilidad Democrática.	2.1 Establecer la coordinación intergubernamental y con organizaciones políticas y ciudadanas, como el eje articulador de las acciones orientadas al desarrollo político, económico y social de la entidad.	004 Previsiones Salariales y Económicas

Entidades Sectorizadas (SGG)

Junta Local de Conciliación y Arbitraje

E163	Resolución de Asuntos Obrero Patronales	1 Gobierno	12 Justicia	121 Impartición de Justicia	V. Gobierno eficiente y transparente	1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho	3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.	3.2 Contribuir a la protección de los derechos de las personas. 3.3 Coadyuvar a la certeza jurídica.	014 Vigilar, tramitar y resolver los conflictos laborales de los tres niveles de gobierno y con el Sector Social y Privado.
------	---	------------	-------------	-----------------------------	--------------------------------------	---	--	--	---

Instituto de la Defensoría Pública del Estado

E164	Programa de Defensoría Pública Gratuita	1 Gobierno	12 Justicia	122 Procuración de Justicia	V. Gobierno eficiente y transparente	1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho	3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.	3.2 Contribuir a la protección de los derechos de las personas. 3.3 Coadyuvar a la certeza jurídica. 022 Atención a la demanda ciudadana en materia jurídica efectuada.	023 Organización, coordinación y supervisión de las funciones de la Defensoría Pública.
------	---	------------	-------------	-----------------------------	--------------------------------------	---	--	---	---

Consejo Estatal de Población

P165	Política de Población	1 Gobierno	13 Coordinación de la Política de Gobierno	137 Población	III. Desarrollo sustentable e infraestructura	1. Desarrollo urbano	1. Alcanzar el desarrollo regional y urbano en la entidad que fortalezca y resguarde la vocación del territorio con pleno respeto al medio ambiente y los recursos naturales	1.1 Establecer procesos de planeación de largo plazo con visión integral al desarrollo regional y sustentable.	024 Planeación demográfica, determinación y conducción de la política de población del Estado.
------	-----------------------	------------	--	---------------	---	----------------------	--	--	--

Archivo Histórico General del Estado

E166	Modernización y Operación del Archivo Histórico	1 Gobierno	13 Coordinación de Política de Gobierno	133 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	V. Gobierno eficiente y transparente	2. Gobierno digital, innovador y competitivo	1. Impulsar la eficiencia, innovación y mejora continua en las instituciones públicas.	1.3 Mejorar la eficiencia en la gestión pública.	025 Resguardo de documentos y vestigios del histórico estatal.
------	---	------------	---	---	--------------------------------------	--	--	--	--

Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar

E167	Atención a Víctimas de Violencia Familiar	1 Gobierno	12 Justicia	124 Derechos Humanos	V. Gobierno eficiente y transparente	1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho	3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.	3.4 Promover políticas públicas orientadas a prevenir y atender la violencia familiar.	026 Brindar atención y prevención de la violencia familiar y de género.
------	---	------------	-------------	----------------------	--------------------------------------	---	--	--	---

Delegación de Relaciones Exteriores

E169	Programa de Documentación para la Seguridad Consular	1 Gobierno	18 Otros Servicios Generales	181 Servicios Registrales, Administrativos y Catastrales	V. Gobierno eficiente y transparente	1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho	3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.	3.3 Coadyuvar a la certeza jurídica.	028 Regulación de los trámites consulares y relaciones con el extranjero.
------	--	------------	------------------------------	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------	---

Coordinación General de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa

E170	Coordinación de la Seguridad Pública	1 Gobierno	17 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	174 Sistema Nacional de Seguridad Pública	IV. Seguridad pública y protección civil	1. Seguridad pública integral y participativa	1. Brindar a la sociedad instituciones de seguridad pública eficaces y confiables, con los recursos humanos necesarios y bien capacitados, debidamente organizadas y equipadas para que, mediante acciones coordinadas con las autoridades federales, estatales y municipales,	1.1 Lograr la consolidación de las instituciones de seguridad pública. 1.2 Consolidar la carrera policial y diseñar programas integrales de capacitación continua y especializada. 1.3 Modernizar e incrementar la infraestructura disponible para la operación de los cuerpos de seguridad pública	093 Definir, conducir y coordinar las políticas de seguridad para protección de la integridad de los ciudadanos.
------	--------------------------------------	------------	---	---	--	---	--	---	--

garanticen la tranquilidad y el desarrollo armónico de la entidad, salvaguardando la integridad y patrimonio de los sinaloenses

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

E171	Protección y Desarrollo Integral de la Infancia	2	26 Protección Social	268 Otros Grupos Vulnerables	II. Desarrollo humano y social	1. Desarrollo social	1. Alcanzar, en un clima de libertad y convivencia plena, una sociedad con igualdad de oportunidades, incluyente, que permita que todas las personas tengan las mismas posibilidades de desplegar sus iniciativas de superación y progreso	1.2 Impulsar el desarrollo integral, basado en la satisfacción de las carencias de los diversos grupos vulnerables, en condiciones de igualdad de oportunidades, justicia y libertad de derechos para todos los sinaloenses.	124 Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa a grupos.
------	---	---	----------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	--	--

Entidades Públicas Descentralizadas (SGG)

Instituto Sinaloense de las Mujeres

E172	Programa de Fomento y Consolidación de la Equidad de Género	Gobierno	1 13 Coordinación de la Política de Gobierno	139 Otros	II. Desarrollo humano y social	8. Igualdad sustantiva	3. Generar condiciones para el empoderamiento de las mujeres, a través de acciones orientadas a su desarrollo económico, político, social y cultural.	3.1 Fomentar el acceso pleno de las mujeres a los mecanismos para su desarrollo económico.	217 Mujeres en el ejercicio de sus derechos.
E173	Únete para poner fin a la violencia contra las Mujeres	1 Gobierno	13 Coordinación de la Política de Gobierno	139 Otros	II. Desarrollo humano y social	8. Igualdad sustantiva	2 Fortalecer los mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.	2.1 Promover medidas especiales de carácter temporal para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y evitar la discriminación de género. 2.2 Coordinar la política estatal de prevención, atención y sanción para la erradicación de la violencia contra las mujeres.	026 Brindar atención y prevención de la violencia familiar y de género 217 Mujeres en el ejercicio de sus derechos

Sinaloa "Red Plus"

E174	Impulsar la modernización del Transporte Público y fomentar la Movilidad Sustentable	3 Desarrollo Económico	35 Transporte	356 Otros Relacionados con Transporte	III Desarrollo sustentable e infraestructura	4 Transporte y movilidad	1. Aprovechar la vocación multimodal de transporte y la movilidad de Sinaloa, mediante un modelo de movilidad estratégica de infraestructura, equipamiento y logística de largo plazo, aplicado al territorio y a las ciudades del Sistema Urbano Estatal (SUE).	1.1 Establecer un modelo de movilidad estratégica para Sinaloa de infraestructura, equipamiento y logística de largo plazo, basado en la plataforma del estudio de la ONG MAPASIN, denominado Plan Conecta, para establecer un instrumento de gestión de movilidad estratégica para el estado, de acuerdo con la vocación de sus regiones	218 Transporte público eficiente.
------	--	------------------------	---------------	---------------------------------------	--	--------------------------	--	---	-----------------------------------

Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa

E175	Protección Civil y Prevención de Desastres	1 Gobierno	17 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	172 Protección Civil	IV Seguridad pública y protección civil	2 Protección civil	1. Fomentar la acción preventiva en la Gestión Integral de Riesgos para disminuir los efectos de fenómenos naturales perturbadores. 2. Fortalecer la cultura de la protección civil mediante la participación social y la vinculación estatal y municipal	1.1 Inducir el enfoque preventivo en las actividades de los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil. 2.1 Desarrollar acciones que impulsen la participación social y sectorial en protección civil.	219 Protección y resguardo a la ciudadanía en situación de riesgo y alto impacto.
------	--	------------	---	----------------------	---	--------------------	--	--	---

CAPÍTULO 6.

Indicadores para el Seguimiento y Evaluación del Programa

6.1 Indicadores estratégicos

INDICADOR	DATO MÁS RECIENTE	FUENTE	Meta 2017-2021
Índice de Participación Cívica y Política	6.18 (2014) 20 lugar nacional	OCDE, con base en datos de INEGI Módulo De Bienestar Auto-reportado http://www.beta.inegi.org.mx/app/bienestar/?ag=25	Aumentar de 6.18 a 8.18 el Índice de Participación Cívica y Política.
Tasa de mortalidad por lesiones causadas por el tránsito vehicular	23.6 (2014) 3er. Lugar nacional	Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. <i>Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2015.</i>	Reducir en 50% la tasa de mortalidad por lesiones causadas por accidentes de tránsito.
Porcentaje de registro de nacimiento	97.8 (2009-2013) 5° lugar nacional	INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014.	Mantener a Sinaloa entre las primeras 5 entidades federativas por su cobertura de registro de nacimiento.
Satisfacción general con trámites en el Registro Civil	79.9 (2015) 12 lugar nacional	INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015.	Posicionar a Sinaloa entre las primeras 10 entidades federativas respecto al nivel de satisfacción de la población con los trámites realizados en el Registro Civil.
Satisfacción general con los trámites vehiculares	50.4 (2015)	INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015.	Incrementar en 8 puntos porcentuales el nivel de satisfacción de la población de 18 años y más con los trámites vehiculares realizados, para ubicarse en 58.4 puntos.
Grado de satisfacción con el tiempo destinado a la realización de trámites vehiculares	47.5 (2015)	INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015.	Aumentar en 7 puntos porcentuales el grado de satisfacción de la población de 18 años y más, con el tiempo destinado a la realización de trámites vehiculares, para ubicarse en 54.5 puntos.

INDICADOR	DATO MÁS RECIENTE	FUENTE	Meta 2017-2021
Calificación al servicio público de transporte urbano	6.2 (2015) 4° lugar nacional	INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015.	Situar a Sinaloa entre las tres primeras entidades federativas en el nivel de calificación que la población de 18 años y más en áreas urbanas de 100 mil habitantes o más, le otorga al servicio de transporte público tipo autobús urbano.
Grado de Satisfacción con el servicio de transporte público	42.6 (2015) 4° lugar nacional	INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015.	Ubicar a Sinaloa entre las tres primeras entidades federativas en cuanto al porcentaje de la población de 18 años y más que está muy satisfecha y satisfecha con el servicio de transporte público.
Porcentaje de mujeres que han sufrido al menos un incidente de violencia.	59.1 (2016) 23 lugar nacional	INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016.	Reducir la prevalencia de violencia contra las mujeres en 5 puntos porcentuales, para ubicarse en 54.1%, entre las tres entidades con el menor índice.

6.2 Indicadores de Gestión (diseñados al interior para medir el desempeño).

Política 1. Impulso a la gobernabilidad democrática

Instrumento 1.1 Ejercer el Gobierno Abierto		
Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de reuniones con organismos ciudadanos solicitantes de alguna gestión o servicio gubernamental.	NOSGSGR. Número de organismos ciudadanos solicitantes de alguna gestión o servicio gubernamental registrados. NOSGSGA. Número de organismos ciudadanos solicitantes de alguna gestión o servicio gubernamental atendidos. $I_1 = (NOSGSGA / NOSGSGR) \times 100$	100%

Responsable: Dirección de Gobierno, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 1.2 Marco jurídico estatal de vanguardia en concordancia con la legislación federal		
Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas.	NILEP. Número de iniciativas de ley por el ejecutivo presentadas. NILECA. Número de iniciativas de ley del ejecutivo por el Congreso aprobadas. $I_2 = (NILECA / NILEP) \times 100$	100%

Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 1.3 Convenios de colaboración con los distintos ámbitos de gobierno para facilitar la cooperación y atención de las demandas sociales.		
Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de convenios administrativos de coordinación y colaboración signados.	NCAS. Número de convenios administrativos suscritos NCAP. Número de convenios administrativos propuestos $I_3 = (NCAS / NCAP) \times 100$	100%

Responsable: Dirección de Gobierno, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 1.4 Reuniones de trabajo con líderes de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, empresarios, grupos de la sociedad organizada y p para fomentar mecanismos de cooperación y análisis de diversos temas.

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de reuniones de trabajo para la cooperación política.	NRTPC. Número reuniones de trabajo para la cooperación política celebradas NRTPP. Número de reuniones de trabajo para la cooperación política programadas. $I_t = (NRTPC / NRTPP) \times 100$	90%

Responsable: Despacho del C. Secretario, Secretaría General de Gobierno.

Política 2. Protección de los derechos de las personas

Instrumento 2.1 Respetar los derechos y garantías de las personas

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos realizadas.	CDHR. Capacitaciones en materia de derechos humanos realizadas. CDHP. Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas. $I_t = (CDHR / CDHP) \times 100$	100%

Responsable: Dirección de Derechos Humanos, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 2.2 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa y su reglamento

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de Sistemas Estatal y Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes implementados.	NSIPINNAI. Número de Sistemas Estatal y Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes implementados. NSIPINNAP. Número de Sistemas Estatal y Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes programados. $I_t = (NSIPINNAI / NSIPINNAP) \times 100$	100%

Responsable: Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Sinaloa, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 2.3 El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa (SIPINNA).

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de acciones en materia de protección de niñas, niños y adolescentes realizadas.	NAPNNAR. Número de acciones en materia de protección de niñas, niños y adolescentes realizadas. NAPNNAS. Número de acciones en materia de protección de niñas, niños y adolescentes solicitadas. $I_t = (NAPNNAR / NAPNNAS) \times 100$	100%

Responsable: Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Sinaloa, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 2.4 Alianza por una Niñez sin Violencia, con apoyo de UNICEF, organismos internacionales, sector empresarial, sociedad civil y academia.

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de acciones de difusión y sensibilización sobre los derechos de la niñez y la adolescencia.	NADSDNAR. Número de acciones de difusión y sensibilización sobre los derechos de la niñez y la adolescencia realizadas. NADSDNAP. Número de acciones de difusión y sensibilización sobre los derechos de la niñez y la adolescencia programadas. $I_t = (NADSDNAR / NADSDNAP) \times 100$	100%

Responsable: Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Sinaloa, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 2.5 Consulta de niñas, niños y adolescentes con el fin de allegarse datos sobre los ejes rectores de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como son: supervivencia, desarrollo, participación y protección.

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de consultas a niños, niñas y adolescentes para constituir sistema de información.	NCNNAR. Número de consultas a niñas, niños y adolescentes realizadas NCNNAP. Número de consultas a niñas, niños y adolescentes programadas. $I_t = (NCNNAR / NCNNAP) \times 100$	95%

Responsable: Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Sinaloa, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 2.6 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA)

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de acciones de sensibilización dirigidas a jóvenes sobre el uso correcto de métodos anticonceptivos de prevención de embarazo y de prevención de infecciones de transmisión sexual.	NASJPEyPIR. Número de acciones de sensibilización dirigidas a jóvenes sobre el uso correcto de métodos anticonceptivos de prevención de embarazo y de prevención de infecciones de transmisión sexual realizadas. NASJPEyPIP. Número de acciones de sensibilización dirigidas a jóvenes sobre el uso correcto de métodos anticonceptivos de prevención de embarazo y de prevención de infecciones de transmisión sexual programadas. $I_t = (NASJPEyPIR / NASJPEyPIP) \times 100$	90%
Porcentaje de talleres sobre derechos sexuales y reproductivos a adolescentes.	NTDSRAI. Número de Talleres sobre derechos sexuales y reproductivos a adolescentes impartidos. NTDSRAP. Número de Talleres sobre derechos sexuales y reproductivos a adolescentes programados. $I_t = (NTDSRAI / NTDSRAP) \times 100$	

Responsable: Consejo Estatal de Población, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 2.7 Programa de la Dirección del Trabajo y Previsión Social para la Erradicación del Trabajo Infantil en Sinaloa.

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de inspecciones realizadas de la Dirección del Trabajo y Previsión Social	NIRDTYPSR. Número de inspecciones de la Dirección del Trabajo y Previsión Social realizadas. NIRDTYPSP. Número de inspecciones de la Dirección del Trabajo y Previsión Social Programadas. $I_t = (NIRDTYPSR / NIRDTYPSP) \times 100$	100%

Responsable: Dirección del Trabajo y Previsión Social, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 2.8 Programa de la Dirección del Trabajo y Previsión Social "Conoce tus prestaciones laborales".

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de acciones realizadas de la Dirección del Trabajo y Previsión Social "Conoce tus prestaciones laborales"	NACPLDTPSR. Número de acciones "Conoce tus prestaciones laborales" de la Dirección del Trabajo y Previsión Social realizadas. NACPLDTPSP. Número de acciones "Conoce tus prestaciones laborales" de la Dirección del Trabajo y Previsión Social programadas. $I_t = (NACPLDTPSR / NACPLDTPSP) \times 100$	100%

Responsable: Dirección del Trabajo y Previsión Social, Secretaría General de Gobierno.

Política 3. Fortalecimiento de la certeza jurídica

Instrumento 3.1 Programas del Instituto de la Defensoría Pública		
Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de servicios jurídicos gratuitos del Instituto de la Defensoría Pública otorgados.	NSJGIDPO. Número de servicios jurídicos gratuitos del Instituto de la Defensoría Pública otorgados. NSJGIDPR. Número de servicios jurídicos gratuitos del Instituto de la Defensoría Pública requeridos. $I_i = (NSJGIDPO / NSJGIDPR) \times 100$	100%

Responsable: Instituto de la Defensoría Pública, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 3.2 Foros, seminarios y cursos para fortalecer la defensoría pública en el Instituto		
Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de capacitaciones en materia de defensoría pública desarrolladas.	NCRDP. Número de capacitaciones realizadas en materia de defensoría pública. NCPDP. Número de capacitaciones programadas en materia de defensoría pública. $I_i = (NCRDP / NCPDP) \times 100$	100%

Responsable: Instituto de la Defensoría Pública, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 3.3 Instrumentos en materia agraria		
Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de conflictos agrarios resueltos.	NCRTP. Número de conflictos en relación con la tenencia de la tierra planteados. NCRTR. Número de conflictos en relación con la tenencia de la tierra resueltos. $I_i = (NCRTR_n / NCRTP_n) \times 100$	50%

Responsable: Dirección de Asuntos Agrarios, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 3.4 Programa actualizado de Registro local de aviso de testamento, Implementar un programa estatal de rezago y actualización de inspecciones generales, Implementar un programa de digitalización de bases de datos de los libros notariales.		
Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de inspecciones a notarías realizadas.	NINR. Número de inspecciones a notarías realizadas. NINP. Número de inspecciones a notarías programadas. $I_i = (NINR / NINP) \times 100$	80%

Responsable: Dirección del Archivo General de Notarías, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 3.5 El cambio de paradigma y proyecto de traslado de la jurisdicción y competencia de conflictos laborales al Poder Judicial del Estado.

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de avance del Proyecto para el traslado de la jurisdicción y competencia de conflictos laborales al Poder Judicial del Estado implementado.	PTJCCLPJI. Proyecto para el traslado de la jurisdicción y competencia de conflictos laborales al Poder Judicial del Estado implementado.	
Porcentaje de avance del Proyecto para el traslado de la jurisdicción y competencia de conflictos laborales al Poder Judicial del Estado elaborado.	PTJCCLPJE. Proyecto para el traslado de la jurisdicción y competencia de conflictos laborales al Poder Judicial del Estado elaborado.	100%
	$I_1 = (PTJCCLPJI / PTJCCLPJE) \times 100$	

Responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, Secretaría General de Gobierno.

Política 4. Normatividad e Información Registral

Instrumento 4.1 Modernización Integral del Registro Civil

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de oficinas del Registro Civil modernizadas.	NORCM. Número oficinas del registro civil modernizadas.	
	NORCRET. Número de oficinas del registro civil con rezagos en equipamiento y tecnología.	100%
	$I_1 = (NORCM / NORCRET) \times 100$	

Responsable: Dirección de Registro Civil, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 4.2 Programa de inspecciones y supervisiones de vigilancia de restaurantes, bares, cantinas y centros nocturnos

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de inspecciones y supervisiones de vigilancia de restaurantes, bares, cantinas y centros nocturnos.	NISVRBCCNR. Número de inspecciones y supervisiones de vigilancia de restaurantes, bares, cantinas y centros nocturnos realizadas.	
	NISVRBCCNP. Numero de inspecciones y supervisiones de vigilancia de restaurantes, bares, cantinas y centros nocturnos programadas.	100%
	$I_1 = (NISVRBCCNR / NISVRBCCNP) \times 100$	

Responsable: Dirección de Inspección y Normatividad, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 4.3 Programa de inspecciones y supervisiones de vigilancia de restaurantes, bares, cantinas y centros nocturnos

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de Foros y pláticas con alumnos de educación media superior y superior de escuelas públicas y privadas pretenden desestimular el consumo de bebidas con contenido de alcohol.	NFPAEMSSEPYPR. Número de Foros y pláticas con alumnos de educación media superior y superior de escuelas públicas y privadas realizados. NFPAEMSSEPYPP. Número de Foros y pláticas con alumnos de educación media superior y superior de escuelas públicas y privadas programados. $I_t = (NISVRBCCNR / NISVRBCCNP) \times 100$	100%

Responsable: Dirección de Inspección y Normatividad, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 4.4 Convenio de Coordinación entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, y el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, en materia del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Indicador	Fórmula	Meta
Nuevo Sistema de Gestión Registral; integrado e implementado.	NSGRI. Nuevo Sistema de Gestión Registral integrado e implementado. $I_t = NSGRI$	1

Responsable: Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 4.6 Ley del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria

Indicador	Fórmula	Meta
Proyecto de reformas al marco normativo en materia de mejora regulatoria elaborado.	PRMNMRE. Proyecto de reformas al marco normativo en materia de mejora regulatoria elaborado. $I_t = PRMNMRE$	1

Responsable: Despacho del C. Secretario, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 4.7 Plan Estatal de Simplificación Administrativa y Regulatoria (PESAR)

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de trámites y servicios en línea de la Secretaría General de Gobierno implementados.	NTSLSGGI. Número de trámites y servicios en línea de la Secretaría General de Gobierno implementados.	100%
Secretaría General de Gobierno implementados.	NTSLSGGP. Número de trámites y servicios en línea de la Secretaría General de Gobierno proyectados. $I_t = (NTSLSGGP / NTSLSGGP) \times 100$	

Responsable: Despacho del C. Secretario, Secretaría General de Gobierno.

Política 5. Fomento a la cultura de la legalidad**Instrumento 5.1 Ley de Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad del Estado de Sinaloa.**

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de campañas de difusión y sensibilización a la población sobre la importancia de apearse al fomento de valores, formación cívica y cultura de la legalidad, realizadas.	NCDSFVFCyCLR. Número de campañas de difusión y sensibilización a la población sobre la importancia de apearse al fomento de valores, formación cívica y cultura de la legalidad, realizadas.	100%
Porcentaje de campañas de difusión y sensibilización a la población sobre la importancia de apearse al fomento de valores, formación cívica y cultura de la legalidad, programadas.	NCDSFVFCyCLP. Número de campañas de difusión y sensibilización a la población sobre la importancia de apearse al fomento de valores, formación cívica y cultura de la legalidad, programadas. $I_t = (NCDSFVFCyCLR / NCDSFVFCyCLP) \times 100$	

Responsable: Subsecretaría de Gobierno, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 5.2 Programas de enseñanza y difusión de los valores cívicos en escuelas de educación básica y media del estado y para la población en general.

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de programas de enseñanza y difusión de los valores cívicos implementados.	NPEDVCI. Número de programas de enseñanza y difusión de los valores cívicos implementados.	100%
Porcentaje de programas de enseñanza y difusión de los valores cívicos diseñados.	NPEDVCD. Número de programas de enseñanza y difusión de los valores cívicos diseñados. $I_t = (NPEDVCI / NPEDVCD) \times 100$	

Responsable: Consejo Estatal de Población, Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Secretaría General de Gobierno.

Política Pública 6. Prevención y atención de la violencia familiar

Instrumento 6.1 Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)		
Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo creados.	NMAIMSRC. Número módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo creados. NMAIMSRP. Número módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo proyectados. $I_i = (NMAIMSRC / NMAIMSRP) \times 100$	100%

Responsable: Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 6.2 Campañas de difusión y sensibilización sobre las herramientas con las que se cuenta para prevenir y atender la violencia familiar.		
Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de acciones de difusión y sensibilización sobre las herramientas con las que se cuenta para prevenir y atender la violencia familiar realizadas.	NADSHPAVFR. Número de acciones de difusión y sensibilización sobre las herramientas con las que se cuenta para prevenir y atender la violencia familiar realizadas. NADSHPAVFP. Número de acciones de difusión y sensibilización sobre las herramientas con las que se cuenta para prevenir y atender la violencia familiar programadas. $I_i = (NADSHPAVFR / NADSHPAVFP) \times 100$	100%

Responsable: Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 6.3 Convenio de colaboración entre el Instituto Sinaloense de la Mujeres (ISMUJERES), el CEPAVIF y SIPINNA.		
Indicador	Fórmula	Meta
Convenio de colaboración entre el ISMUJERES, el CEPAVIF y SIPINNA.	CCICS Convenio de colaboración entre el ISMUJERES, el CEPAVIF y SIPINNA. $I_i = CCICS$	1

Responsable: Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 6.4 Programa para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado			
Indicador		Fórmula	Meta
Servicios de orientación psicológica y jurídica de manera conjunta proporcionados.	NSOPJCP. Número de servicios de orientación psicológica y jurídica de manera conjunta proporcionados.		100%
	NSOPJCSO. Número de Servicios de orientación psicológica y jurídica de manera conjunta solicitados u ofrecidos.		
		$I_i = (NSOPJCP / NSOPJCSO) \times 100$	

Responsable: Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 6.5 Centro de Justicia para las Mujeres (CJM)			
Indicador		Fórmula	Meta
Porcentaje de servicios integrales en el Centro de Justicia para las Mujeres proporcionados.	NSICJMP. Número de servicios integrales en el Centro de Justicia para las Mujeres proporcionados.		100%
	NSICJMS. Número de servicios integrales en el Centro de Justicia para las Mujeres solicitados.		
		$I_i = (NSICJMP / NSICJMS) \times 100$	

Responsable: Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 6.6 Centros de Atención a Víctimas de Violencia Familiar (CAVVF)			
Indicador		Fórmula	Meta
Porcentaje de mujeres víctimas del delito de violencia familiar de riesgo alto y extremo, sus hijas e hijos menores de 12 años, en los CAVVF resguardadas.	NMVDVFR. Número de mujeres víctimas del delito de violencia familiar de riesgo alto y extremo, sus hijas e hijos menores de 12 años, en los CAVVF resguardadas.		100%
	NMVDVFD. Número de mujeres víctimas del delito de violencia familiar de riesgo alto y extremo, sus hijas e hijos menores de 12 años, detectadas.		
		$I_i = (NMVDVFR / NMVDVFD) \times 100$	

Responsable: Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Secretaría General de Gobierno.

Política Pública 7. Modernización del transporte público y seguridad vial**Instrumento 7.1 Programa de reordenamiento y modernización del transporte público en las principales ciudades del estado.**

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de proyectos de ingeniería de tránsito y transporte implementados.	NPITTI. Número de proyectos de ingeniería de tránsito y transporte implementados. NPITTD. Número de proyectos de ingeniería de tránsito y transporte desarrollados. $I_i = (NPITTI / NPITTD) \times 100$	80%

Responsable: Dirección de Vialidad y Transportes, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 7.2 Programa de educación vial y de seguridad para la prevención de accidentes de tránsito.

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de acciones de capacitación de promotores ciudadanos para la participación social en la educación vial de niños y jóvenes desarrolladas.	NACPCEVD. Número de acciones desarrolladas para la participación social en la educación vial de niños y jóvenes. NAPSEVNJP. Número de acciones para la participación social en la educación vial de niños y jóvenes programadas. $I_i = (NACPCEVD / NAPSEVNJP) \times 100$	100%

Responsable: Dirección de Vialidad y Transportes, Secretaría General de Gobierno.

Instrumento 7.3 Operativos de revisión contra vehículos que dan servicio de transporte público colectivo de pasajeros y de carga en general.

Indicador	Fórmula	Meta
Porcentaje de operativos de inspección al servicio de transporte, realizados.	NOISTR. Número operativos de inspección al servicio de transporte, realizados. NOISTP. Número operativos de inspección al servicio de transporte, programados. $I_i = (NOISTR / NOISTP) \times 100$	100%

Responsable: Dirección de Vialidad y Transportes, Secretaría General de Gobierno.

6.3 Mecanismos de Seguimiento y Evaluación

La innovación de la gestión pública del gobierno de Quirino Ordaz Coppel se constituye principalmente en la implementación de un proceso de mejora continua, o gestión de nuevo cuño, con relación directa a tres ámbitos y que se complementan entre sí: el servicio público que prestan las áreas, secretarías y dependencias; el proceso operativo del Programa, y la organización interna o proceso de gestión de cada secretaría, en este caso particular, la propia Secretaría General de Gobierno.

La evaluación es un proceso complejo mediante el cual se debe determinar lo siguiente:

- a) si se están alcanzando los objetivos del Programa Sectorial; por qué, o por qué no; si los objetivos son realistas, es decir si el problema se había definido o diagnosticado correctamente al principio del Programa, y en caso negativo por qué;
- b) cómo podría el Programa en curso responder mejor a las necesidades de la Secretaría y subsecretarías que la componen, incluyendo direcciones, así como algunos organismos sectorizados, excluyendo al Instituto Sinaloense de las Mujeres y al Instituto Estatal de Protección Civil, que tienen sus propios programas sectoriales.
- c) el impacto de la introducción de nuevos elementos o componentes determinantes del Programa;

Gran parte de los datos que se utilizan en el proceso de evaluación deberán recolectarse durante el seguimiento, para que los evaluadores puedan acopiar más información para corroborarla con los datos ya disponibles.

La evaluación se debe realizar en momentos clave durante la ejecución del Programa. Es decir, se deberá realizar a intervalos anuales durante la fase previa a la entrega de los informes oficiales del Ejecutivo al H. Congreso del Estado.

El diseño, formulación e implementación del seguimiento y evaluación estará a cargo de un equipo interdisciplinario conformado por un Comité de Seguimiento y Evaluación. Asimismo, el proceso de evaluación involucra a una diversidad de protagonistas, entre los que se incluyen servidores públicos, directores de área y miembros destacados de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Los resultados deben resultar valiosos para la toma de decisiones de los responsables del Programa, y deben repercutir en una serie de cambios en la implementación del mismo. Los informes evaluativos deberán ser publicados y socializados tanto entre los sectores sociales y productivos, como entre los ciudadanos en general a través de los medios de comunicación social.

La evaluación debe permitir "comprobar" que es posible y valioso emprender un proceso participativo, interinstitucional e interdisciplinario de evaluación de una política pública, incluyendo tanto en el diseño como en la implementación, a la pluralidad de actores relacionados con la política.

Un sistema de seguimiento y evaluación funcional es un componente crucial de un buen mecanismo de gestión y rendición de cuentas de programas. Un proceso de seguimiento y evaluación oportuno y confiable brinda información que permite:

- Fundamentar la ejecución del programa con informes exactos y basados en pruebas, que proporcionan datos a los responsables de la gestión y de la adopción de decisiones de modo que dirijan la intervención y mejoren sus resultados;
- Contribuir al aprendizaje institucional y a la difusión de conocimientos al compartir y reflexionar sobre las experiencias y enseñanzas de modo que podamos extraer óptimo provecho de lo que hacemos y cómo lo hacemos;
- Velar por la rendición de cuentas y el cumplimiento de los objetivos del Programa.

Atención directa	Servicios multidisciplinarios otorgados a personas receptoras de violencia familiar que acuden a CEPAMIF	Servicios multidisciplinarios otorgados a personas receptoras de violencia familiar
Línea de emergencia 911	Personas receptoras de violencia familiar que solicitan auxilio al servicio de emergencias reciben apoyo policial, psicológico, jurídico y de gestiones sociales de manera inmediata con el fin de poner fin a la agresión que se reporta en el momento	Servicios multidisciplinarios otorgados a personas receptoras de violencia familiar a través de línea de emergencia
Albergue	Mujeres receptoras de violencia familiar que solicitan el servicio de albergue reciben resguardo temporal y los servicios multidisciplinarios de manera gratuita con el fin de fortalecer su autonomía y empoderamiento para que pueda vivir una vida libre de violencia	Servicios multidisciplinarios otorgados a personas receptoras de violencia familiar resguardadas en albergue temporal Gestiones médicas otorgadas a mujeres albergadas de manera temporal sus hijas e hijos. Cursos de capacitación otorgada al personal asignado al albergue para especialización y profesionalización de los servicios que se prestan.
Vinculación interinstitucional	Coordinación de acciones preventivas y de atención con las instancias que integran el consejo para beneficio de las personas en situación de riesgo	Acciones de vinculación interinstitucional realizadas a través de la dirección institucional para generar estrategias preventivas y de atención a la violencia familiar. Cursos, talleres y conferencias proporcionadas para dar a conocer acciones preventivas de la violencia familiar. Capacitación otorgada a personal del Consejo para la especialización y mejora de los servicios que brinda.

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AVGM Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

APE Administración Pública Estatal

BANAVIM Banco Nacional de Datos de Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

CEDAW Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CJM Centros de Justicia para las Mujeres

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos

CEPAVIF Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CONAPO Consejo Nacional de Población

COESPO Consejo Estatal de Planeación

CONAPRED Consejo Nacional de para Prevenir la Discriminación

CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ENADIS Encuesta Nacional sobre Discriminación en México

ENAFI Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil

ENAPEA Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

ENCUP Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas

ENDIREH Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las relaciones en los Hogares

ENVIM Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres

ENVIPE Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

FODA/DAFO fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres

- ISMUJERES** Instituto Sinaloense de las Mujeres
- LGAMVLV** Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
- OCDE** Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
- OEA** Organización de Estados Americanos
- OIT** Organización Internacional del Trabajo
- ONG** Organización no Gubernamental
- ONU** Organización de las Naciones Unidas
- OPIs** Oficiales de Protección a la Infancia
- OSC** Organizaciones de la Sociedad Civil
- PIPASEVM** Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- PND** Plan Nacional de Desarrollo
- PED** Plan Estatal de Desarrollo
- PNDH** Programa Nacional de Derechos Humanos
- PNP** Programa Nacional de Población
- PNPED** Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación
- PROIGUALDAD** Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.
- RENAPO** Registro Nacional de Población
- SIPINNA** Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
- UDDH** Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos
- UNICEF** Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- UNIFEM** Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer